



LUZ ENTRE SOMBRA

Logros de
Bolivia en
su camino al
Bicentenario

Lykke Andersen • Ricardo Nogales
Editores

LUZ ENTRE SOMBRAS:
Logros de Bolivia en su camino
al Bicentenario

© 2025 por la UPB. Todos los derechos reservados bajo las convenciones internacionales de derechos de autor. La reproducción de este texto está autorizada en tirajes cortos y para fines de estudio en programas académicos en países de América Latina y el Caribe, citando la fuente.

Luz entre sombras:

Logros de Bolivia en su camino al Bicentenario

Primera Edición. 154 p.

© 2025 para la presente edición por UPB,

UPB Ediciones.

Cochabamba, diciembre de 2025

Luz entre sombras:

Logros de Bolivia en el camino al Bicentenario

Primera Edición. 154 p.

Hecho el Depósito Legal: 2-1-7548-2025

ISBN: 978-9917-9754-6-5

© UPB

Campus Julio León Prado

Avenida Juan Pablo II

Colcapirhua, Cochabamba, Bolivia

Diagramación: Lic. Isabel Rocío Avilés Jiménez

Diseño de cubierta e ilustración: Alejandra Paola Arteaga Orellana

Blanca Zulema Ugalde Sioux

Coordinación editorial y gráfica: Mgr. Alejandra Guardia-Manzur

TABLA DE CONTENIDO

Prólogo Oscar Molina Tejerina, Ph.D.	7
Introducción Lykke E. Andersen y Ricardo Nogales	9
Biografía de los autores	11
Capítulo 1 Pobreza en Bolivia: Logros y desafíos en perspectiva monetaria y multidimensional Ricardo Nogales	17
Capítulo 2 Revolución gastronómica en Bolivia: el food design como estrategia para el crecimiento económico Alejandra Guardia-Manzur y Andrés Laguna-Tapia	31
Capítulo 3 Educación en planificación familiar en Bolivia: Pilar para la reducción de la mortalidad materna e infantil y el desarrollo sostenible Pamela Córdova	43
Capítulo 4 Movilidad Social Educativo en Bolivia: 1997-2021 Lykke E. Andersen	61
Capítulo 5 Avances hacia la igualdad de género en Bolivia: Logros excepcionales y retos pendientes Lykke E. Andersen	81
Capítulo 6 Patrimonio cultural boliviano, patrimonio cultural mundial Andrés Laguna-Tapia y Alejandra Guardia-Manzur	99
Capítulo 7 Accesibilidad urbana hecha a mano: El modelo boliviano de ciudades cercanas Juan E. Cabrera y Mario Torrez	113
Capítulo 8 Política exterior boliviana y “Diplomacia de los Pueblos”: logros históricos y desafíos presentes Oscar Gracia, Rebeca Huarachi y Jazmín Nuñez	137

PRÓLOGO

Oscar Molina Tejerina, Ph.D.
Rector de la UPB

En el umbral del Bicentenario, Bolivia se asoma a una encrucijada histórica en la que se debe repensar su modelo de desarrollo y definir con lucidez el rumbo de su futuro. Es tiempo de mirar atrás para celebrar dos siglos de independencia —reconociendo nuestras luces y sombras—, pero también, y sobre todo, de mirar hacia adelante para imaginar un país sostenible, inclusivo y competitivo.

Este libro, fruto del riguroso trabajo académico de la UPB, se presenta como un testimonio fundamental en este debate. Frente a las profundas tensiones de la coyuntura —marcadas por el agotamiento del modelo extractivo, la fragilidad fiscal y la ola migratoria—, este volumen ofrece una mirada crítica pero también esperanzadora, rescatando y documentando los avances notables y a menudo silenciosos que se han gestado en el país.

La estructura de esta obra es en sí misma una declaración de estas intenciones, pues los capítulos se articulan directa o indirectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, reconocidos globalmente como un mapa esencial para construir el futuro. Mediante este marco, el libro documenta logros tangibles en áreas clave, tales como la reducción histórica del 60% en la pobreza multidimensional (ODS 1), el liderazgo regional en movilidad social educativa (ODS 4), los avances en igualdad de género (ODS 5), y el papel transformador del patrimonio cultural y la revolución gastronómica como motores de desarrollo económico sostenible (ODS 8).

A través de este libro, la UPB reafirma su compromiso inquebrantable con la excelencia académica y con el desarrollo de Bolivia. El modelo de nuestra Universidad integra la investigación, la innovación tecnológica y la formación ética, impulsando el pensamiento crítico y el uso transversal del conocimiento. Formamos profesionales capaces de generar un impacto positivo y de contribuir, siendo críticos pero con visión y liderazgo, al porvenir del país. Esta vocación se refleja en las páginas de este libro, donde la investigación se pone al servicio del bienestar común y la ciencia se convierte en un instrumento activo para construir futuro. En esta obra confluyen la mirada rigurosa de la academia y la esperanza de una sociedad que cree firmemente en su capacidad de transformarse y progresar.

El libro también pone en valor las decenas de récords mundiales que Bolivia ha alcanzado, reflejando las singulares capacidades naturales, la creatividad desbordante y el orgullo de su gente. No se trata solo de conmemorar una fecha, sino de reflexionar profundamente

sobre el país que anhelamos ser en los próximos cien años. Su realización depende, ante todo, de nuestra voluntad nacional de aprender, innovar y cooperar.

La UPB reitera así su compromiso con Bolivia. Estamos siempre listos a contribuir, desde el conocimiento, a un futuro en el que prosperidad, equidad e innovación convivan en equilibrio. Que este libro sea una invitación urgente al pensamiento y a la acción; al diálogo constructivo entre la academia, el Estado, la empresa y la sociedad civil; y, sobre todo, una expresión del amor intelectual y práctico que esta Universidad profesa por la nación.

A las y los autores —docentes, investigadores y estudiantes de la UPB— les expreso mi profundo reconocimiento por su rigor y compromiso. En sus páginas se refleja el espíritu de una comunidad que cree en la fuerza transformadora del conocimiento y que asume el desafío de pensar el Bicentenario no como una simple conmemoración, sino como un punto de partida hacia un porvenir más humano, justo y sostenible.

INTRODUCCIÓN

Lykke E. Andersen y Ricardo Nogales

El Bicentenario de Bolivia encuentra al país en un momento de profundas tensiones y desafíos. El modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos naturales está mostrando claros signos de agotamiento, generando conflictos socioambientales, acelerada deforestación, incendios forestales fuera de control, y una creciente pérdida de biodiversidad. A nivel macroeconómico, el endeudamiento público ha alcanzado niveles insostenibles, mientras se incrementan las presiones inflacionarias, la amenaza de una devaluación y una fragilización de la institucionalidad en múltiples niveles. Al mismo tiempo, cerca de un millón de personas nacidas en Bolivia ha emigrado en busca de mejores oportunidades, reflejando un desencanto estructural con las posibilidades de desarrollo dentro del país.

Sin embargo, en medio de este panorama de coyuntura sombría, en las últimas décadas también han emergido avances notables que merecen ser reconocidos y celebrados. Bolivia ha logrado importantes transformaciones en áreas clave para el bienestar, la equidad y la sostenibilidad, muchas veces de forma silenciosa y sin recibir la atención que merecen. Este libro busca justamente destacar algunos de estos logros, como fuente de inspiración, esperanza y guía para la formulación de políticas públicas más resilientes, sostenibles y orientadas al desarrollo humano.

Los capítulos que componen este volumen se articulan en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), permitiendo así una mirada estructurada a los progresos realizados y los avances hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. En el capítulo sobre el ODS 1, Ricardo Nogales documenta cómo Bolivia logró reducir su pobreza multidimensional en un 60% en tan solo ocho años, una hazaña notable, aunque actualmente amenazada por la fragilidad fiscal del país. En línea con el ODS 2, Alejandra Guardia-Manzur y Andrés Laguna-Tapia presentan la revolución gastronómica boliviana como una estrategia de innovación cultural y crecimiento económico, destacando su creciente posicionamiento global.

El capítulo sobre el ODS 3 aborda los impactos positivos de la educación en planificación familiar en la reducción de la mortalidad materna e infantil, mientras que el capítulo sobre el ODS 4, escrito por Lykke E. Andersen, muestra cómo Bolivia lideró la región en movilidad social educativa, con niveles históricos alcanzados justo antes de la pandemia. En el capítulo dedicado al ODS 5, también a cargo de Andersen, se analizan los avances impresionantes en igualdad de género, incluyendo la paridad en espacios políticos subnacionales y una notable ventaja femenina en la educación universitaria.

En relación al ODS 8, Guardia-Manzur y Laguna-Tapia examinan el papel del patrimonio cultural boliviano en el desarrollo económico sostenible, resaltando su reconocimiento por la UNESCO y su valor como motor de orgullo nacional y turismo responsable. El capítulo sobre el ODS 11, desarrollado por Juan E. Cabrera y Mario Torrez, destaca iniciativas locales que promueven modelos urbanos inclusivos y de proximidad, mientras que el capítulo final, centrado en el ODS 17, analiza la evolución de la política exterior boliviana, con especial énfasis en la "Diplomacia de los Pueblos" y su impacto en la agenda internacional del país.

A lo largo del libro también se destacan varias decenas de récords mundiales que Bolivia ha alcanzado en los últimos 25 años, algunos curiosos, otros profundamente simbólicos. Entre ellos se encuentran el mono más pequeño del planeta, la planta que florece más lentamente, el mayor nivel de radiación UV registrado, el conjunto de zampoñas más grande del mundo, el lago navegable más alto, el highline de mayor elevación, el reconocimiento como mejor destino cultural del mundo, cacao y café de excelencia, entre muchos otros. Estos récords, en su diversidad, reflejan no solo las singularidades naturales y culturales del país, sino también la creatividad, resiliencia y orgullo de su gente.

Lejos de negar las crisis que enfrenta Bolivia, este libro busca ofrecer una mirada más equilibrada, de largo plazo y estructural, que reconozca no solo las amenazas, sino también las capacidades, talentos e innovaciones que se han gestado en las últimas décadas. Celebrar estos logros no significa ignorar los desafíos pendientes, sino más bien aprender de lo que ha funcionado y por qué para construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible. El libro busca contribuir a la creación de un testimonio crítico pero esperanzador de lo que Bolivia ha sido capaz de lograr a lo largo de los últimos años. Al poner en valor tanto los avances como las singularidades que hacen del país un lugar excepcional en el mundo, buscamos abrir un espacio de reflexión y renovación. En un momento en que el futuro es incierto, este recorrido por los logros alcanzados invita a recuperar la confianza en las capacidades colectivas, repensar el rumbo de nuestro desarrollo, e inspirar nuevas generaciones a seguir construyendo una Bolivia más justa, sostenible y orgullosa de sí misma.

BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES

Lykke E. Andersen es Ph.D. en Economía por la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación aplicada sobre desarrollo y medio ambiente en América Latina. Actualmente, se desempeña como Directora Ejecutiva de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) en Bolivia, con sede en el Postgrado de la UPB en La Paz.

Es cofundadora de la Fundación INESAD, la Sociedad de Economistas de Bolivia (SEBOL) y la Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico (LAJED). Además, es Académica de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas. Autora prolífica con más de 300 publicaciones, figura entre el 5 % de las economistas más citadas del mundo, según el ranking RePEc/IDEAS.

Ricardo Nogales es Profesor Pleno de Economía y Decano Nacional de la Escuela de Negocios y Economía la UPB. Además es Investigador Asociado del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Es Fellow de los Institutos Internacionales de Estudios Internacionales en Desarrollo de la Universidad de Brown, the Partnership for Economic Policy, la Human Development and Capabilities Association y la Global Labor Organisation. Es Académico de Número en la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y Editor Asociado del Journal of Human Development and Capabilities

Tiene una Licenciatura en Economía, una Maestría y un Doctorado en Econometría, todos por la Universidad de Ginebra, Suiza. Es autor de decenas de artículos en revistas académicas top en el área de desarrollo económico, entre las que destacan World Development, Journal of Development Economics y capítulos de libros editados por Cambridge University Press y Oxford University Press.

Alejandra Guardia-Manzur es jefa de carrera de Diseño Gráfico y docente investigadora en la UPB en Cochabamba. Es coordinadora de la revista académica Actas de Diseño y miembro activo del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo en Buenos Aires.

Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", una maestría en Gestión del Diseño y candidata doctoral en Diseño por la Universidad de Palermo. Tiene estudios en diseño gráfico, sociología de la imagen, experiencia de usuario y antropología del diseño.

Andrés Laguna-Tapia, Ph.D. es director del Centro de Investigación en Comunicación y Humanidades y jefe de la carrera de Comunicación en la UPB en Cochabamba. Es doctor por el programa "Sociedad y Cultura" del Departamento de Antropología Cultural e Historia de América y de África de la Universidad de Barcelona y es máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Es licenciado en filosofía y letras por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", tiene estudios en antropología en la Universidad Libre de Bruselas y Literatura en la Universidad de Buenos Aires.

Junto a diferentes equipos de periodistas, ganó la Medalla "Huáscar Cajías" del Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría prensa y, dos veces, el Premio Plurinacional Eduardo Abaroa en la categoría de periodismo cultural. Es autor de diferentes libros, artículos y textos en medios de comunicación y publicaciones académicas nacionales e internacionales. Enseña materias relacionadas con la teoría del arte y la estética, la literatura, la escritura científica y la metodología de la investigación. Actualmente, sus líneas de investigación están relacionadas con los estudios filmicos, las industrias culturales, las nuevas tecnologías y los estudios de medios.

Pamela Córdova Olivera es Doctora en Economía y Administración de Empresas y Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho/OSB de la UPB. Docente pleno e Investigadora del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (CIEE), lidera proyectos con el PNUD, BID e IDRC en economía del desarrollo, evaluación de impacto, salud, mercado laboral y educación superior. Ha impulsado la integración de la inteligencia artificial en la formación universitaria y la transformación digital de la FACED, promoviendo investigación aplicada e innovación pedagógica. Autora de artículos en *Cogent Education Review*, *Journal of Infrastructure, Policy and Development* y *Latin American Research Review*, combina rigor cuantitativo y visión humanista. Ha recibido premios a la investigación y el reconocimiento "Mujeres de Impacto Cochabamba 2024".

Juan E. Cabrera es Ph.D. en Arquitectura y Planificación urbana por la Universidad de Liege, Bélgica. Cuenta con posdoctorados en la Universidad Libre de Bruselas y en la Universidad Politécnica de Valencia. Se especializó en planificación urbana en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Hokkaido de Japón y el Lincoln Institute of Land Policy.

Fue funcionario público y como consultor desarrolló más de 15 planes urbanos y territoriales en Bolivia y Colombia. Actualmente tiene dedicación permanente en la enseñanza de urbanismo e investigación en la Universidad Privada Boliviana y de forma parcial en la Universidad Mayor de San Simón. En la primera es director del Centro de Investigación en Arquitectura y Urbanismo. Es fundador del Instituto Boliviano de Urbanismo y la Asociación Latinoamericana de Planificadores Urbanos y Territoriales.

Mario Torrez es un ingeniero mecatrónico boliviano, graduado de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Actualmente, se desempeña como Científico de Datos en la startup Ciudad, donde lidera proyectos de análisis y visualización de datos espaciales. Su experiencia incluye investigaciones en modelado de demanda energética en Austria; así como en Bolivia, donde ha trabajado en proyectos de desarrollo urbano mitigación de riesgos ambientales, y el desarrollo de metodologías para inferir indicadores socioeconómicos.

Oscar Gracia Landaeta es licenciado en filosofía y letras por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" (2016), máster (2020) y Doctor en Filosofía Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2022). Es experto en teoría política contemporánea y política internacional. Ha escrito artículos relacionados a estos temas y a la teoría política en revistas especializadas de Bolivia, España, Colombia, Chile, Estados Unidos y Europa en los últimos años. Actualmente, se desempeña como jefe de las carreras de Relaciones y Negocios Internacionales y de Derecho de la UPB y es investigador en el Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades de la misma universidad. Ha sido también analista sobre política de coyuntura y situación internacional para diversos medios de distintos países de la región y del mundo.

Rebeca Huarachi es estudiante de Relaciones y Negocios Internacionales en la UPB. Su formación se centra en el derecho internacional, la geopolítica y la historia, campos desde los cuales analiza los desafíos del sistema internacional contemporáneo. Concentra su tiempo en la investigación académica y en la redacción de artículos sobre temas internacionales, con un enfoque multidisciplinario. Además, tiene pasión por los idiomas y la comunicación intercultural, aspectos que enriquecen su perspectiva global.

Jazmin Nuñez Chumacero es una destacada estudiante de la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales en la UPB. Es parte del “Programa de Honor” de la universidad y ha sido becaria de Excelencia de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho. Es fundadora de Studyzen, un proyecto educativo que impulsa la enseñanza gratuita y el aprendizaje intercultural para niños y jóvenes. Cuenta con una sólida formación académica, varias publicaciones en distintos medios de difusión y un profundo interés por el desarrollo humano y la educación inclusiva.

RECORD MUNDIAL: EL MONO MÁS PEQUEÑO



DESCRIPCIÓN: El Tití pigmeo (*Callithrix pygmaea*), pesa 15 g al momento de nacer y un adulto crece hasta 119 g y miden 136 mm excluyendo la cola, en promedio. Se encuentran en la zona alta del amazonas en los bosques de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil.

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 01/01/2001

RECORD MUNDIAL: LA HOJA DE NENÚFAR (O LIRIOS DE AGUA) MÁS GRANDE

DESCRIPCIÓN: La hoja de nenúfar más grande es la Victoria boliviana que se expande hasta los 3.2 metros en el máximo diámetro medido. Tiene una superficie de aproximadamente 7.55 metros cuadrados. Esta hoja creció en La Rinconada, parque ecológico en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.



PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 3/02/2012

UBICACIÓN: Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.

OTORGADO POR: Guiness World Records

RECORD MUNDIAL: CHARANGO MÁS GRANDE

DESCRIPCIÓN: Villa Serrano (214 km al este de Sucre) ingresó a la órbita de los récord Guiness por tener el charango más grande del mundo, que fue construido en homenaje al centenario del nacimiento del eximio artista Mauro Núñez Cáceres.

UBICACIÓN: Villa Serrano, Departamento de Chuquisaca

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 05/05/2005



RECORD MUNDIAL: EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR CABLE MÁS LARGO DEL MUNDO

DESCRIPCIÓN: "Mi Teleférico", con la apertura de la línea plateada el 9 de marzo del 2019, el sistema opera con 32 estaciones en 10 líneas de cable, con una longitud de 33 km (20,05 mi).

UBICACIÓN: Nuestra Señora de La Paz

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 09/03/2019



RECORD MUNDIAL: EL CONJUNTO DE ZAMPOÑAS MÁS GRANDE

DESCRIPCIÓN: El conjunto de zampoñas más grande fue de 2.317 participantes que se juntaron en la plaza San Francisco en la ciudad de La Paz, el 24 de Octubre de 2004.

UBICACIÓN: Cuidad de La Paz.

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 24/10/2004

CAPÍTULO 01

POBREZA EN BOLIVIA: LOGROS Y DESAFÍOS EN PERSPECTIVA MONETARIA Y MULTIDIMENSIONAL

Ricardo Nogales

- La pobreza extrema cayó de 15,54 % a 1,96 % en 25 años, un resultado mucho mejor que el promedio regional.
- Bolivia redujo su IPM global en un 60 % en un periodo de 8 años, sacando a más de un millón de personas de la pobreza multidimensional.
- Hoy, estos logros están en riesgo. El 35 % de la población boliviana es vulnerable a recaer en pobreza ante choques económicos.
- La alta dependencia de hidrocarburos para la inversión pública y el déficit fiscal persistente amenazan con revertir los avances en la lucha contra la pobreza.

1. Introducción

A nivel global, coexisten y se complementan dos enfoques predominantes para conceptualizar y medir la pobreza, ambos reconocidos explícitamente en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera noción, más tradicional, es la pobreza monetaria, que evalúa el bienestar en función del ingreso o el consumo, identificando como pobres a quienes disponen de recursos insuficientes para satisfacer un umbral mínimo de necesidades básicas. Esta perspectiva es la base de la meta 1.1 de los ODS, que busca erradicar la pobreza extrema medida por la línea internacional de US\$2,15 por día (en paridad de poder adquisitivo de 2017). La segunda noción es la pobreza multidimensional, que amplía el análisis incorporando carencias simultáneas en aspectos fundamentales del bienestar (como salud, educación y condiciones de vida) más allá de los aspectos monetarios. Esta perspectiva está vinculada a la meta 1.2 de los ODS, orientada a reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.

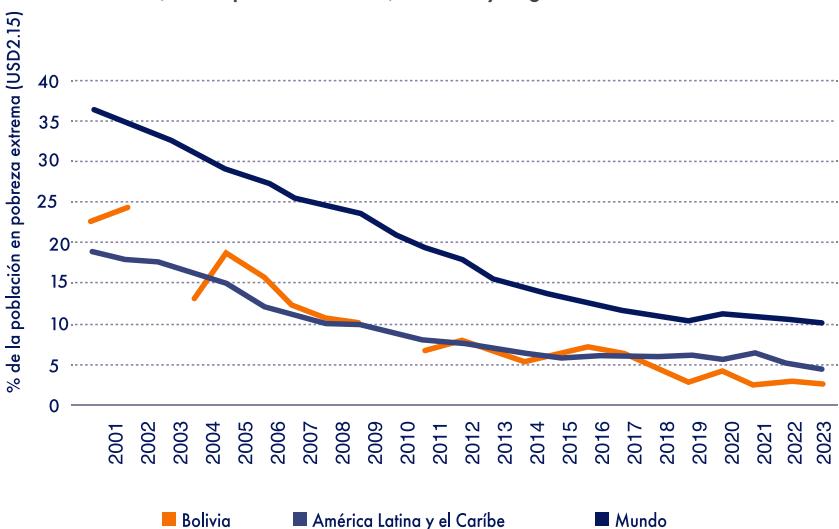
Ambos enfoques ofrecen prismas complementarios para comprender la complejidad de la pobreza y sus múltiples manifestaciones. Mientras la pobreza monetaria captura restricciones económicas que limitan el acceso a bienes y servicios, la pobreza multidimensional revela privaciones que afectan capacidades esenciales para el desarrollo humano y la expansión de capacidades de las personas para llevar el estilo de vida que ellos valoren. En la lógica del ODS 1, reconocer estas dos perspectivas permite realizar diagnósticos más completos y diseñar intervenciones más integrales para erradicar la pobreza de manera sostenible.

En el marco del bicentenario de la independencia de Bolivia, abordar la pobreza reviste una significación histórica y política importante; es un acto de reafirmación de los principios de justicia social y soberanía popular. No es posible celebrar doscientos años de independencia sin identificar algunos éxitos alcanzados, pero también quedan pendientes muchos desafíos en relación a las carencias monetarias y multidimensionales de amplios sectores de la población boliviana. Ignorarlos equivaldría a conmemorar un logro inacabado. La construcción de una nación libre implicó desde sus orígenes no sólo la emancipación del dominio colonial, sino también la promesa de garantizar el bienestar y la dignidad de todos los bolivianos. Por esto, una reflexión objetiva sobre la pobreza —tanto monetaria como multidimensional— se convierte en una herramienta esencial para medir el grado de concreción de esos ideales fundacionales. Una reflexión sobre este tema puede impulsar un compromiso renovado con la equidad, la inclusión y el desarrollo sostenible, reafirmando así el sentido de patria y de proyecto común que dio origen nuestro país.

2. Bolivia en el escenario global

A la luz de los últimos datos disponibles en el Banco Mundial (2021), anteriores a la pandemia por COVID-19, Bolivia se había consolidado como uno de los casos más notables de reducción sostenida de la pobreza extrema en América Latina (Amarante & Arim, 2017). El desempeño del país se ha destacado claramente frente a la trayectoria observada en el promedio de América Latina y el Caribe y en países de la región con un desarrollo económico notable en los últimos años, como Colombia (ver Figura 1). De acuerdo con estimaciones armonizadas y tomando en cuenta la línea de pobreza internacional de US\$3 por día, Bolivia logró disminuir la proporción de su población que vive en pobreza de 22.3 % en 2001 a 2,8 % en 2023. El promedio de América Latina y el Caribe pasó de 18.4% a 4.5%. Claramente, la reducción anual de la pobreza en Bolivia fue más acelerada que el promedio regional.

**Figura 1: Evolución de la incidencia de pobreza monetaria
(\$2.15 por día en PPP) - Países y regiones selectos**



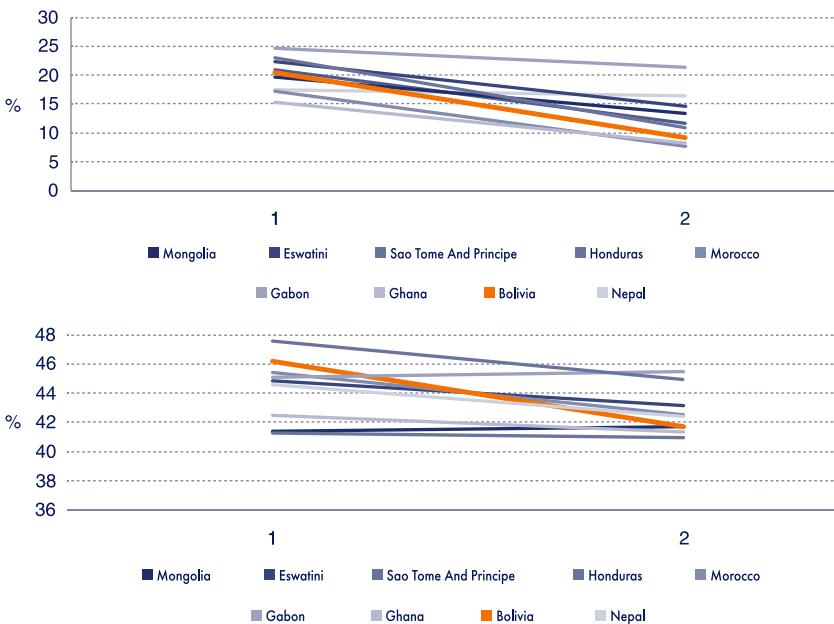
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PovCalNet, Banco Mundial

De manera complementaria a las métricas de pobreza monetaria, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global calculado anualmente por el PNUD y la Universidad de Oxford para más de 110 países en desarrollo mide carencias no materiales que los hogares experimentan de manera simultánea en tres dimensiones relevantes para la vida humana (salud, educación y condiciones de vida), a partir de 10 indicadores (nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad, asistencia escolar, combustible, agua, saneamiento, electricidad, vivienda y activos). El IPM global se estima empleando el método Alkire-Foster: primero, se asigna a cada hogar un puntaje de privaciones en cada una de los 10 indicadores considerados y luego se identifica como pobre al hogar que sufre un tercio o más de privaciones ponderadas al mismo tiempo. Todos los miembros de estos hogares son pobres multidimensionales. Un elemento distintivo de la metodología con la que se estima el IPM es el hecho de medir carencias no materiales combinando la incidencia (H , el porcentaje de población que sufre un tercio o más de carencias ponderadas simultáneamente) y la intensidad (A , el porcentaje promedio de carencias entre los pobres multidimensionales). El valor del IPM es simplemente el producto de ambos: $IPM = H \times A$. Un IPM mayor indica más pobreza; puede desagregarse para comparar países o regiones (ver Alkire et al., 2022 para más detalles sobre este índice y su metodología).

Tomando en cuenta la última información disponible, entre 2008 y 2016, Bolivia registró una fuerte reducción de la pobreza multidimensional medida a partir del IPM global. En este periodo, el valor de este índice para Bolivia bajó de 0.095

a 0.038 (una caída absoluta de 0.057, equivalente a -60%). Esta mejora se debió principalmente a una caída de la incidencia (H): el porcentaje de personas pobres descendió de 20.6% a 9.1% (-11.5 puntos porcentuales), mientras que la intensidad se redujo de 46.2% a 41.7% (-4.5 puntos) (ver Figura 2). En otras palabras, en 2008 alrededor del 20.6% de los bolivianos eran pobres multidimensionales (experimentando, en promedio, privaciones en alrededor del 46% de los indicadores considerados) y en 2016 sólo el 9.1% era pobre multidimensional (con una intensidad promedio de 41.7%). La disminución en H muestra que alrededor de un millón de personas salieron de la pobreza multidimensional, y la mejora en A indica que aquellas personas que permanecen en esa situación sufrieron menos carencias que antes.

Figura 2: Evolución de la Incidencia (H) y la Intensidad (A) de la pobreza multidimensional - Países seleccionados



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del PNUD y la Universidad de Oxford

Estos resultados confirman que, antes de la pandemia, Bolivia estaba en camino de cumplir ampliamente con la meta de reducir sustancialmente la pobreza multidimensional implícita en el ODS 1 y la Agenda 2030. De hecho, Bolivia logró ubicarse entre los 19 países (de 81 analizados en Alkire et al, 2023) que lograron reducir a la mitad el valor de su IPM entre dos períodos analizados. El índice de Bolivia se redujo a menos de la mitad en un lapso de 8 años, un ritmo comparable al de la India (2005–2016) y de Marruecos (2011–2018). Este éxito sugiere

avances importantes en condiciones de vida básicas en el país (ver Figura 2). Para poner en perspectiva el progreso boliviano en reducción de pobreza multidimensional, es importante compararlo con el de otros países en circunstancias similares. En la región de América Latina y el Caribe, Honduras (2005/06 vs 2011/12) logró reducir el valor de su IPM de 0.186 a 0.108 (-42%). La incidencia de pobreza multidimensional en Honduras pasó de 36.7% a 22.8% (-13.9 p.p., -38%), y la intensidad de 50.7% a 47.2% (-3.5 p.p., -7%). Si bien el progreso de Honduras es notable, éste ha sido sobrepasado por el de Bolivia. Fuera de la región latinoamericana, el progreso de Bolivia en reducción de la pobreza multidimensional es más notable que el que se ha registrado en países africanos y asiáticos que han sido celebrados y resaltados en informes internacionales (ver por ejemplo UNDP & OPHI, 2020). Por ejemplo, en Mongolia (2010 vs 2018) el IPM cayó de 0.081 a 0.039 (-52%), con H de 19.6% a 9.9% (-9.7 p.p.) y A de 41.4% a 39.3%. La reducción en incidencia fue ligeramente menor en magnitud relativa que en Bolivia (-49% vs -56%), pero en comparación, la mejora en intensidad fue mínima (-5%). Asimismo, en Gabón (2012 vs 2019/21) el IPM bajó de 0.068 a 0.035 (-49%), H de 15.2% a 8.2% (-7.0 p.p., -46%), A de 44.6% a 42.4% (-2.2 p.p., -4.9%). Ambos componentes del IPM mejoraron, pero comparativamente, Bolivia tuvo una mayor disminución en incidencia.

3. Factores de éxito: ¿Cómo se alcanzaron estos logros?

El éxito de Bolivia en la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional durante las últimas dos décadas ha sido resultado de una combinación de factores estructurales beneficiosos que dieron algunos márgenes de maniobra inéditos en materia de política pública. Sin ser exhaustivos, algunos de estos importantes factores son presentados y discutidos a continuación:

- Crecimiento económico sostenido y estabilidad macroeconómica**

Entre 2006 y 2019, Bolivia registró un crecimiento promedio del PIB de 4,9% anual, impulsado principalmente por la bonanza de los precios de las materias primas (gas natural y minerales), las nacionalizaciones de sectores estratégicos y un aumento de las exportaciones (Banco Mundial, 2022). Sin juzgar la eficiencia, este crecimiento permitió una expansión de los ingresos fiscales, que a su vez financiaron un conjunto de políticas sociales y de inversión pública, abordadas a continuación. De manera general, estas altas tasas de crecimiento generaron más oportunidades de fuentes de ingreso para la población, mayores prospectos de recaudación tributaria y recursos para financiar transferencias y servicios sociales. Es importante señalar que Bolivia había mantenido constantes superávits fiscales hasta 2014 y un bajo nivel de endeudamiento externo lo que permitió, en ese momento, evitar crisis macroeconómicas que pudieran haber revertido los avances logrados en materia social (CEPAL, 2020).

- **Ampliación de transferencias condicionadas y no condicionadas**

Gracias a la holgura fiscal que tuvo Bolivia entre 2006 y 2019, el gobierno implementó un conjunto de transferencias monetarias que beneficiaron a diversos grupos vulnerables. Entre ellos se pueden mencionar:

- **El Bono Juancito Pinto**, una transferencia anual a estudiantes de primaria y secundaria pública para incentivar la permanencia escolar.
- **El Bono Juana Azurduy**, una transferencia condicionada a mujeres embarazadas y madres de niños menores de dos años, orientada a mejorar el acceso a servicios de salud materno-infantil.
- **La Renta Dignidad**, una pensión universal para adultos mayores de 60 años, independientemente de su historial laboral.

De manera general, estas transferencias han contribuido a incrementar los ingresos de los hogares, permitiendo aliviar restricciones de consumo y mejorar el acceso a servicios sociales. Por ejemplo, de acuerdo a Ramos et al. (2017) el Bono Juancito Pinto redujo la deserción escolar en zonas rurales de 6,5% a 2,1% entre 2005 y 2012. Asimismo, el Bono Juana Azurduy incrementó en 35% la cobertura de controles prenatales y atención en parto institucional. Estas transferencias tuvieron efectos inmediatos sobre la pobreza monetaria y efectos indirectos sobre la pobreza multidimensional a través de mejoras en salud y educación. Estas transferencias, junto con el aumento generalizado del gasto social (alrededor de 16–18% del PIB), aumentaron los ingresos de los hogares pobres. En conjunto, la mejora relativa de la red de protección social elevó los pisos de consumo (alimentos, educación y salud) de familias vulnerables, reduciendo sus privaciones básicas y contribuyendo a la caída del IPM en Bolivia.

- **Expansión del acceso a servicios básicos y vivienda**

Durante el período 2006–2018, es innegable que en Bolivia se amplió significativamente la cobertura de servicios esenciales: el acceso a agua potable subió de 62,3% a 80,7% y la cobertura de energía eléctrica pasó de 69,5% a 88,2% (CEPAL, 2022). Estas mejoras se lograron a través de programas de inversión pública en infraestructura social y subsidios a las tarifas de servicios básicos. La expansión de estos servicios redujo las privaciones materiales directamente incluidas en las mediciones de pobreza multidimensional. Un factor clave puede haber sido la expansión de infraestructura básica. Para 2014, el 83.8% de la población tenía acceso a agua potable (11 p.p. más que en 2001) y el 56.3% a saneamiento básico (14.9 p.p. más). Estos avances son atribuibles, en parte, a programas gubernamentales focalizados (por ejemplo, "Mi Agua" y "Mi Riego") que incrementaron la cobertura de agua potable en zonas urbanas a 90% y en rurales a 61% para 2012. También aumentó la cobertura de electricidad (cerca de 96% urbano y 64% rural en 2014) y se subvencionaron servicios básicos a

hogares pobres (la Tarifa Dignidad redujo el costo eléctrico en 25% para el 2016, beneficiando a alrededor de 1 millón de personas). Al mejorar el acceso al agua, saneamiento y energía, se redujeron las privaciones de vivienda y servicios en el IPM de Bolivia, influyendo en la disminución de la intensidad de la pobreza multidimensional.

- **Inversión en salud y educación**

Entre 2008 y 2019, en Bolivia se amplió significativamente el acceso a servicios públicos relacionados con el desarrollo humano de la población. Se implementó el Seguro Universal de Salud (SUS), mejorando el acceso sanitario gratuito incluso en áreas rurales. Al mismo tiempo, la cobertura educativa se extendió: las tasas de matrícula neta primaria alcanzaron niveles muy altos (alrededor del 98%), y se realizaron algunos avances en infraestructura escolar. Estas políticas inciden directamente en indicadores del IPM (nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad, asistencia escolar). El Bono Juancito Pinto, en particular, puede haber contribuido a aliviar algunos costos educativos (transporte, útiles), resultando en mayores años de escolaridad y menor abandono. Así, las mejoras en salud y educación pueden ayudar a explicar por qué la intensidad de la pobreza disminuyó, aunque modestamente, entre 2008 y 2016.

- **Gestión de recursos naturales y redistribución territorial**

La nacionalización de los hidrocarburos en 2006 incrementó la participación del Estado en las rentas del gas y petróleo, lo que permitió mayores transferencias a los gobiernos subnacionales a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Estos recursos se redistribuyeron territorialmente, financiando programas locales de salud, educación e infraestructura que beneficiaron principalmente a áreas rurales, donde la incidencia de pobreza era más alta (Banco Mundial, 2022). Según CEPAL (2020), las transferencias a municipios rurales se duplicaron entre 2006 y 2014.

4. Desafíos y riesgos

Si bien Bolivia ha sido reconocida internacionalmente como un caso exitoso en la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional entre 2006 y 2018, la sostenibilidad de estos avances enfrenta una serie de desafíos estructurales y coyunturales. Por ejemplo, Garbay (2019) e informes del PNUD ya habían advertido que estos retos podían comprometer la continuidad de la mejora social e incrementar la vulnerabilidad de amplios sectores de la población a recaer en la pobreza.

- Alta proporción de población vulnerable y riesgo de recaída

De acuerdo con López-Calva y Ortiz-Juárez (2014), la vulnerabilidad a la pobreza puede definirse como la probabilidad de que un hogar o individuo que actualmente no es pobre caiga en situación de pobreza en el futuro, dada la exposición a riesgos y la insuficiencia de mecanismos de protección. En términos técnicos, se considera vulnerable a aquella población con una probabilidad condicional de recaída en pobreza superior al 10% dentro de un horizonte de tiempo determinado (World Bank, 2014). Este enfoque permite distinguir entre los “no pobres seguros” y los “vulnerables no pobres”, lo que aporta una perspectiva dinámica al análisis del bienestar de las personas.

Diversos estudios coinciden en que un porcentaje considerable de la población boliviana se ubicaba en una situación de vulnerabilidad, incluso en la época de bonanza que se describe en párrafos anteriores. Millones de personas contaban con ingresos apenas por encima de la línea de pobreza, pero con alta probabilidad de caer nuevamente en pobreza ante choques adversos (Banco Mundial, 2022; Robles & Cuesta, 2019). El Banco Mundial (2022) estima que aproximadamente el 35% de la población boliviana pertenecía en 2022 a este estrato vulnerable. Además, Robles y Cuesta (2019) documentan que la probabilidad de que un hogar vulnerable recaiga en pobreza en América Latina, incluida Bolivia, supera el 30% en horizontes de corto plazo. Esta fragilidad se vio evidenciada durante la pandemia de COVID-19, cuando la pobreza moderada se incrementó en 7 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, alcanzando el 37,5% (CEPAL, 2021).

Salir de la pobreza no siempre significa haberla dejado atrás definitivamente. La situación que vivimos actualmente nos muestra claramente que, en Bolivia, muchas familias que logran mejorar su situación económica y superar la línea de pobreza siguen viviendo en una situación muy frágil. De hecho, entre el 20% y el 30% de estos hogares vuelven a caer en la pobreza en un plazo de dos a cuatro años, especialmente si el país atraviesa dificultades económicas (Amarante y Arim, 2017). Esto implica que muchas personas viven con una constante inseguridad, donde una enfermedad, la pérdida del empleo o una crisis económica puede hacerlas retroceder. Por eso, hablar de retorno a la pobreza es hablar de una reducción de la pobreza inestable, donde las mejoras son vulnerables y fácilmente reversibles si no se consolidan con políticas públicas que protejan esos avances.

- Alta informalidad laboral y precariedad del empleo

La persistencia de una estructura productiva caracterizada por alta informalidad laboral limita la capacidad de los hogares para acumular activos, acceder a protección social y enfrentar contingencias económicas. Según estimaciones de

la CEPAL (2020), el 70,6% de la población ocupada boliviana trabaja en el sector informal, cifra superior al promedio regional (54%). Este fenómeno afecta principalmente a mujeres, jóvenes y poblaciones rurales. Así, si bien las transferencias sociales contribuyeron a reducir la pobreza, no lograron transformar las condiciones estructurales del mercado laboral. Amarante y Arim (2017) también muestran que la informalidad laboral está estrechamente vinculada con una mayor vulnerabilidad a recaídas en pobreza monetaria y privaciones multidimensionales, debido a la inestabilidad del ingreso y la exclusión de la seguridad social. Es importante mencionar, también, que la falta de congruencia entre las competencias disponibles en la fuerza laboral boliviana y las que demandan los sectores empresariales genera un desajuste formativo que incide directamente en la persistencia de la informalidad laboral. Cuando los trabajadores no cuentan con las habilidades técnicas —como el manejo de tecnologías de información, procesos productivos estandarizados o gestión administrativa— ni con las competencias transversales —tales como comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de problemas— requeridas por las empresas formales, estas optan por recurrir a mano de obra no calificada o contrataciones bajo modalidades informales para reducir costos de capacitación y adaptación. A su vez, los trabajadores, al carecer de oportunidades de formación continua alineadas con las necesidades del mercado, encuentran en el empleo informal una vía más accesible para generar ingresos, aunque sea en condiciones de mayor precariedad y sin acceso a protección social.

- **Vulnerabilidad externa por dependencia de recursos naturales**

La economía boliviana ha presentado durante décadas una alta dependencia de las exportaciones de gas natural y minerales, sectores sujetos a volatilidad de precios internacionales. Según el Banco Central de Bolivia (2020), los hidrocarburos y minerales representaron el 76% del total de exportaciones en 2019. La caída de los precios de las materias primas entre 2014 y 2016 habría reducido significativamente los ingresos fiscales y la balanza comercial, limitando la capacidad del Estado para financiar políticas redistributivas.

La excesiva dependencia de Bolivia de la exportación de hidrocarburos ha expuesto a su economía a choques externos de precios y demanda que, a lo largo de los últimos años han erosionado su estabilidad macroeconómica y fiscal. En primer lugar, los ingresos del Estado han estado profundamente vinculados a la cotización internacional de los combustibles fósiles: cuando los precios del gas y el petróleo escalaron, el gobierno experimentó un alza de ingresos que, en ausencia de una estrategia de ahorro, prudencia fiscal y diversificación adecuada, se destinó mayoritariamente al gasto corriente y a subsidios sociales. Sin embargo, ante las caídas abruptas de estos precios y la reducción de los volúmenes exportados, los ingresos públicos se han desplomado sin una red de contención fiscal tejida en base a prudencia, previsión y eficiencia.

En segundo lugar, este ciclo “boom-bust” ha impedido el desarrollo sostenido de otros sectores productivos. Sin duda, la bonanza hidrocarburífera atrajo capital, talento y financiamiento hacia las actividades extractivas, provocando el fenómeno conocido como “enfermedad holandesa”: la apreciación real del tipo de cambio merma la competitividad de la agricultura, la manufactura y los servicios orientados al mercado interno y al comercio exterior. Como resultado, Bolivia no cuenta hoy con cadenas de valor alternativas ni ha logrado consolidar una base industrial lo suficientemente amplia. Ante la caída de ingresos por hidrocarburos, Bolivia no dispone hoy de otros motores de crecimiento capaces de absorber el desempleo y mantener el flujo de divisas y los altos gastos fiscales que fueron posibles por más de una década.

La rigidez de las estructuras de gasto público —con compromisos de largo plazo en pensiones, salarios, mantención de empresas públicas, subsidios millonarios a combustible y transferencias sociales— dificulta enormemente la respuesta ante la contracción de ingresos. Al no contar con un fondo soberano o mecanismos de estabilización fiscal adecuados, el Estado se ve obligado hoy a incurrir en endeudamiento o a recortar inversiones en infraestructura, subsidios y desarrollo humano. Las actuales rigideces fiscales son un reto innegable en el país. Desde 2015, Bolivia ha registrado déficits fiscales superiores al 7% del PIB en promedio, junto con una disminución sostenida de las reservas internacionales netas (Banco Central de Bolivia, 2020). Ya en 2022, el Banco Mundial había advertido que el espacio fiscal disponible se estaba haciendo demasiado estrecho para sostener los programas de transferencias, subsidios y la inversión en infraestructura social, comprometiendo la continuidad de las políticas que contribuyeron a la reducción de la pobreza. La evidencia de Lustig (2017) para América Latina había mostrado ampliamente que la sostenibilidad fiscal es un determinante clave de la eficacia de los sistemas de protección social para prevenir la recaída en la pobreza. Para lograr esta sostenibilidad fiscal, a su vez, se requiere de estabilidad política y gobernabilidad. El reto no es menor.

- **Persistencia de brechas territoriales y rurales**

A pesar de los avances, la pobreza monetaria y multidimensional sigue concentrándose en áreas rurales, indígenas y periféricas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE, 2020), la pobreza extrema rural alcanzaba el 27% en 2018, frente al 6,1% en áreas urbanas. Además, la pobreza multidimensional era 2,5 veces mayor en el área rural. La CEPAL (2022) resalta que las desigualdades territoriales en acceso a infraestructura, servicios básicos, salud y educación limitan las oportunidades de movilidad social y exponen a estos grupos a un riesgo más alto de recaída en pobreza ante eventos climáticos adversos o crisis económicas. En este sentido, López-Calva y Ortiz-Juárez (2014) sostienen que las disparidades regionales son un factor crítico que aumenta la probabilidad de reversión de los logros alcanzados en reducción de la pobreza.

5. Remarcas finales

El caso de Bolivia ejemplifica cómo la articulación de un crecimiento económico sostenido con políticas sociales integrales puede producir reducciones significativas de la pobreza, tanto desde la perspectiva monetaria como multidimensional. Estos logros han sido notables y deben ser celebrados. No obstante, los retos para consolidar y expandir estos avances son considerables y cada vez mayores. La persistencia de altas tasas de informalidad laboral, las brechas territoriales que afectan desproporcionadamente a las zonas rurales e indígenas, y la vulnerabilidad fiscal derivada de la dependencia de los ingresos de hidrocarburos exigen profundizar la diversificación productiva y fortalecer la resiliencia económica del país. Es importante perfeccionar los mecanismos de seguimiento y evaluación de la pobreza en todas sus formas a nivel subnacional para identificar focos de privación y diseñar intervenciones territoriales más efectivas. Sin duda, la creación y mantenimiento de un fondo soberano o instrumentos de estabilización fiscal podrían haber preservado la continuidad de estos grandes logros. Después de décadas de progreso, es importante reconocer hoy importantes retos pendientes para mantener el gasto social ante choques externos, ampliar la capacitación técnica y las oportunidades de formalización laboral, y articular políticas de largo plazo en salud, educación y agua/saneamiento con un enfoque diferencial que ponga en el centro a las poblaciones más vulnerables.

Luego de esta reflexión, Bolivia celebra el bicentenario de su independencia con matices negativos, luego de haber vivido un periodo muy positivo. La coyuntura económica plantea desafíos significativos que amenazan con revertir décadas de avances en la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional. Tras un periodo de bonanza entre 2006 y 2019, que ha sido justamente celebrado a nivel internacional, el país enfrenta una grave crisis económica caracterizada por una inflación interanual doble dígito, una creciente escasez de divisas y el claro agotamiento del modelo económico vigente durante las últimas dos décadas. ¿Qué hacer? Reconozcamos que hubo un periodo de reducción de pobreza sin precedentes, pero sobre todo, no cerremos los ojos ante el evidente hecho que la actual coyuntura, en la que prevalece una negativa a implementar reformas estructurales necesarias –que implican, entre otros, grandes esfuerzos fiscales–, nos enfrenta a un riesgo enorme de revertir los logros de reducción de pobreza que hemos vivido en el país.

6. Referencias clave

Alkire, S., Kanagaratnam, U., Nogales, R., & Suppa, N. (2022). Revising the global multidimensional poverty index: Empirical insights and robustness. *Review of Income and Wealth*, 68, S347-S384. <https://doi.org/10.1111/roiw.12573>

Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, N. (2023). On track or not? Projecting the global Multidimensional Poverty Index. *Journal of Development Economics*, 165, 103150. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103150>

Amarante, V., & Arim, R. (2017). La dinámica de la pobreza en América Latina: avances y desafíos. *Revista CEPAL*, 121, 7–26. <https://doi.org/10.1111/ilrs.12285>

Banco Central de Bolivia (2020). *Memoria de la Economía Boliviana 2019*. La Paz: BCB. <https://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/2020/05/03/INTRODUCCION.pdf>

Banco Mundial (2022). *Bolivia Economic Update: Bolstering Recovery and Reducing Vulnerabilities*. Washington D.C.: World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/bolivia/overview>

CEPAL (2021). *Panorama Social de América Latina 2020*. Santiago de Chile: CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020>

CEPAL (2022). *Panorama Social de América Latina 2021*. Santiago de Chile: CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021>

Garbay, S. (2019). *Vulnerabilidad a la pobreza y educación en Bolivia. Una aproximación a partir de pseudo-paneles* (No. 7/2019). Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), Universidad Católica Boliviana. https://www.iisec.ucb.edu.bo/assets_iisec/publicacion/DT_07_IISEC_Garbay.pdf

López-Calva, L. F., & Ortiz-Juárez, E. (2014). A vulnerability approach to the definition of the middle class. *Journal of Economic Inequality*, 12(1), 23–47. <https://doi.org/10.1007/s10888-012-9240-5>

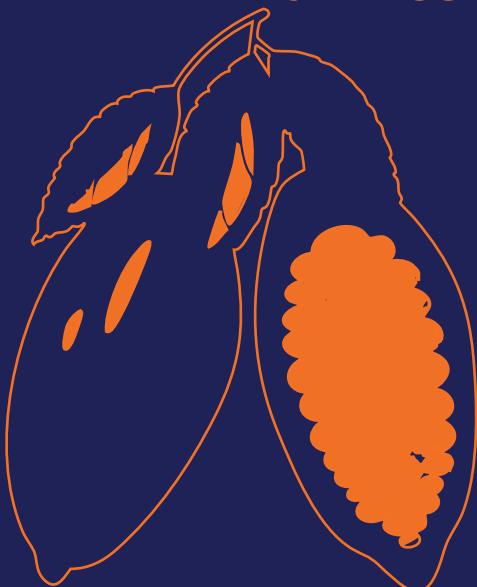
Lustig, N. (2017). Fiscal policy, income redistribution, and poverty reduction in Latin America. CEQ Working Paper No. 62. Tulane University. <http://dx.doi.org/10.18235/0005237>

UNDP & OPHI (2020). *Global MPI 2020—Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/2020mpireporten.pdf>

Ramos Menar, B., Ayaviri Nina, D., Quispe Fernández, G., & Escobar Mamani, F. (2017). Las políticas sociales en la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social en Bolivia. *Revista de Investigaciones Altoandinas*, 19(2), 165-178.
<http://dx.doi.org/10.18271/ria.2017.275>

Robles, M., & Cuesta, J. (2019). Understanding the dynamics of poverty in Latin America. *World Bank Policy Research Working Paper No. 8857*. Washington D.C.: World Bank

MEDALLA DE ORO: MEJOR CACAO - 2021 "COCOA OF EXCELLENCE AWARDS"



DESCRIPCIÓN: Despues de un proceso de evaluación y selección de 235 muestras de cacao, provenientes de 53 lugares. Cocoa of Excellence reconoce la calidad, sabor y la diversidad de cacao provenientes de todo el mundo, incentivando a los productores para mejorar la cadena de valor y sostenibilidad del cacao. Otorgando este premio a los productores que tienen la visión de multiplicar la resiliencia en el sistema de agricultura en el sector.

UBICACIÓN: Riberalta - Beni

OTORGADO POR: Cacao of Excellence

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 16/12/2021



COCOA OF EXCELLENCE AWARDS: MEDALLA DE PLATA AL MEJOR CACAO - 2023

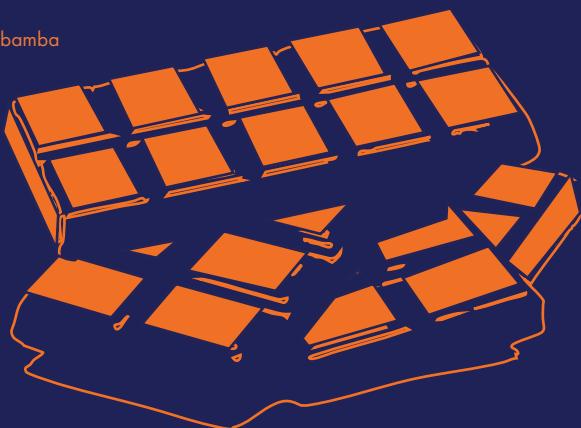
DESCRIPCIÓN: Despues de un proceso de evaluación y selección de 235 muestras de cacao, provenientes de 53 lugares. Cocoa of Excellence reconoce la calidad, sabor y la diversidad de cacao provenientes de todo el mundo, incentivando a los productores para mejorar la cadena de valor y sostenibilidad del cacao. Otorgando este premio a los productores que tienen la visión de multiplicar la resiliencia en el sistema de agricultura en el sector.

UBICACIÓN: Santa Anita, Chimoré. Cochabamba

OTORGADO POR: Cocoa of Excellence

PUESTO LOGRADO:
2do puesto, Medalla de plata

FECHA: 16/12/2023



CAPÍTULO 02

REVOLUCIÓN GASTRONÓMICA EN BOLIVIA: EL FOOD DESIGN COMO ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Alejandra Guardia-Manzur y Andrés Laguna-Tapia

- *El food design impulsa la gastronomía boliviana como estrategia de innovación, identidad y desarrollo económico.*
- *Algunos restaurantes bolivianos comenzaron a ganar gran visibilidad internacional, posicionándose en rankings y listas globales de alta cocina.*
- *Iniciativas como Gustu y MANQ'A forman talento local y democratizan la educación gastronómica.*
- *La gastronomía aporta el 10% del PIB, superando al turismo y dinamizando la economía creativa en el país.*
- *Persisten desafíos estructurales, como la falta de políticas públicas, la exclusión social, la educación del público y la vulnerabilidad ambiental.*

1. Introducción

Bolivia cuenta con un gran número de íconos culturales potentes e influyentes dentro del marco turístico y económico. La gastronomía nacional hace parte de ellos, hoy es una de las aristas esenciales para una estrategia que proyecte la identidad del país en el escenario internacional.

La cocina boliviana poco a poco se está estableciendo como uno de los referentes turísticos del país, además se están generando instancias discursivas que apelan a la diversidad geográfica y cultural. Esta carga tan fuerte que la gastronomía tiene dentro de la construcción social de imaginarios, ha supuesto distintas estrategias que han logrado potenciarla durante los últimos diez años. En este sentido, ha sido notable cómo se ha integrado al diseño, a la comunicación, a la reflexión en torno a la cultura y a las experiencias sensoriales en los espacios gastronómicos, buscando transformar la percepción en el entorno –el espacio vivido– durante el acto de comer, de entender y de pensar la comida.

De manera directa o indirecta, este tipo de estrategias se han posicionado a través del food design, una disciplina que supone la aplicación de principios de diseño en la creación y presentación de alimentos, considerando aspectos estéti-

cos, funcionales y culturales (Zampollo, 2017), a través de la reinterpretación de la cocina tradicional desde un enfoque innovador e internacionalizador.

La importancia de este fenómeno radica en las posibilidades que tiene para impulsar el desarrollo económico mediante el fortalecimiento de sectores como el turismo, la hotelería, las industrias creativas, así como la revitalización de la producción artesanal (tanto de alimentos, como de productos para la cubería, la vajilla y la mantelería), así como el descubrimiento, la recuperación y la puesta en valor de ingredientes como la almendra chiquitana, la vainilla amazónica o el palqui, entre muchos otros. Distintas iniciativas como el Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario Boliviano (MIGA) y la consolidación de restaurantes de alto nivel como Gustu, Ancestral, Phayawi, Ali Pacha, Popular, Mi Chola, entre otros, han articulado una narrativa gastronómica que vincula saberes ancestrales con técnicas y perspectivas contemporáneas. Esto ha generado oportunidades de empleo calificado, dinamismo en las economías locales y la promoción de la sostenibilidad alimentaria.

En el presente capítulo se busca resaltar la importancia del food design como herramienta esencial para repensar la gastronomía desde una perspectiva estratégica y holística, que incorpora distintos elementos como la biodiversidad, la identidad cultural, la innovación social y, en gran medida, la potencialidad económica con la que cuenta la industria gastronómica. A través de este enfoque, Bolivia ha logrado visibilizar su riqueza culinaria en circuitos internacionales, atrayendo la atención de expertos, turistas y medios especializados, como la prestigiosa lista “Latin America’s 50 Best Restaurants” .

Desde esta perspectiva, el capítulo propone analizar el impacto de esta revolución gastronómica, similar a la que se vivió en el siglo pasado con la *Nouvelle Cuisine* en Francia o con la nueva cocina vasca en España, desde una mirada multidisciplinaria que articula el diseño, la comunicación, la economía y la cultura. Se exploran los factores que han impulsado este proceso, los logros alcanzados en el escenario internacional, los riesgos que enfrenta esta transformación y las estrategias necesarias para consolidarla como motor de desarrollo económico sostenible.

2. Bolivia en el escenario global

Desde hace varias décadas, se está viviendo el incremento del prestigio de la cocina a nivel global. Hoy los chefs son una suerte de estrellas del rock, están hipermediatizados y tienen una enorme influencia internacional. Los nombres de José Andrés, Gordon Ramsay, Anthony Bourdain, Andrew Zimmern o Jamie Oliver lo pueden confirmar, sus rostros son archiconocidos gracias a la televisión, al internet y a una industria editorial de nicho. Hoy, los comensales, los foodies, aceptan estoicamente permanecer durante extensos períodos de tiempo en las

languísimas listas de espera de los restaurantes que aparecen en las listas de las estrellas Michelin, de los soles Repsol o de las publicaciones especializadas. Se dice que para el restaurante danés Noma de René Redzepi y Claus Meyer (el hombre detrás de la gestación del ya legendario Gustu paceño) la espera es de seis meses, para Diverxo de Dabiz Muñoz es de ocho meses y medio, y para El Celler de Can Roca de los hermanos Roca, es de 11 meses.

Desde el surgimiento en los años 1970 de la *Nouvelle cuisine* francesa, encabezada por eminencias como Joël Robuchon, Alain Ducasse o Paul Bocuse, pasando por la aparición pocos años después de la Nueva Cocina Vasca, movimiento impulsado por Juan Mari Arzak, Pedro Subijana y el televisivo Karlos Arguiñano, y por la cocina española moderna, que revolucionó el panorama mundial desde los 1990 gracias a maestros como Ferran Adriá, Joan Roca, Andoni Luis Aduriz o Quique Dacosta, hasta las exitosas cocinas regionales, que en Latinoamérica han encontrado enorme éxito. Globalmente estamos viviendo un periodo de alta sofisticación de lo culinario. Chefs como Gastón Acurio, Virgilio Martínez, Pia Leóny Mitsuharu "Micha" Tsumura, en Perú; como Alex Atala, Geovane Carneiro y Helena Rizzo, en Brasil; como Alex Bremont, Pancho Ibañez, Enrique Olvera y Jorge Vallejo en México; como Rodolfo Guzmán y Carolina Bazán, en Chile; como Germán Martitegui en Argentina, entre otros, están transformando para siempre las gastronomías locales, recuperando platos, ingredientes y técnicas que se perdieron con los años, pero además están reinventando y proyectando nuestras cocinas hacia un futuro admirable. Lo que es impresionante es que las creaciones de los autores mencionados no solamente son sugerentes al paladar, a la vista y al olfato, sus platos nos cuentan una historia, tienen un concepto por detrás, es decir son textos, manifiestos, discursos, que se pueden leer, que se pueden interpretar. Lo que es relevante para el presente capítulo, es que se han convertido en mecanismos de revalorización nacional.

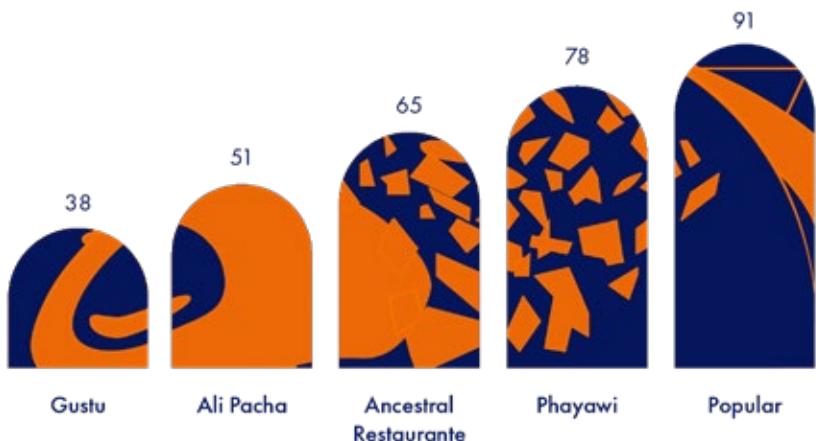
Este impulso ha supuesto una revolución por parte de muchos chefs y espacios gastronómicos en nuestro país. No por nada el posicionamiento de Bolivia en el escenario gastronómico internacional ha sido notorio en la última década. Uno de los hitos más destacados fue la inclusión del restaurante Gustu en el puesto 38 de la lista "Latin America's 50 Best Restaurants" en 2024 (Reed, 2025). Este reconocimiento ha marcado significativamente la percepción global de la cocina boliviana, logrando un posicionamiento internacional como una propuesta de alta cocina con intensas raíces y proyección innovadora.

De igual manera, otros restaurantes como Ali Pacha, Ancestral, Phayawi y Popular han sido incluidos en el ranking de los 100 mejores de América Latina (Reed, 2025), lo que evidencia una consolidación de la oferta culinaria boliviana en el circuito gastronómico latinoamericano. Este fenómeno ha sido posible gracias a una visión que combina la revalorización de ingredientes originarios con propuestas contemporáneas que responden a estándares internacionales de ca-

lidad, sostenibilidad e innovación. Pero, al mismo tiempo, surge a partir de la implementación del diseño como parte de las estrategias de visibilización (Véase Figura 1).

Esto no es casual, la revolución del diseño gastronómico ha supuesto grandes avances en la cocina boliviana. Lo mismo sucede con las cafeterías de especialidad, por ejemplo, que bajo una visión integral, han ido ganando terreno gracias a la revalorización del diseño como eje central comunicativo. Los espacios sociales se han convertido en centros de intercambio y apreciación cultural que surgen como marcos de enunciación discursiva.

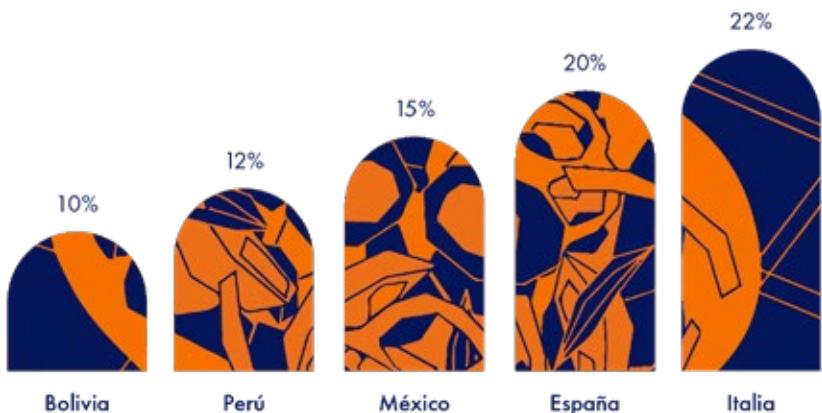
Figura 1: Ranking de restaurantes bolivianos en Latin America's 100 Best Restaurants (2024)



Fuente: Elaboración propia en base a Reed (2024)

El diseño, como eje central para la comunicación visual, permite la apreciación estética y satisfactoria de la comida, del espacio y del producto en sí. Su aplicación es perceptible a través de indicadores económicos que se han plasmado en los últimos años (Véase Figura #2).

Figura 2: Aporte estimado de la gastronomía al PIB (% por país)



Fuente: elaboración propia en base a UNCTAD (2021).

A nivel de indicadores económicos, el sector gastronómico boliviano representa aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), superando incluso al turismo, que aporta alrededor del 5% (El Diario, 2019; La Nube, 2024). Esta cifra refleja la creciente importancia de la gastronomía como motor de crecimiento económico, generador de empleo y dinamizador de cadenas productivas. En comparación con países como Perú (12%), México (15%), España (20%) o Italia (22%), Bolivia muestra un potencial competitivo que podría incrementarse mediante inversiones estratégicas, capacitación y articulación institucional. La presencia de restaurantes bolivianos en rankings internacionales, sirve como indicador simbólico de esta transformación.

Es evidente que el potencial gastronómico supera con creces otras instancias turísticas del país; su reconocimiento ha trascendido en tanto referente de una construcción social, cultural y simbólica sumamente arraigada y hecha visible gracias a la revolución digital.

3. Factores de éxito: ¿Cómo se alcanzaron estos logros?

El ascenso de Bolivia en el panorama gastronómico internacional, no ha sido nada fortuito. Se trata del resultado de un proceso histórico, estructural y colaborativo que ha involucrado a distintos actores del sector público, privado y, sobre todo, social. Uno de los factores clave fue la emergencia de una generación de cocineros y cocineras que asumieron a la gastronomía como un espacio de reivindicación cultural, transformación social y exploración creativa.

A nivel estructural, la consolidación de proyectos como el restaurante escuela Gustu (fundado en 2013 con el apoyo de la fundación danesa Melting Pot) fue fundamental para formar nuevos talentos en gastronomía bajo una perspectiva integral. Esta iniciativa no sólo formó chefs y emprendedores gastronómicos, sino que contribuyó a posicionar la cocina como una herramienta de desarrollo local. También fue crucial la creación de la red de escuelas de cocina MANQ'A, que opera en zonas periurbanas y rurales, democratizando el acceso a la educación gastronómica.

En el ámbito de las políticas públicas, si bien Bolivia no cuenta con una política nacional gastronómica formal como la “Marca País” en Perú, existen esfuerzos institucionales desde gobiernos locales y municipales, el Ministerio de Culturas y Turismo, y el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, que han apoyado ferias, festivales y emprendimientos productivos vinculados a la cocina tradicional y la innovación alimentaria. Aunque en 2017, el gobierno boliviano lanzó la marca país “Corazón del sur”, con ella se hacía énfasis en la potencialidad económica, la diversidad, la cultura y la ubicación geográfica de Bolivia, no reflejaba una estrategia específica para potenciar la gastronomía.

La participación del sector privado ha sido determinante. Empresas, fundaciones, ONGs y colectivos gastronómicos han promovido eventos, publicaciones y plataformas digitales para visibilizar la cocina boliviana dentro y fuera del país. Por ejemplo, MIGA ha desarrollado un sistema de certificación de restaurantes con criterios de sostenibilidad, origen local y justicia alimentaria.

En cuanto al diseño e innovación, el concepto de food design ha servido como marco para integrar conocimientos de nutrición, ecología, arte, antropología y tecnología. Talleres de cocreación, laboratorios de investigación culinaria y colaboraciones interdisciplinarias han potenciado la creatividad de chefs, diseñadores, agricultores y comunidades. Asimismo, el aprovechamiento de la biodiversidad boliviana –que concentra más del 40% de la biodiversidad mundial– ha sido una ventaja estratégica para posicionar ingredientes nativos como la quinua, el tarwi, la kañawa, el ají amarillo, la yuca amazónica o la carne de llama como protagonistas de una cocina de identidad propia y proyección internacional.

Desde esta perspectiva, el diseño, como eje central de la gastronomía, ha logrado integrar cuatro pilares que, sin duda, han sido fundamentales para el crecimiento y la consolidación de la cocina boliviana (Véase figura 3).

Figura 3: Cuatro pilares del Food Design



Fuente: Zampollo, 2017

Estos cuatro pilares establecen una relación intrínseca entre aspectos sociales, tecnológicos, ambientales y gastronómicos, dando paso a la resignificación y consolidación de la comida –y el diseño detrás de ella– como una especie de motor en el que interactúan distintas variables. En definitiva, el diseño ha permitido generar un vínculo entre los distintos ejes que son parte fundamental del éxito. Socialmente, es indudable el modo en el que los hábitos de consumo, los comportamientos en torno a la comida y la comunicación, por ejemplo, se fusionan e intervienen en las distintas propuestas gastronómicas. Por su parte, la tecnología ha significado un salto gigantesco para establecer a Bolivia como un referente internacional, dando paso así a nuevas propuestas conceptuales y de contenido. Y, por supuesto, el eje ambiental ha impulsado distintos espacios que se van alineando poco a poco con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El éxito gastronómico de Bolivia responde a una suma de factores convergentes: formación de capital humano, innovación social, articulación público-privada, valorización cultural y aprovechamiento sostenible de recursos locales. El desafío actual es garantizar la sostenibilidad y escalabilidad de estas iniciativas, consolidándolas como pilares del desarrollo nacional.

4. Desafíos y riesgos a futuro

A pesar de los notables avances en el posicionamiento de la gastronomía boliviana, existen múltiples desafíos y riesgos que podrían afectar su sostenibilidad y expansión. Uno de los principales riesgos es la falta de una política pública integral que articule esfuerzos entre sectores, establezca objetivos claros y garantice financiamiento estable. Sin un marco normativo que reconozca formalmente el valor estratégico de la gastronomía, las iniciativas existentes pueden depender excesivamente del impulso individual o del financiamiento externo.

Otro desafío importante es la desigualdad en el acceso a oportunidades dentro del sector. Si bien existen iniciativas como *MANQ'A*, aún persisten brechas territoriales, económicas y de género que limitan la participación de sectores rurales e indígenas en el circuito gastronómico global. Esta exclusión amenaza con reproducir estructuras coloniales en lugar de superarlas.

El contexto ambiental también representa una amenaza significativa. El cambio climático está afectando la disponibilidad de ingredientes originarios y las prácticas agrícolas tradicionales. Las sequías, heladas y la pérdida de biodiversidad agrícola ponen en riesgo el insumo base de la cocina boliviana. En este sentido, la resiliencia ecológica debe ser parte fundamental de cualquier estrategia de food design a largo plazo.

A nivel internacional, la competencia es intensa. Países como Argentina, Perú, Brasil y México han consolidado marcas país en torno a su gastronomía con fuerte respaldo institucional, campañas de marketing global y redes diplomáticas. Bolivia, sin una estrategia de visibilidad exterior estructurada, podría quedar rezagada a pesar de su potencial.

Otro riesgo es la gentrificación y elitización del food design. Si la cocina de autor se desconecta de las comunidades locales y se convierte en un producto exclusivo para turistas o élites urbanas, se pierde el vínculo social que le da legitimidad y poder transformador. Esta tendencia puede debilitar el impacto redistributivo de la gastronomía en contextos de pobreza o exclusión. Además, la dependencia de proyectos puntuales como Gustu implica una fragilidad institucional. El éxito sostenible requiere una red robusta de actores, instituciones y políticas que garanticen continuidad más allá de liderazgos individuales.

Finalmente, la informalidad laboral en el sector gastronómico representa un riesgo estructural. Muchos trabajadores carecen de acceso a derechos laborales, seguridad social y condiciones dignas. Profesionalizar el sector, garantizar condiciones laborales justas y fomentar la economía solidaria son pasos indispensables para consolidar una gastronomía ética y sostenible.

5. Remarcas finales

La revolución gastronómica en Bolivia representa una oportunidad única para posicionar al país en el mapa mundial mediante una estrategia que articule cultura, economía y sostenibilidad. El food design ha permitido transformar la cocina en una plataforma de innovación social, fortaleciendo la identidad y promoviendo el desarrollo local.

Para consolidar estos logros, es imprescindible diseñar políticas públicas integrales que reconozcan a la gastronomía como sector estratégico. Se recomienda crear una ley nacional de soberanía gastronómica, establecer fondos de financiamiento para emprendimientos culinarios sostenibles y promover redes de formación técnica y profesional descentralizadas.

Asimismo, se debe fortalecer la diplomacia gastronómica boliviana mediante embajadas culturales, participación en ferias internacionales, producción audiovisual y publicaciones especializadas. El Estado puede jugar un rol clave como articulador, pero es vital mantener la autonomía y creatividad del sector privado y de la sociedad civil.

Es fundamental también garantizar la inclusión y diversidad. Las mujeres, pueblos indígenas, comunidades rurales y jóvenes deben tener un rol protagónico en esta transformación. La gastronomía debe ser un vehículo de justicia social y no una réplica de desigualdades.

Desde la perspectiva del diseño, es necesario seguir fomentando espacios de investigación, prototipado y co-creación entre diseñadores, cocineros, agricultores y consumidores. Sólo así se podrá construir una cocina boliviana del siglo XXI, arraigada en sus tradiciones pero abierta al mundo. Bolivia tiene los ingredientes necesarios para convertirse en un referente global de gastronomía sostenible e inclusiva. Consolidar esta revolución requiere visión a largo plazo, articulación multisectorial y un compromiso profundo con la cultura y el territorio.

6. Referencias

El Diario. (2019). La gastronomía genera más ingresos que el turismo. <https://www.eldiario.net>

FAO. (2020). Biodiversidad para la alimentación y la agricultura. <https://www.fao.org>

Gustu. (2023). Memoria institucional. <https://www.gustu.bo>

La Nube. (2024). El impacto económico de la gastronomía en Bolivia.
<https://www.todosnube.com>

MIGA Bolivia. (2023). Informe anual sobre desarrollo gastronómico. <https://www.miga.org.bo>

Melting Pot Bolivia. (2023). Educación gastronómica y desarrollo.
<https://www.meltingpotbolivia.org>

Reed, W. (2025). *Latin America's 50 Best Restaurants*.
<https://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/>

UNCTAD. (2021). Creative Economy Outlook 2022. <https://unctad.org>

Zampollo, F. (2017). The four food design pillars. Online School of Food Design, 1(1), 1-3. onlineschooloffooddesign.org

WORLD TRAVEL AWARDS: BOLIVIA ES "EL MEJOR DESTINO CULTURAL DEL MUNDO 2017"

DESCRIPCIÓN: Bolivia resultó elegida como "Mejor Destino Cultural del Mundo 2017" en la vigesimocuarta edición anual de World Travel Awards (WTA), premio más importante del sector de viajes y hospitalidad

OTORGADO POR: World Travel Awards

PUESTO LOGRADO: 1er puesto

FECHA: 11 / 12 / 2017



RECORD MUNDIAL: BAILE DE MORENADA MÁS GRANDE



DESCRIPCIÓN: El baile de morenada más grande involucra 3.014 personas, organizada por: "La Organización Boliviana de Defensa y Difusión de Folklore" (OBDEFO, Bolivia)). Los 3.014 bailarines fueron acompañados por 1.000 músicos.

UBICACIÓN: Guaqui, La Paz.

OTORGADO POR: Guinness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 25/07/2014

PREMIO BLAVATNIK: DOCTORA MARKITA LANDRY DEL CARPIO



DESCRIPCIÓN: La doctora Markita Landry Del Carpio, es una científica boliviana que ganó el premio Blavatnik en ciencias químicas. Su trabajo consiste en fusionar nanotecnología y neurociencia, desarrollando nanosensores ópticos de infrarrojo cercano, esto permite visualizar la actividad de los neurotransmisores como la dopamina en tiempo real dentro del cerebro. Esta tecnología ayudará a desarrollar tratamientos para combatir la depresión, Alzheimer y adicciones.

OTORGADO POR: Blavatnik 2024, NY – USA

PUESTO LOGRADO: Premio Blavatnik

FECHA: 03/10/2024

MUNDIAL DE RAQUETBOL: CONRRADO MOSCOSO, CAMPEÓN MUNDIAL DE RAQUETBOL

DESCRIPCIÓN: El boliviano Conrrado Moscoso se consagró campeón mundial tras vencer al estadounidense Rocky Carson por tres sets a uno en el Campeonato Mundial de Ráquetbol realizado en San Luis Potosí, México.

OTORGADO POR: Campeonato Mundial de Raquetbol

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 25/08/2022



CAPÍTULO 03

EDUCACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN BOLIVIA: PILAR PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Pamela Córdova

- La educación en planificación familiar es clave para reducir embarazos no planificados y mejorar la salud materno-infantil.
- Bolivia ha ampliado el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y educación sexual integral mediante políticas públicas efectivas.
- Persisten brechas rurales, estigmas culturales y falta de capacitación continua del personal de salud.
- Integrar enfoques de género e interculturalidad mejora la equidad y la calidad de los servicios reproductivos.
- Bolivia se ha consolidado como un referente regional en derechos sexuales y reproductivos.

1. Planificación familiar y desarrollo en Bolivia

A lo largo de las últimas tres décadas, Bolivia ha protagonizado una transformación significativa en materia de salud sexual y reproductiva, convirtiéndose en un referente regional en planificación familiar. Esta evolución ha sido posible gracias a un conjunto de reformas políticas, esfuerzos institucionales y el compromiso de actores sociales que han promovido el acceso equitativo a métodos anticonceptivos modernos y educación integral en sexualidad. En el contexto del Bicentenario de la independencia nacional, resulta especialmente pertinente reflexionar sobre estos avances y su papel en la construcción de una Bolivia más justa, saludable y sostenible (Cardona et al., 2025; UNFPA, 2022; Askew et al., 2024).

La planificación familiar no solo contribuye a mejorar la salud materna e infantil, sino que también fortalece el ejercicio de derechos, la igualdad de género y el desarrollo económico (Cleland et al., 2012; Ahmed et al., 2012). En el caso

boliviano, el uso de métodos anticonceptivos modernos entre mujeres en edad fértil aumentó de apenas 8% en 1989 a más del 32% en 2016 (Cardona et al., 2025; INE, 2020), lo que representa un salto cuantitativo y cualitativo de gran relevancia. Este logro no ha sido fortuito; es el resultado de políticas inclusivas, programas educativos diferenciados, alianzas público-privadas y la participación activa de organizaciones no gubernamentales comprometidas con la salud sexual y reproductiva (Ministerio de Salud y Deportes, 2019; Planned Parenthood Global, 2018).

A nivel internacional, Bolivia ha sido reconocida como país ejemplar por la iniciativa Exemplars in Global Health y por otros organismos multilaterales, en virtud de sus buenas prácticas para aumentar la cobertura de planificación familiar entre poblaciones vulnerables (Askew et al., 2024; Fabic et al., 2015). Este reconocimiento cobra especial valor al considerar las dificultades históricas del país en materia de salud pública, pobreza estructural y barreras socioculturales. Bolivia se posiciona así como un referente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en lo relativo a la salud (ODS 3), la igualdad de género (ODS 5) y la educación de calidad (ODS 4) (Starbird et al., 2016).

La planificación familiar ha demostrado ser un catalizador para el desarrollo. Estudios internacionales y nacionales han evidenciado que las mujeres con acceso a información y métodos anticonceptivos modernos tienden a postergar la maternidad, continuar con su formación académica y participar en el mercado laboral, lo cual repercute positivamente en el bienestar familiar y en el crecimiento económico nacional (Cleland et al., 2012; Barot, 2015). En el país, la reducción sostenida de la Tasa de Mortalidad Materna (TMM) y el aumento de los niveles educativos de las mujeres están estrechamente vinculados a la expansión de servicios de salud reproductiva y educación sexual (INE, 2020; World Health Organization, 2020).

Este capítulo examina en profundidad cómo Bolivia ha logrado avances notables en planificación familiar mediante la educación, las políticas públicas y la innovación institucional. Asimismo, se analizan los desafíos que persisten y se formulan recomendaciones para consolidar y ampliar estos logros de cara al Bicentenario. Se parte del supuesto de que garantizar el acceso universal a la educación en planificación familiar no solo mejora los indicadores de salud, sino que también fortalece la democracia, la equidad y la sostenibilidad social del país (UNFPA, 2022; McCarthy et al., 2020).

2. Bolivia como referente internacional

Bolivia ha sido reconocida internacionalmente como un caso ejemplar en el ámbito de la planificación familiar, lo que marca un hito en su posicionamiento.

to global como país comprometido con los derechos sexuales y reproductivos. Esta distinción, otorgada por iniciativas como Exemplars in Global Health, ha sido posible gracias al aumento sostenido en el uso de métodos anticonceptivos modernos, particularmente en mujeres en edad reproductiva, así como por la implementación de políticas innovadoras y culturalmente pertinentes (Askew et al., 2024).

A nivel regional, Bolivia ha superado a varios países latinoamericanos en el crecimiento relativo de la tasa de prevalencia anticonceptiva moderna (mCPR). Entre 1989 y 2016, esta tasa se incrementó en más de 24 puntos porcentuales, un ritmo de crecimiento superior al de países como Perú, Paraguay o Ecuador, que compartían contextos socioeconómicos similares. Con base en datos del programa DHS y la OMS, mientras que Bolivia alcanzó una mCPR del 32,4% en 2016, países como Paraguay registraban apenas un 28,1%, y Ecuador un 31% para ese mismo año. En América Latina, solo países como Colombia (con una mCPR del 57% en 2016) o Brasil (60%) han alcanzado niveles superiores, aunque en contextos más urbanizados y con estructuras estatales más robustas.

Además del crecimiento en uso de anticonceptivos, el país ha registrado progresos en la reducción de la Tasa de Mortalidad Materna (TMM), que descendió de 416 por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 155 en 2020, según estimaciones del Banco Mundial (2022) (Ahmed et al., 2012; Sully et al., 2020). Esta reducción supera la media de América Latina, que fue de 170 en ese mismo año, y pone a Bolivia por delante de países como Guatemala (178) y Honduras (185), lo cual refleja el impacto positivo de la planificación familiar como intervención estratégica en salud pública (Cardona et al., 2025).

En comparación con países de África y Asia reconocidos por sus políticas en planificación familiar, Bolivia también presenta logros destacables. En Kenia y Etiopía, por ejemplo, se impulsaron programas comunitarios para distribuir anticonceptivos, mientras que en Bolivia se fortalecieron los centros de atención diferenciada para jóvenes (AIDA) y se promovió la educación sexual en escuelas urbanas y rurales. Esta estrategia ha permitido una transición de modelos verticales hacia servicios adaptados al contexto sociocultural y etario de la población (Cardona et al., 2025; Katz et al., 2002).

El reconocimiento global también se fundamenta en la colaboración exitosa con organismos internacionales como UNFPA, Marie Stopes International y CIES. Estas organizaciones no solo han contribuido con financiamiento y provisión de insumos, sino que han implementado campañas educativas como "Tú Decides" -pioneras en incorporar una perspectiva juvenil y de derechos humanos. Este tipo de alianzas ha sido replicado como modelo en otros países (UNFPA, 2022).

En términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Bolivia ha demostrado avances consistentes en varios indicadores vinculados al ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 4 (educación de calidad) y el ODS 5 (igualdad de género). La proporción de mujeres jóvenes que utilizan métodos modernos de anticoncepción ha aumentado, y el país ha institucionalizado la educación integral en sexualidad dentro del sistema educativo formal en varias regiones, aunque con niveles desiguales de implementación (McCarthy et al., 2020).

Bolivia también ha mostrado avances en el plano normativo. La inclusión del derecho a la salud sexual y reproductiva en la Constitución Política del Estado (2009) y la aprobación de leyes específicas como la Ley de Juventud (342/2013) y la Ley 1152 (2019) son consistentes con estándares internacionales y muestran un compromiso estatal con el cumplimiento de los ODS. En América Latina, solo unos pocos países como Uruguay y Argentina han institucionalizado marcos legales tan amplios, en derechos sexuales y reproductivos, lo que sitúa a Bolivia en un grupo selecto de países firmemente comprometidos con este enfoque de salud pública (Askew et al., 2024).

Desde la perspectiva de indicadores internacionales, el país ha mejorado notablemente su posición en los reportes globales de salud reproductiva. Según el UNFPA (2022), el país ha sido uno de los pocos en Latinoamérica que logró reducir simultáneamente la tasa de mortalidad materna, incrementar la demanda satisfecha de métodos modernos y ampliar la cobertura de servicios diferenciados para adolescentes (Banco Mundial, 2022).

En el plano global, el modelo boliviano de planificación familiar presenta elementos de replicabilidad y sostenibilidad. Por ejemplo, el Fondo Rotatorio para Anticonceptivos, impulsado con apoyo del UNFPA, ha permitido mantener una cadena de suministro estable incluso tras el retiro de USAID en 2013, mostrando que la inversión nacional puede sostener políticas estratégicas sin depender exclusivamente de cooperación internacional (Sully et al., 2020).

Sin embargo, persisten desafíos en comparación con países como Bangladesh o Vietnam, donde la institucionalización de la educación sexual y los programas de visitas domiciliarias han logrado tasas de cobertura superiores al 60% en zonas rurales. En Bolivia, si bien la cobertura es alta en zonas urbanas, existen disparidades marcadas en poblaciones indígenas y rurales. La cobertura de salud reproductiva en el área rural boliviana aún presenta una brecha de hasta 20 puntos porcentuales respecto a las zonas urbanas (Heaton & Forste, 1998; Katz et al., 2002).

La experiencia boliviana se presenta, por tanto, como un caso de aprendizaje para otros países de ingreso medio que enfrentan barreras culturales, geográficas y políticas similares. La clave ha sido combinar un marco normativo sólido,

financiamiento sostenible (como el Fondo Rotatorio de Anticonceptivos) y participación social activa, elementos que han permitido mantener el progreso más allá de los cambios políticos o económicos del país. En este sentido, Bolivia se alinea con estrategias exitosas como las del Programa de Salud Familiar de Brasil o el modelo integral de salud reproductiva de Ruanda, pero adaptado a su propio entorno sociopolítico y demográfico (Bongaarts & Sinding, 2011).

Bolivia ha logrado articular un modelo integral de planificación familiar que ha generado reconocimiento internacional. Su experiencia demuestra que, incluso en contextos de vulnerabilidad estructural, es posible avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos reproductivos y contribuir con ello al bienestar social, al empoderamiento de las mujeres y al desarrollo sostenible. El país no solo ha reducido su tasa de natalidad y mejorado sus indicadores de salud, sino que también ha reforzado el rol de las mujeres en el desarrollo nacional, posicionándose como un ejemplo a seguir en la región latinoamericana y más allá (Cardona et al., 2025).

Bolivia ha sido reconocida internacionalmente como un caso ejemplar en el ámbito de la planificación familiar, lo que marca un hito en su posicionamiento global como país comprometido con los derechos sexuales y reproductivos. Esta distinción, otorgada por iniciativas como Exemplars in Global Health, ha sido posible gracias al aumento sostenido en el uso de métodos anticonceptivos modernos, particularmente en mujeres en edad reproductiva, así como por la implementación de políticas innovadoras y culturalmente pertinentes (Askew et al., 2024).

A nivel regional, Bolivia ha superado a varios países latinoamericanos en crecimiento relativo de la tasa de prevalencia anticonceptiva moderna (mCPR). Entre 1989 y 2016, esta tasa creció más de 24 puntos porcentuales, un ritmo de crecimiento superior al de países como Perú, Paraguay o Ecuador, que compartían contextos socioeconómicos similares. Según datos del programa DHS y la OMS, mientras que Bolivia alcanzó una mCPR del 32,4% en 2016, países como Paraguay registraban apenas un 28,1%, y Ecuador un 31% para ese mismo año.

Este avance se explica en parte por el enfoque multisectorial aplicado en Bolivia, que articuló políticas de salud, educación y desarrollo social con la cooperación internacional. Ejemplo de ello es el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), que desde 2002 ofreció cobertura gratuita para servicios de salud reproductiva y que fue ampliado posteriormente mediante la Ley 3250 (2005) para incluir anticonceptivos. A su vez, el Sistema Único de Salud (SUS), creado en 2019, consolidó esta tendencia al establecer la gratuidad universal para la atención en salud sexual y reproductiva.

En comparación con países de África y Asia reconocidos por sus políticas en planificación familiar, Bolivia también presenta logros destacables. En Kenia y Etiopía, por ejemplo, se impulsaron programas comunitarios para distribuir anticonceptivos, mientras que en Bolivia se fortalecieron los centros de atención diferenciada para jóvenes (AIDA) y se promovió la educación sexual en escuelas urbanas y rurales. Esta estrategia ha permitido una transición de modelos verticales hacia servicios adaptados al contexto sociocultural y etario de la población (Cardona et al., 2025).

El reconocimiento global también se fundamenta en la colaboración exitosa con organismos internacionales como UNFPA, Marie Stopes International y CIES. Estas organizaciones no solo han contribuido con financiamiento y provisión de insumos, sino que han implementado campañas educativas como "Tú Decides" que fueron pioneras en incorporar una perspectiva juvenil y de derechos humanos. Este tipo de alianzas ha sido replicado como modelo en otros países (UNFPA, 2022).

Bolivia también ha mostrado avances en el plano normativo. La inclusión del derecho a la salud sexual y reproductiva en la Constitución Política del Estado (2009) y la aprobación de leyes específicas como la Ley de Juventud (342/2013) y la Ley 1152 (2019) son consistentes con estándares internacionales y muestran un compromiso estatal con el cumplimiento de los ODS (Starbird et al., 2016).

Desde la perspectiva de indicadores internacionales, Bolivia ha mejorado notablemente su posición en los reportes globales de salud reproductiva. Según el UNFPA (2022), el país ha sido uno de los pocos en Latinoamérica que logró reducir simultáneamente la tasa de mortalidad materna, incrementar la demanda satisfecha de métodos modernos y ampliar la cobertura de servicios diferenciados para adolescentes (Banco Mundial, 2022).

No obstante, persisten desafíos en comparación con países como Bangladesh o Vietnam, donde la institucionalización de la educación sexual y los programas de visitas domiciliarias han logrado tasas de cobertura superiores al 60% en zonas rurales. En Bolivia, si bien la cobertura es alta en zonas urbanas, existen disparidades marcadas en poblaciones indígenas y rurales (Heaton & Forste, 1998). La experiencia boliviana se presenta, por tanto, como un caso de aprendizaje para otros países de ingreso medio que enfrentan barreras culturales, geográficas y políticas similares. La clave ha sido combinar un marco normativo sólido, financiamiento sostenible (como el Fondo Rotatorio de Anticonceptivos) y participación social activa, elementos que han permitido mantener el progreso más allá de los cambios políticos o económicos del país.

Bolivia ha logrado articular un modelo integral de planificación familiar que ha generado reconocimiento internacional. Su experiencia demuestra que, incluso

en contextos de vulnerabilidad estructural, es posible avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos reproductivos y contribuir con ello al bienestar social, al empoderamiento de las mujeres y al desarrollo sostenible (Cardona et al., 2025).

3. Claves del avance boliviano

El éxito de Bolivia en planificación familiar no es producto del azar ni de una única política, sino de un entramado complejo de decisiones políticas, reformas estructurales, cooperación internacional y compromiso ciudadano. A lo largo de los últimos treinta años, el país ha logrado articular un enfoque multisectorial e intercultural que ha impulsado cambios significativos en la salud sexual y reproductiva, y que hoy es reconocido a nivel global como un modelo replicable para otros países de ingreso medio (Cardona et al., 2025).

3.1. Fundamentos históricos y estructurales

Durante la década de 1990, Bolivia enfrentaba una de las tasas de mortalidad materna más altas de América Latina, acompañada de niveles alarmantes de pobreza, analfabetismo y desigualdad de género. En este contexto, se promovieron importantes reformas al sistema de salud y educación, impulsadas tanto por organismos multilaterales como por el propio Estado. En 1994 se instauró la Reforma de la Participación Popular y la descentralización, que permitió empoderar a los municipios para invertir en programas de salud y educación con enfoque territorial (Cardona et al., 2025; Banco Mundial, 2022).

En paralelo, Bolivia fue beneficiaria de iniciativas globales como el Programa de Salud Reproductiva de USAID y los fondos de UNFPA, que permitieron instalar capacidades institucionales en planificación familiar. La firma de los compromisos del Cairo (1994) y de Beijing (1995) también motivó al Estado boliviano a incorporar los derechos sexuales y reproductivos como parte de su agenda pública (Askew et al., 2024).

Asimismo, el diseño de los programas de atención primaria en salud (APS) fortaleció la red de establecimientos de primer nivel, y permitió que la planificación familiar sea considerada una intervención esencial y no marginal (Cardona et al., 2025).

3.2. Políticas públicas y marco legal

Una de las claves del éxito ha sido la consolidación de un marco normativo progresista. La Constitución Política del Estado de 2009 reconoció explícitamente los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos fundamentales. Este marco fue reforzado por la Ley 342 de la Juventud (2013), que establece

la provisión gratuita de métodos anticonceptivos y el acceso a servicios de salud diferenciados (Askew et al., 2024).

Asimismo, el lanzamiento del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) en 2002 y, posteriormente, el Sistema Único de Salud (SUS) en 2019 permitieron ampliar de forma sustancial el acceso gratuito a métodos de planificación familiar. Estos servicios no solo cubren la provisión de insumos, sino que incorporan consejería, seguimiento y educación en salud sexual en el primer nivel de atención (WHO, 2020; Cardona et al., 2025).

También se destaca la Resolución Ministerial 0754 de 2014, que regula la atención en salud sexual y reproductiva en adolescentes, lo que permitió estandarizar protocolos, indicadores y modelos de atención.

3.3. Sociedad civil y cooperación internacional

La participación de la sociedad civil ha sido uno de los pilares fundamentales en el éxito de la planificación familiar en Bolivia. Organizaciones no gubernamentales como CIES Salud Sexual – Reproductiva, Marie Stopes Bolivia y Planned Parenthood Global han desempeñado un rol estratégico en la expansión del acceso a servicios de salud sexual, especialmente en contextos rurales e indígenas. Estas entidades desarrollaron campañas de comunicación educativa, implementaron programas de formación de promotores comunitarios y desplegaron unidades móviles de salud para alcanzar poblaciones en situación de vulnerabilidad (Planned Parenthood Global, 2018; Asociación CIES, 2020).

Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otras agencias multilaterales como USAID brindaron apoyo técnico y financiero clave al Ministerio de Salud. En particular, el uso del Fondo Rotatorio de Anticonceptivos, promovido por el UNFPA, permitió garantizar la sostenibilidad del abastecimiento de insumos incluso tras la salida de USAID en 2013 (Arequipa & Aguilar, 2024; UNFPA, 2022). Este modelo de financiamiento mixto fue reconocido internacionalmente como una estrategia eficaz para la autonomía nacional en políticas reproductivas (USAID, 2016; Starbird et al., 2016).

La implementación de enfoques innovadores como el de pares educadores ha sido especialmente efectiva entre adolescentes y jóvenes. Programas como "Tú Decides" y "Jóvenes con Decisión", impulsados con apoyo de la cooperación internacional, han integrado la educación en sexualidad con herramientas digitales y espacios de participación juvenil, logrando mayor apropiación del mensaje y mejor adherencia a los métodos anticonceptivos modernos (McCarthy et al., 2020; Brady et al., 2017).

En comunidades rurales e indígenas, la figura del promotor comunitario de salud ha sido crucial para tender puentes entre los sistemas biomédicos y las cosmovisiones locales. Estos líderes comunitarios actúan como mediadores culturales, traductores lingüísticos y educadores, legitimando la planificación familiar en contextos donde persisten prácticas tradicionales y resistencia institucional (Cardona et al., 2025; Pozo et al., 2012).

Además, Bolivia se diferencia de otros países donde, pese a la inversión internacional, los avances en planificación familiar se estancaron. Por ejemplo, en Jordania entre 2002 y 2012, la tasa de fertilidad no descendió a pesar de una fuerte inversión de USAID, debido a barreras socioculturales persistentes y limitada apropiación local de las políticas (Spindler et al., 2017). En contraste, el caso boliviano demuestra cómo la articulación entre sociedad civil, Estado y organismos internacionales puede generar transformaciones sostenidas y culturalmente adaptadas.

El papel de la sociedad civil boliviana ha sido más que complementario: ha sido catalizador de cambios estructurales, promotor de innovación educativa, y garante de equidad territorial en el acceso a la planificación familiar. Su experiencia refuerza la noción de que el compromiso multisectorial y la cooperación contextualizada son condiciones necesarias para la sostenibilidad de políticas públicas en salud reproductiva.

3.4. Innovaciones institucionales y tecnológicas

La implementación de centros de atención diferenciada para adolescentes (como los Centros AIDA), ha sido un elemento diferenciador en la región. Estos espacios brindan servicios adaptados a las necesidades emocionales y educativas de los jóvenes, lo cual ha sido reconocido como una buena práctica por el Banco Mundial y el Ministerio de Salud (Cardona et al., 2025; McCarthy et al., 2020). En términos de innovación tecnológica, Bolivia ha incursionado en el uso de plataformas móviles para difundir contenidos sobre salud reproductiva. Un ejemplo es el proyecto “JovenSalud.net” adaptado en Bolivia, que ha utilizado SMS y redes sociales para informar sobre métodos anticonceptivos, especialmente en poblaciones jóvenes rurales (McCarthy et al., 2020)

Otra innovación significativa ha sido la creación de aplicaciones móviles y bots de mensajería usados por ONGs para brindar información confidencial, consultas y orientación en tiempo real. Estas herramientas digitales han sido eficaces para reducir barreras de acceso en jóvenes, especialmente mujeres.

También se destaca la inclusión de contenidos de salud sexual y reproductiva en la currícula escolar a través del nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo implementado a partir de la Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez (Ley 070,

2010). Aunque su implementación ha sido desigual, representa un avance en la institucionalización del enfoque de derechos en el sistema educativo.

3.5. Cultura, género e interculturalidad

Finalmente, el enfoque intercultural ha sido clave para el éxito del modelo boliviano. La formación de promotores en salud sexual bilingües, el uso de materiales en idiomas originarios, y la adaptación de los servicios a las prácticas y costumbres locales han facilitado una mayor aceptación comunitaria. En especial, el liderazgo de mujeres indígenas en procesos de educación y consejería ha transformado las relaciones de poder dentro de las comunidades.

La promoción de la autonomía reproductiva y la articulación con organizaciones de mujeres campesinas e indígenas, como la Bartolina Sisa, han fortalecido un discurso propio desde los territorios, alineado con los derechos y la soberanía corporal.

También ha sido determinante el apoyo de líderes comunitarios y autoridades tradicionales, que han respaldado —en algunos casos tras procesos deliberativos— la introducción de servicios de planificación familiar en sus comunidades, desafiando tabúes y resistencias (Cardona et al., 2025).

En resumen, los logros de Bolivia en planificación familiar se sustentan en una articulación virtuosa entre políticas públicas progresistas, cooperación internacional eficaz, innovación educativa y participación ciudadana. Esta combinación de factores ha permitido al país posicionarse como un ejemplo global, con resultados medibles en salud, equidad y empoderamiento.

4. Amenazas a la sostenibilidad

Pese a los notables avances en planificación familiar logrados por Bolivia, aún persisten múltiples desafíos que podrían comprometer la sostenibilidad y ampliación de estos logros. Las amenazas internas y externas se entrelazan con barreras estructurales y con las tensiones entre avances normativos y realidades socioculturales diversas, especialmente en zonas rurales e indígenas. Esta sección analiza los principales riesgos, obstáculos y la capacidad del país para mantenerse como referente internacional (Cardona et al., 2025).

4.1. Amenazas internas: desigualdades persistentes y brechas territoriales

Una de las amenazas más significativas radica en las persistentes desigualdades territoriales. A pesar del acceso universal establecido por el Sistema Único de Salud (SUS), existen diferencias marcadas en la cobertura de métodos anticonceptivos entre zonas urbanas y rurales. Según datos del Ministerio de Salud y UNFPA

(2022), mientras que en las capitales departamentales más del 75% de mujeres acceden a métodos modernos, esta cifra cae por debajo del 50% en municipios con alta concentración indígena o geográficamente aislados. (UNFPA, 2022)

El acceso desigual a servicios se ve agravado por factores como la rotación frecuente del personal de salud, la escasez de insumos en algunos centros y la débil implementación de la atención diferenciada para adolescentes en zonas alejadas. Además, aún existen regiones donde los servicios de planificación familiar no cuentan con personal capacitado en enfoque de derechos, perspectiva de género e interculturalidad (Cardona et al., 2025).

4.2. Barreras culturales, religiosas y sociales

A nivel comunitario, persisten obstáculos vinculados a creencias religiosas conservadoras, mandatos de género patriarcales y tabúes sobre la sexualidad, particularmente entre adolescentes. Si bien el marco normativo garantiza el acceso a educación sexual integral, su implementación enfrenta resistencias en ciertos entornos escolares y comunidades donde la sexualidad aún es un tema vedado (Heaton & Forste, 1998).

Estas barreras socioculturales pueden limitar la eficacia de las estrategias institucionales, especialmente cuando no se articulan con liderazgos locales. La ausencia de campañas continuas de comunicación y de formación de promotores interculturales en algunos municipios profundiza esta brecha. Asimismo, existe el riesgo de retrocesos si no se preserva el carácter laico de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva.

4.3. Factores económicos y sostenibilidad financiera

Si bien Bolivia ha demostrado capacidad para sostener sus programas tras el retiro de USAID, la sostenibilidad financiera sigue siendo una preocupación. El Fondo Rotatorio de Anticonceptivos ha sido esencial, pero su funcionamiento depende de la eficiencia administrativa del sistema de adquisiciones y de una asignación presupuestaria estable.

La planificación familiar compite con otras prioridades de salud en contextos de presión fiscal y crisis económica. La pandemia de COVID-19 evidenció la vulnerabilidad del sistema, cuando muchos servicios de salud sexual fueron relegados, generando un aumento en embarazos no planificados y discontinuación en el uso de métodos anticonceptivos (UNFPA, 2022; Cardona et al., 2025).

4.4. Vulnerabilidad frente a cambios políticos y normativos

Otro riesgo clave es la inestabilidad política. El avance normativo alcanzado podría verse afectado por cambios en la orientación ideológica de los gobiernos, lo que podría traducirse en modificaciones regresivas o en desfinanciamiento de programas sensibles como la atención diferenciada en salud sexual para adolescentes.

La experiencia regional muestra que los derechos sexuales y reproductivos son particularmente vulnerables a presiones políticas y religiosas. Bolivia debe blindar sus avances mediante mecanismos de protección legal, institucionalización técnica y fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil (Askew et al., 2024).

4.5. Riesgos globales y crisis ambientales

El contexto internacional también representa riesgos indirectos. El desfinanciamiento de organismos multilaterales, los cambios en las prioridades de la cooperación internacional o las crisis ambientales podrían desviar recursos y atención de los temas de planificación familiar. Las migraciones internas por efecto del cambio climático pueden, además, generar presiones sobre servicios de salud en áreas urbanas periféricas (Cardona et al., 2025).

Por otra parte, la digitalización de la educación y salud, acelerada por la pandemia, plantea nuevos desafíos en términos de acceso equitativo. La brecha digital de género, la falta de conectividad y la baja alfabetización digital en mujeres rurales pueden limitar el alcance de estrategias innovadoras que dependen del entorno virtual.

4.6. Capacidad de respuesta institucional y comunitaria

Pese a estos riesgos, Bolivia cuenta con importantes fortalezas para enfrentar los desafíos. Entre ellas destaca la existencia de un marco legal robusto, redes comunitarias activas y una tradición de articulación entre Estado y sociedad civil en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, será necesario invertir en fortalecimiento institucional sostenido: mejorar la formación del personal de salud, garantizar abastecimiento continuo y fortalecer mecanismos de monitoreo y evaluación.

Asimismo, se requiere ampliar la participación de juventudes, organizaciones indígenas y actores locales en el diseño y seguimiento de las políticas. Solo una gobernanza participativa y territorializada podrá anticipar y responder a los riesgos futuros.

Bolivia ha consolidado avances notables en planificación familiar, pero su sostenibilidad dependerá de su capacidad para cerrar brechas territoriales y culturales, proteger los marcos normativos, garantizar la financiación estable e integrar

enfoques de resiliencia ante cambios globales. Preservar estos logros requerirá voluntad política, innovación constante y una alianza renovada con las comunidades (Cardona et al., 2025).

5. Recomendaciones estratégicas

Bolivia ha demostrado, a lo largo de las últimas décadas, una notable capacidad para implementar políticas de planificación familiar que han contribuido directamente a la reducción de la mortalidad materna e infantil, al empoderamiento de las mujeres y al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos avances, sin embargo, no pueden darse por sentados. Preservarlos y ampliarlos requerirá un compromiso renovado de todos los sectores de la sociedad boliviana (Banco Mundial, 2022).

Una primera recomendación clave es consolidar el financiamiento público sostenido para los programas de salud sexual y reproductiva, asegurando que el Fondo Rotatorio de Anticonceptivos y otros mecanismos logísticos estén plenamente institucionalizados dentro del sistema nacional de salud. Esta medida permitirá garantizar el abastecimiento permanente y equitativo, especialmente en zonas rurales e indígenas.

En segundo lugar, se hace necesario fortalecer las capacidades del personal de salud en todos los niveles, incorporando formación continua en enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. Esto implica además la expansión de servicios diferenciados para adolescentes, con énfasis en la confidencialidad, accesibilidad y calidad del trato, de modo que se reduzcan las barreras estructurales que hoy enfrentan los y las jóvenes (McCarthy et al., 2020).

Desde el ámbito educativo, se recomienda avanzar en la implementación universal de la educación integral en sexualidad dentro del currículo nacional. Para ello, es indispensable formar y acompañar a los docentes, dotarlos de recursos pertinentes y superar las resistencias ideológicas mediante procesos de diálogo comunitario que respeten la diversidad cultural del país.

También es fundamental potenciar la articulación entre el Estado, la sociedad civil organizada, los gobiernos autónomos y los pueblos indígenas. La planificación familiar debe dejar de ser vista únicamente como un servicio médico, para convertirse en una política de Estado que atraviese el desarrollo rural, la educación, el trabajo y la igualdad de género. En este sentido, se deben institucionalizar espacios de participación ciudadana que evalúen, propongan y fiscalicen las políticas públicas (Cardona et al., 2025).

Las juventudes deben ocupar un rol central en la siguiente etapa del proceso. Su participación activa en el diseño y monitoreo de programas puede garantizar la pertinencia cultural y la sostenibilidad de las intervenciones. Así mismo, es crucial

integrar el uso de tecnologías digitales para ampliar el acceso a la información y servicios, reduciendo las brechas de género y territorio.

En suma, el país posee las bases institucionales, normativas y comunitarias para consolidar su posición como país líder en planificación familiar. El reto ahora es fortalecer la gobernanza multinivel, blindar los derechos conquistados ante posibles regresiones y generar nuevas alianzas para una transformación estructural. Esta tarea no solo tiene implicancias en el campo de la salud, sino que incide directamente en el bienestar social, el desarrollo económico inclusivo y la construcción de una sociedad más justa y equitativa para las futuras generaciones (Cardona et al., 2025).

Referencias

- Ahmed, S., Li, Q., Liu, L., & Tsui, A. O. (2012). Maternal deaths averted by contraceptive use: An analysis of 172 countries. *The Lancet*, 380(9837), 111–125. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60478-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60478-4)
- Asociación CIES Salud Sexual – Reproductiva. (2020). *Informe de gestión institucional*. <https://www.cies.org.bo>
- Askew, I., Raney, L., Kerrigan, M., & Sridhar, A. (2024). Family planning saves maternal and newborn lives: Why universal access to contraception must be prioritized in national maternal and newborn health policies, financing, and programs. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 164(2), 536–540. <https://doi.org/10.1002/ijgo.14720>
- Banco Mundial. (2022). *Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births)* – Bolivia. <https://data.worldbank.org>
- Bongaarts, J., & Sinding, S. W. (2011). Population policy in transition in the developing world. *Science*, 333(6042), 574–576. <https://doi.org/10.1126/science.1207558>
- Brady, M., Salazar, G., & Neupane, S. (2017). Youth-centered contraceptive services: Promoting youth-friendly approaches to increase uptake and continuation of contraceptives. Population Council. <https://knowledgecommons.popcouncil.org/>
- Cardona, C., Rusatira, J. C., Salmeron, C., Martinez-Baack, M., Rimon, J. G., Anglewicz, P., & Ahmed, S. (2024). Progress in reducing socioeconomic inequalities in the use of modern contraceptives in 48 focus countries as part of the FP2030 initiative between 1990 and 2020: a population-based analysis. *The Lancet Global Health*, 13(1), e38–e49. [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(24\)00424-8](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(24)00424-8)

Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and health. *The Lancet*, 380(9837), 149–156. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60609-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60609-6)

Aruquipa, R., & Aguilar, L. (2024). Derechos reproductivos de las mujeres en Bolivia: una visión de acceso. ARU Search, 4(4), 45-85. <https://www.aru.org.bo/journalaru/index.php/arusearch/article/view/34>

Fabic, M. S., Choi, Y., Bongaarts, J., Darroch, J. E., Ross, J. A., Stover, J., & Upadhyay, U. D. (2015). Meeting demand for family planning within a generation: The post-2015 agenda. *The Lancet*, 385(9981), 1928–1931. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61031-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61031-5)

Heaton, T. B., & Forste, R. (1998). Education as policy: The impact of education on marriage, contraception, and fertility in Colombia, Peru, and Bolivia. *Social Biology*, 45(3–4), 194–213. <https://doi.org/10.1080/19485565.1998.9988956>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020). Indicadores de salud materna e infantil en Bolivia. <https://www.ine.gob.bo>

Katz, K. R., Johnson, L. M., Janowitz, B., & Carranza, J. M. (2002). Reasons for the low use of IUDs in El Salvador. *International Family Planning Perspectives*, 28(1), 26–31. <https://doi.org/10.2307/3088273>

Ley N° 342. (2013). Ley de la Juventud. Estado Plurinacional de Bolivia. <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-342.xhtml>

McCarthy, O. L., Aliaga, C., Torrico Palacios, M. E., Ellsberg, M., Hughes, P., & Free, C. (2020). An intervention delivered by mobile phone instant messaging to increase acceptability and use of effective contraception among young women in Bolivia: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 22(6), e14073. <https://doi.org/10.2196/14073>

Ministerio de Salud y Deportes - Estado Plurinacional de Bolivia. (2019). Lineamientos técnicos para la atención diferenciada en salud integral a adolescentes y jóvenes. La Paz, Bolivia.

Planned Parenthood Global. (2018). Programas comunitarios y educación en sexualidad en América Latina: Experiencias de Bolivia. <https://www.plannedparenthood.org>

Pozo, K. C., Fernandez, F. G., & Hagens, A. J. (2012). Análisis comparativo de la Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes y sus determinantes en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. *Estadísticas de Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes Análisis de sus determinantes y Guía de Atención psicológica*, 2, 32. <https://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD16617.pdf#page=41>

Starbird, E., Norton, M., & Marcus, R. (2016). Investing in family planning: Key to achieving the Sustainable Development Goals. *Global Health: Science and Practice*, 4(2), 191–210. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374>

Sully, E. A., Biddlecom, A., Darroch, J. E., Riley, T., Ashford, L. S., & Lince-Deroche, N. (2020). Adding it up: Investing in sexual and reproductive health 2019. Guttmacher Institute. <https://www.guttmacher.org/report/adding-it-up-investing-in-sexual-reproductive-health-2019>

UNFPA. (2022). State of World Population 2022: Seeing the Unseen – The Case for Action in the Neglected Crisis of Unintended Pregnancy. Fondo de Población de las Naciones Unidas. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN_SWP22%20report_0.pdf

Spindler, E., Bitar, N., Solo, J., Menstell, E., & Shattuck, D. (2017). Jordan's 2002 to 2012 fertility Stall and parallel USAID Investments in Family Planning: Lessons from an assessment to guide future programming. *Global Health Science and Practice*, 5(4), 617–629. <https://doi.org/10.9745/ghsp-d-17-00191>

World Health Organization (WHO). (2020). *Family planning/Contraception: Fact sheet*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>

RECORD MUNDIAL: MAYOR ALTITUD ALCANZADA EN UN AUTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN: La mayor altura alcanzada por un auto eléctrico es 5.816 metros y fue alcanzada por Rainer Zietlow, de nacionalidad alemana y LG energy solution en Uturuncu volcán en Quetena chico, Bolivia. El automóvil es un



Volkswagen ID. 4 GTX el 18 de mayo de 2022. Con este record se espera que las comunidades usen más autos eléctricos en beneficio con el medio ambiente.

UBICACIÓN: San Pablo de Lípez - Potosí

OTORGADO POR: Guinness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 18/05/2022

PATINAJE ARTÍSTICO: MEDALLA DE BRONCE EN WORLD ARTISTIC SERIES 2025



DESCRIPCIÓN: Los patinadores artísticos Anahí Saavedra (19) y Paulo Andía (23), becarios del programa Sueño Bicentenario, conquistaron la medalla de bronce en el prestigioso campeonato World Artistic Series 2025, realizado en Buenos Aires, Argentina.

UBICACIÓN: Buenos Aires, Argentina

OTORGADO POR: Medalla de Bronce

PUESTO LOGRADO: World Artistic Series 2025

FECHA: 09/12/24

RECORD MUNDIAL: LA CAPITAL MÁS ALTA

DESCRIPCIÓN: La Paz, la ciudad administrativa y capital de facto de Bolivia, que se encuentra a una altura de 3.631 metros (11.913 pies) a nivel del mar.

UBICACIÓN: Nuestra Señora de La Paz

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 01/01/2016

200

CAPÍTULO 04

MOVILIDAD SOCIAL EDUCATIVA EN BOLIVIA: 1997-2021 *

Lykke E. Andersen

- En las últimas dos décadas, Bolivia ha registrado el mayor avance en el Índice de Movilidad Social Educativa (IMSE) de toda América Latina y el Caribe.
- En 2020, Bolivia alcanzó el IMSE más alto jamás registrado para jóvenes de 20 a 25 años en la base de datos SEDLAC, que reúne más de 400 encuestas de hogares realizadas en la región desde 1980.
- No obstante, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en el país, poniendo en riesgo estos logros extraordinarios.
- A pesar del aumento en los años de escolaridad, la baja calidad educativa en Bolivia genera dudas sobre la relación entre nivel educativo, competencias reales y acceso a empleos de calidad.

1. Introducción

En uno de los primeros estudios empíricos sobre movilidad social —o igualdad de oportunidades— en América Latina, Andersen (2000, 2001) desarrolló una metodología para medir el nivel de movilidad intergeneracional en diversos países de la región. Los resultados ubicaron a Bolivia entre los países con menor movilidad social hacia finales del siglo pasado (1997), lo que sugería la existencia de una “trampa de baja movilidad y bajo crecimiento económico”, es decir, cuando las posibilidades de mejorar la propia situación mediante el esfuerzo personal son limitadas, se debilita la motivación para estudiar y trabajar arduamente y sin esfuerzo individual generalizado, el desarrollo económico nacional se ve comprometido.

Una década más tarde, tras importantes transformaciones políticas y sociales, Andersen (2010) mostró que la movilidad social en Bolivia había mejorado de manera notable. El Índice de Movilidad Social Educativa del país pasó de 0.80 en 1997 a 0.88 en 2007, lo que indicaba un avance sustantivo y la posible superación de la trampa de baja movilidad.

* La autora agradece la colaboración y retroalimentación de Guillermo Guzmán Prudencio.

En este capítulo actualizamos el análisis hasta 2021, utilizando la última Encuesta de Hogares disponible, y ampliamos la comparación con otros países de América Latina. Los resultados muestran que Bolivia no solo ha mantenido sus avances, sino que destaca como el país con mayor progreso en términos de movilidad social en la región.

El resto del capítulo se organiza de la siguiente manera: la sección 2 utiliza datos de CEDLAS y el Banco Mundial para comparar los avances de Bolivia con los de otros países de América Latina y el Caribe. La sección 3 analiza los factores que explican estos logros y demuestra que los avances son generalizados, beneficiando a distintos grupos poblacionales (mujeres y hombres, población rural y urbana, indígena y no indígena). La sección 4 examina las amenazas que podrían poner en riesgo estos avances, y la sección 5 presenta las conclusiones.

2. Bolivia en el escenario internacional

Existen diversas metodologías para estimar el nivel de movilidad social, pero debido a limitaciones en los datos disponibles, la forma más común de medición en países en desarrollo ha sido a través de la educación (ver Behrman, Birdsall y Székely, 1998; Dahan y Gaviria, 2001; Andersen, 2000, 2001, 2003; Mercado y Leitón-Quiroga, 2009). Este enfoque parte de la suposición —ampliamente respaldada por la evidencia empírica— de que la educación es uno de los principales determinantes del ingreso futuro. En efecto, la variable “años de educación” suele explicar la mayor parte de la variación en ingresos laborales en los modelos económétricos (Fields, 1996).

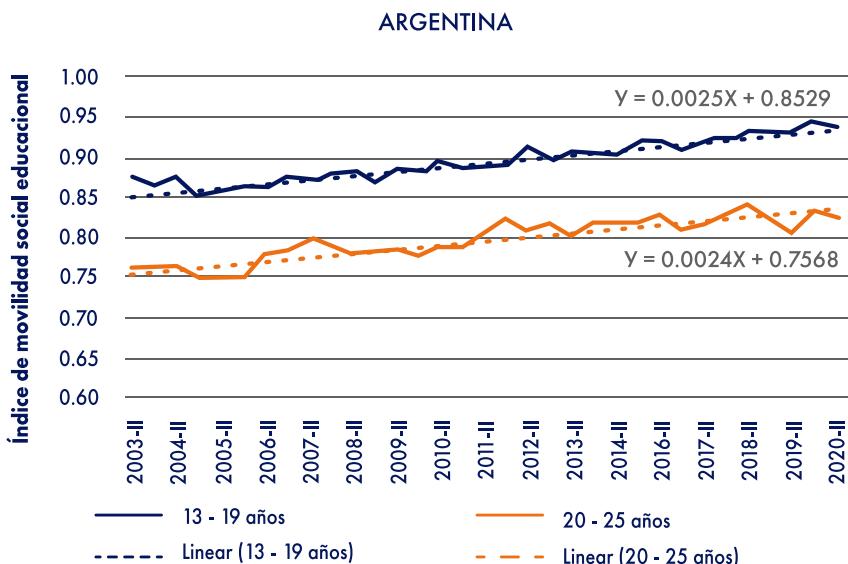
El principio fundamental de las mediciones de movilidad social educativa consiste en evaluar cuánto influyen las circunstancias familiares —en particular, el nivel educativo y los ingresos de los padres— sobre el nivel educativo alcanzado por los hijos. Cuando dicha influencia es elevada, se interpreta como baja movilidad social; por el contrario, cuando las circunstancias familiares tienen poca incidencia, se considera que existe un alto grado de igualdad de oportunidades y, por ende, mayor movilidad social.

La metodología propuesta por Andersen (2000, 2001, 2003) ha sido ampliamente adoptada por instituciones que estudian la movilidad social en América Latina. Por ejemplo, el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), en conjunto con el Banco Mundial, utiliza el Índice de Movilidad Social Educativa (IMSE) de Andersen como su principal indicador en la base de datos socioeconómica para América Latina y el Caribe, CEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial, 2022). Esta base de datos incluye estimaciones del IMSE para cientos de encuestas realizadas entre 1980 y 2020, lo que permite comparaciones consistentes a lo largo del tiempo y entre países.

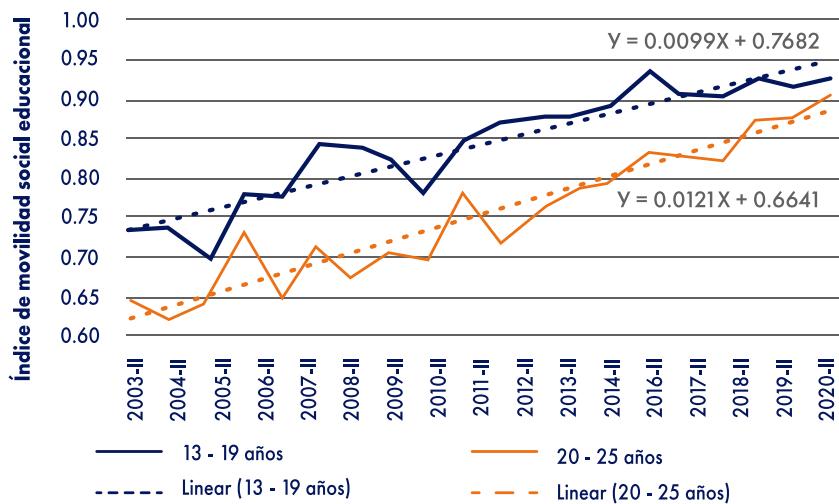
Gracias a esta base de datos, es posible comparar la evolución de la movilidad social en Bolivia con la de otros países de la región. El Gráfico 1 presenta los resultados para dos grupos etarios: adolescentes entre 13 y 19 años, y jóvenes entre 20 y 25 años. Desde que la educación secundaria se volvió obligatoria en Bolivia en 2010, casi todos los adolescentes completan este nivel educativo, independientemente de su lugar de residencia, género, etnicidad o condición socioeconómica (Andersen et al., 2020). Sin embargo, el nivel de ingresos del hogar y la educación de los padres siguen teniendo un impacto significativo en la trayectoria educativa, especialmente entre los jóvenes de 20 a 25 años, cuya continuidad educativa ya no está respaldada por la obligatoriedad legal.

Si bien la mayoría de los países de América Latina muestran una tendencia al alza en los niveles de movilidad social educativa, Bolivia destaca como el país con los avances más marcados. En promedio, el IMSE en Bolivia creció 0.0099 puntos por año para el grupo de adolescentes (13–19 años) y 0.0121 puntos por año para el grupo de jóvenes (20–25 años). El segundo país con mayores avances fue Ecuador, con incrementos anuales de 0.0081 y 0.0066, respectivamente, lo que subraya la magnitud del progreso boliviano en este ámbito.

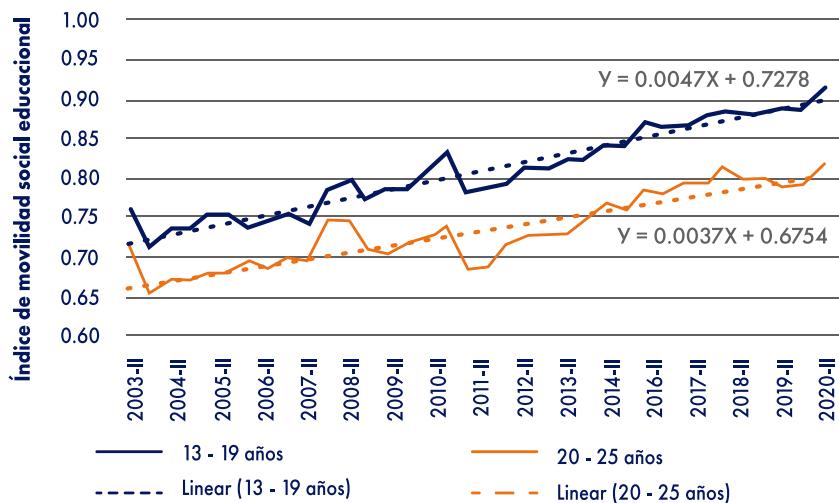
Gráfico 1: Índice de movilidad social educacional (IMSE) para países de América Latina, diferentes períodos.



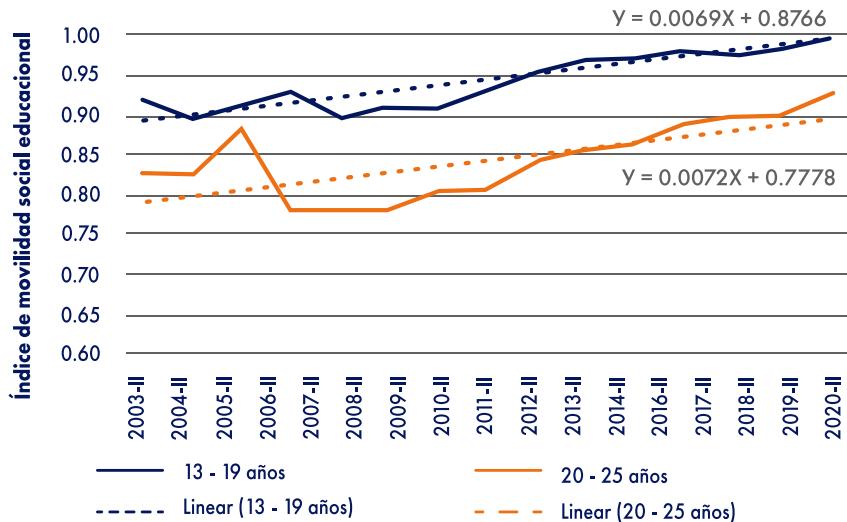
BOLIVIA



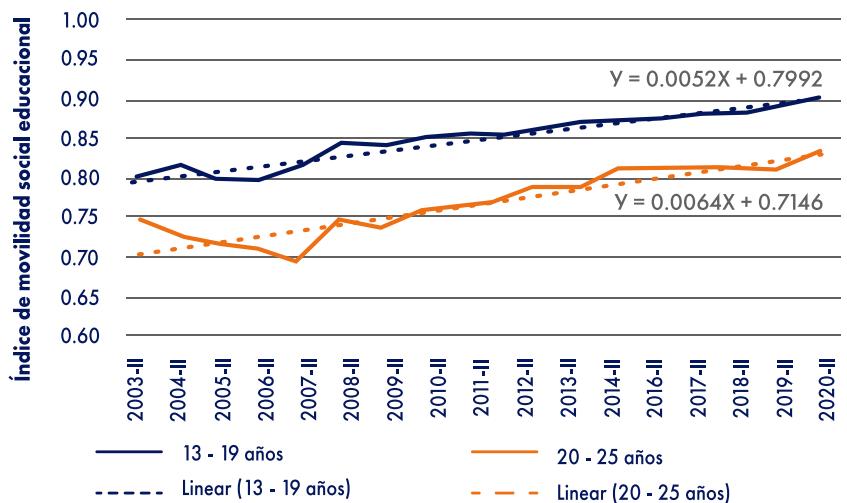
BRASIL



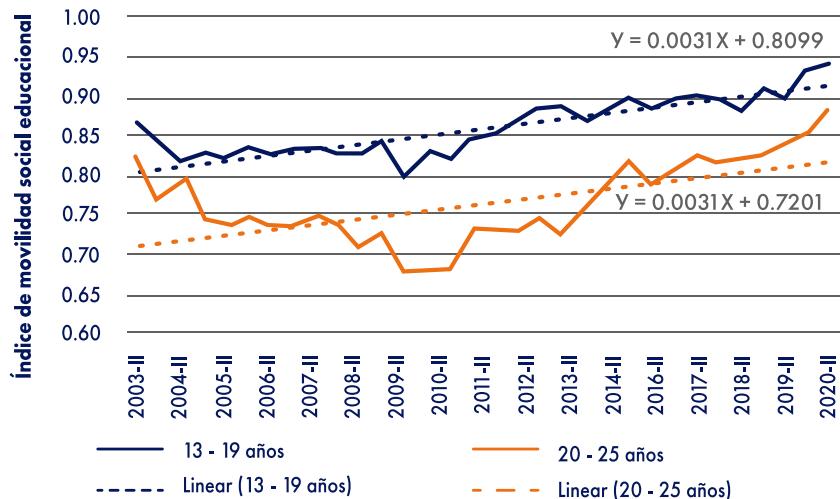
CHILE



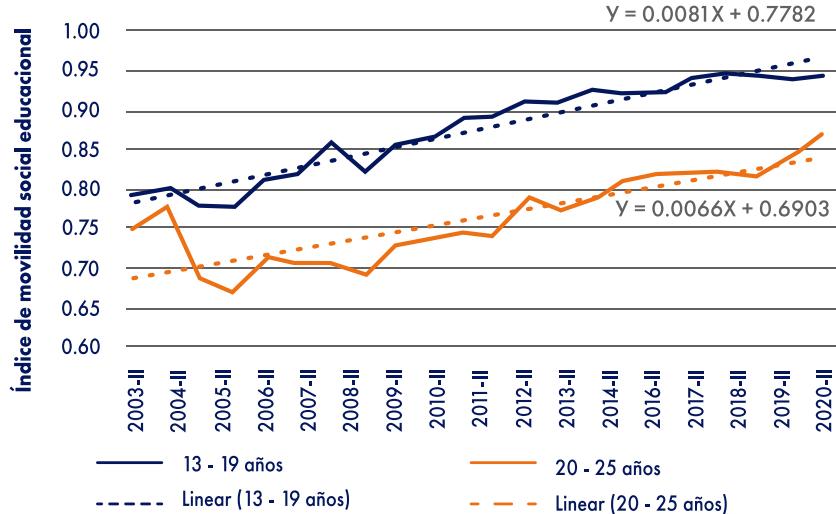
COLOMBIA



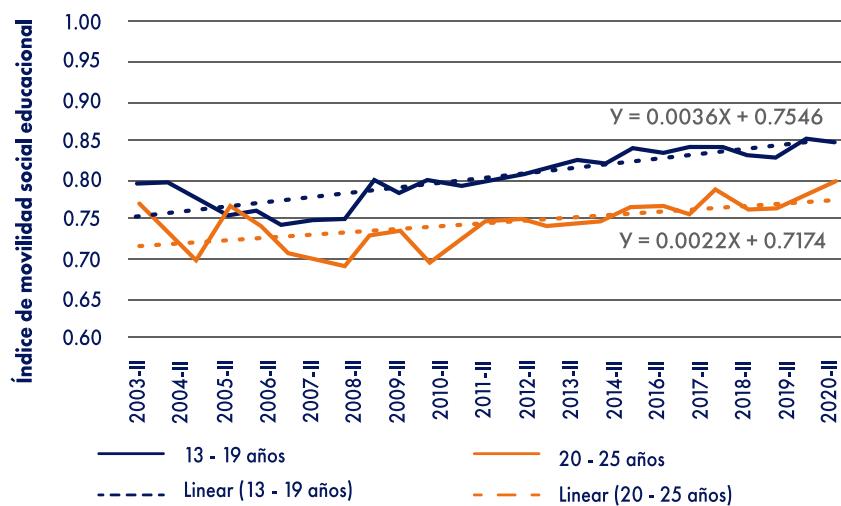
COSTA RICA



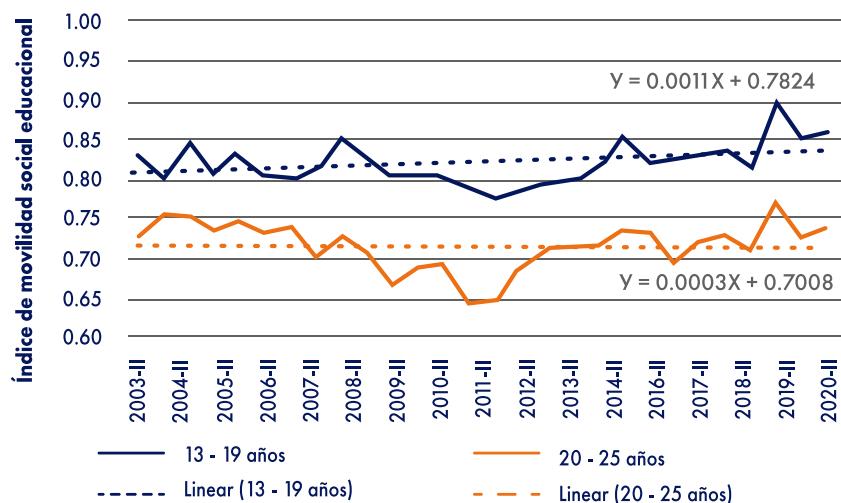
ECUADOR



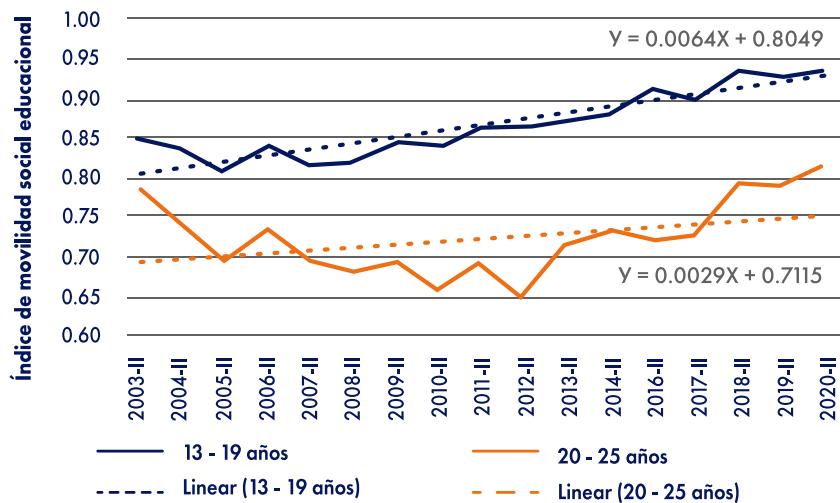
EL SALVADOR



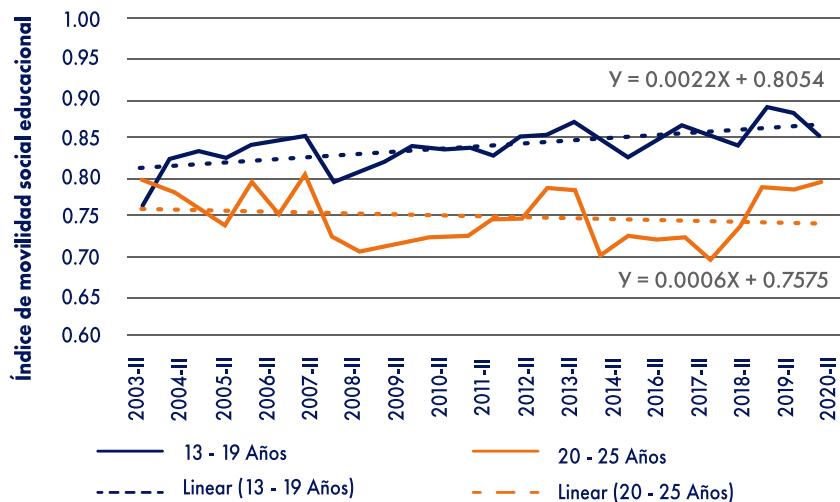
HONDURAS



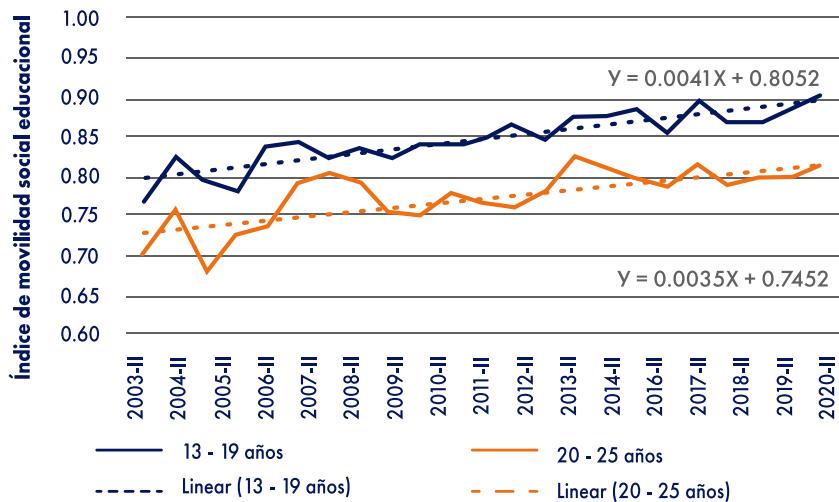
MÉXICO



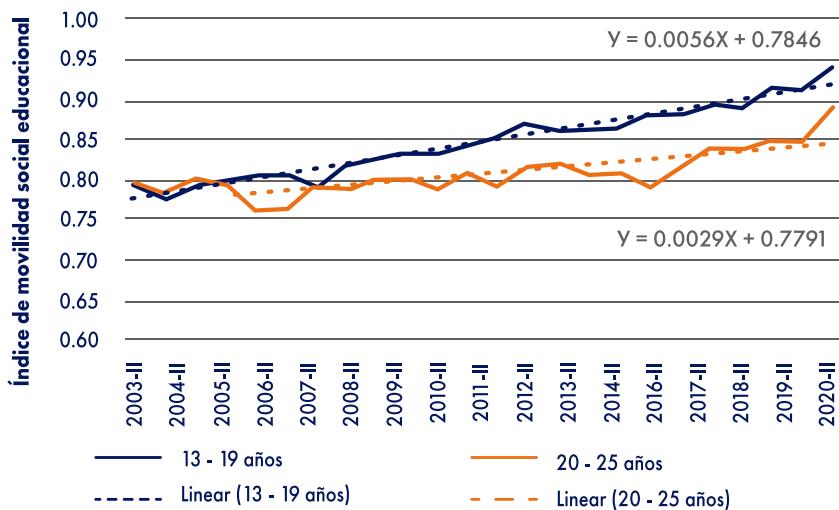
PANAMÁ



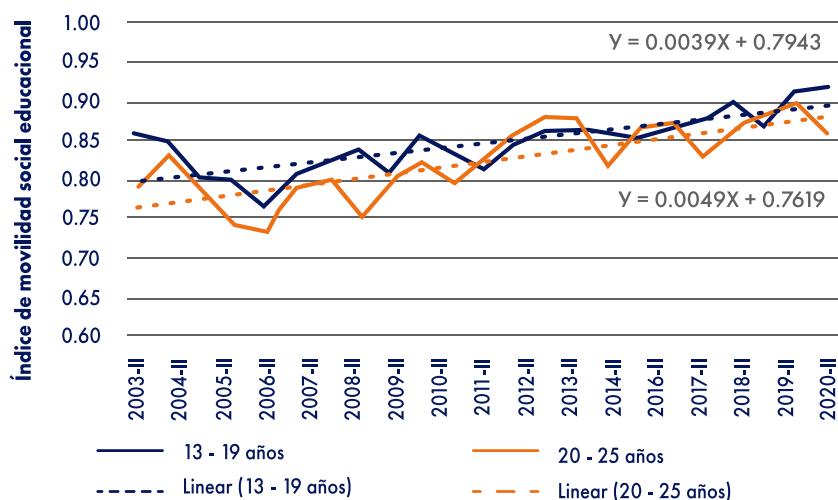
PARAGUAY



PERÚ



REPÚBLICA DOMINICANA



Fuente: Elaboración propia en base a información de CEDLAS y el Banco Mundial (2022).

En 2020, Bolivia alcanzó un Índice de Movilidad Social Educativa (IMSE) de 0.925 para jóvenes de entre 20 y 25 años, el valor más alto registrado en toda la base de datos SEDLAC, que incluye más de 400 encuestas de hogares realizadas en América Latina y el Caribe desde 1980. El único país que se aproximó a ese nivel fue Chile, con un IMSE de 0.915 en el mismo año. Sin embargo, como se mostró en el gráfico anterior, Bolivia experimentó una disminución en este indicador en 2021, cayendo a 0.878, lo que sugiere que los efectos de la pandemia de COVID-19 no fueron homogéneos y afectaron de manera desigual a distintos grupos poblacionales.

En el grupo de adolescentes de 13 a 19 años, Chile se posiciona como líder regional con un IMSE de 0.984, lo que implica que solo el 1.6% de la variancia en los niveles educativos se explica por el nivel educativo y los ingresos de los padres. Bolivia ocupa el segundo lugar, con un IMSE de 0.944 en 2020, lo que indica que apenas el 5.6% de la varianza educativa está determinada por el origen familiar. Esta cifra, aunque ligeramente inferior a la de Chile, también representa un nivel excepcionalmente alto de igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo boliviano, incluso en niveles postsecundarios.

En contraste, Guatemala continúa enfrentando serias dificultades en este ámbito. A finales del siglo XX, su nivel de movilidad social educativa era extremadamente bajo, con un IMSE inferior a 0.75 para adolescentes. Según los datos más recientes disponibles en SEDLAC, el IMSE guatemalteco para adolescentes alcan-

zó apenas 0.84 en 2014. Aunque existe una nueva encuesta de hogares para 2021, nuestros propios cálculos sugieren que los avances han sido mínimos, con un IMSE de apenas 0.845.

Estos resultados confirman que los logros de Bolivia en materia de movilidad social educativa han sido verdaderamente extraordinarios. Tras revisar más de 400 encuestas de hogares en la región, no se ha identificado ningún otro país que haya experimentado avances tan consistentes y significativos como Bolivia en las últimas dos décadas.

3. Factores de éxito: ¿cómo se alcanzaron estos logros?

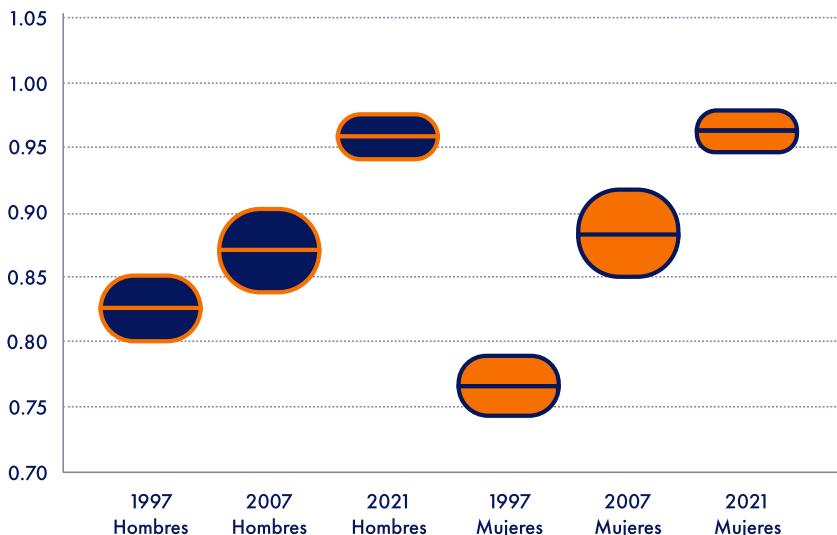
Los notables avances de Bolivia en movilidad social educativa durante las últimas décadas no son producto del azar, sino el resultado de una combinación de políticas públicas, transformaciones institucionales, dinámicas sociales y mejoras sostenidas en las condiciones de vida. En esta sección se identifican los principales factores que explican estos logros, reforzados por evidencia empírica por subgrupos poblacionales.

a) Políticas de inclusión educativa

Una de las claves fue la expansión del acceso a la educación secundaria y superior, especialmente para poblaciones históricamente excluidas. La educación secundaria obligatoria a partir de 2010 y la reforma educativa del mismo año promovieron la inclusión de estudiantes indígenas, mujeres y habitantes rurales mediante contenidos interculturales, programas bilingües y mayor presencia del Estado en zonas remotas.

Los resultados por subgrupos muestran que las mejoras fueron particularmente significativas para las mujeres. Como se observa en el Gráfico 2, la brecha de movilidad social educativa entre hombres y mujeres, que favorecía a los varones en 1997, desapareció en 2021. En ese año, ambos géneros alcanzaron niveles equivalentes de movilidad educativa, lo que refleja un avance notable hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Gráfico 2: Índice de movilidad social educacional (13-19 Años) en Bolivia por género: 1997, 2007 y 2021



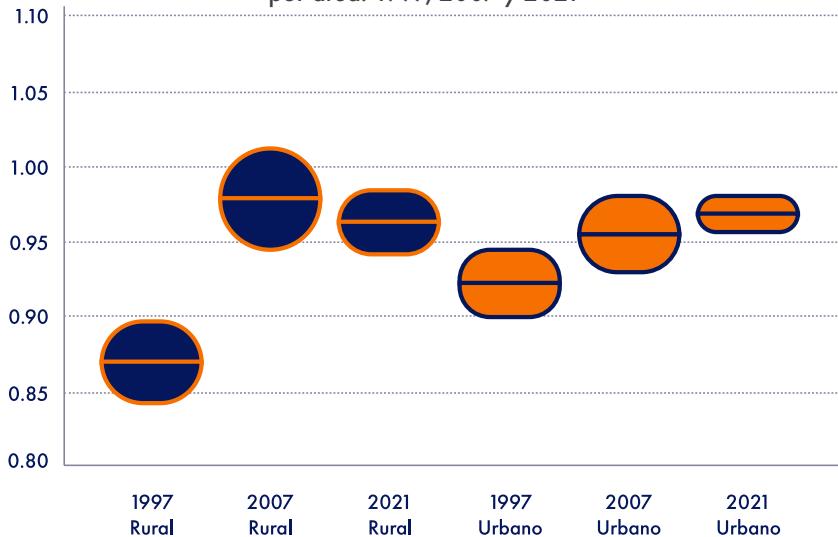
Nota: El área coloreada indica el intervalo de confianza de 95%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Andersen (2010) y estimaciones actuales.

b) Enfoque territorial y equidad regional

Las zonas rurales, tradicionalmente rezagadas en términos educativos, experimentaron avances significativos entre 1997 y 2007, en parte gracias a la expansión de la infraestructura escolar, la capacitación docente y los programas de apoyo focalizados. Aunque entre 2007 y 2021 los avances se estancaron en el área rural, el resultado final fue una convergencia con el área urbana, como se muestra en el Gráfico 3. En 2021, ambos entornos presentaban niveles similares de movilidad social educativa, lo que implica una importante reducción de las desigualdades territoriales.

Gráfico 3: Índice de movilidad social educacional (13-19 años) en Bolivia por área: 1997, 2007 y 2021



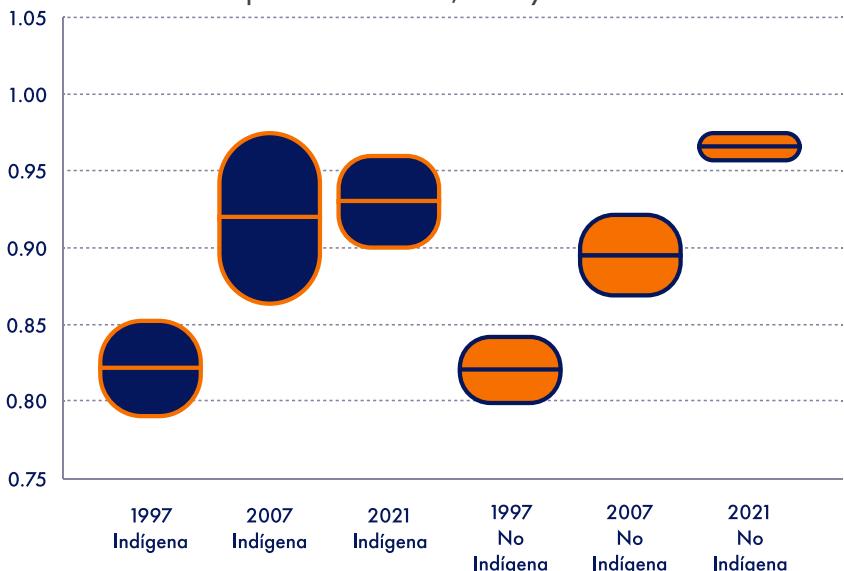
Nota: El área coloreada indica el intervalo de confianza de 95%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Andersen (2010) y estimaciones actuales.

c) Inclusión de pueblos indígenas

La nueva Constitución Política del Estado de 2009 y la legislación educativa posterior incorporaron explícitamente el derecho a una educación intercultural y en lengua originaria. Estas medidas no solo aumentaron la matrícula y la permanencia de estudiantes indígenas, sino que también fortalecieron la pertinencia del sistema educativo en contextos diversos. El Gráfico 4 confirma que tanto adolescentes indígenas como no indígenas se beneficiaron significativamente del aumento en la movilidad social educativa, aunque partían de niveles distintos. Esta mejora en ambos grupos refleja la efectividad de políticas inclusivas y culturalmente sensibles.

Gráfico 4: Índice de movilidad social educacional (13-19 años) en Bolivia por etnicidad: 1997, 2007 y 2021



Nota: El área coloreada indica el intervalo de confianza de 95%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Andersen (2010) y estimaciones actuales.

d) Programas de transferencias y reducción de la pobreza

El programa de transferencias condicionadas Bono Juancito Pinto, lanzado en 2006, ha sido un pilar clave en la estrategia de retención escolar en Bolivia. Al otorgar un incentivo económico anual a estudiantes de primaria y secundaria del sistema público, el programa ayudó a reducir las tasas de deserción escolar, especialmente en zonas rurales y entre grupos vulnerables (Yañez, 2012).

Este esfuerzo se complementó con una marcada disminución de la pobreza y la desigualdad en Bolivia entre 2005 y 2014, periodo en el que el crecimiento económico sostenido, los programas sociales y el aumento del salario mínimo generaron mejoras significativas en el bienestar de los hogares. Estas mejoras permitieron que más familias pudieran apoyar la educación de sus hijos (no solo en términos materiales, sino también en tiempo, acompañamiento y aspiraciones), contribuyendo así a fortalecer las condiciones para la movilidad social educativa.

En conjunto, los programas sociales y la mejora de las condiciones económicas del hogar generaron un entorno más favorable para que niños y adolescentes

pudieran completar sus trayectorias educativas sin interrupciones por razones económicas.

e) Cambios en las aspiraciones sociales

El periodo de mayor avance en movilidad social educativa coincidió con una transformación profunda en las aspiraciones sociales de las familias bolivianas. La llegada de Evo Morales a la presidencia en 2006 —percibido por gran parte de la población como el primer mandatario de origen indígena en la historia del país— tuvo un impacto simbólico de gran alcance, especialmente para sectores históricamente marginados.

Morales encarnó la posibilidad real de que personas de origen rural e indígena pudieran ocupar espacios de poder y liderazgo, lo que ayudó a expandir el imaginario colectivo sobre lo que era posible alcanzar a través del esfuerzo y la participación cívica. Como han señalado varios estudios (Yashar, 2011; Postero, 2017), su figura reconfiguró los horizontes de posibilidad para muchas familias, especialmente en comunidades rurales, lo que quizá incentivó a padres y madres a invertir con mayor convicción en sus hijos e hijas, destacándose la educación.

Este cambio se dio en paralelo a una serie de reformas simbólicas y materiales orientadas a la descolonización de la educación y la revalorización de identidades indígenas, como la incorporación de lenguas originarias en el currículo escolar y la creación de universidades indígenas interculturales.

Si bien los efectos de estos cambios son difíciles de cuantificar por sí solos, es razonable asumir que el aumento de la autoestima colectiva, la ampliación del horizonte de expectativas y la mayor presencia de referentes sociales positivos contribuyeron a fortalecer la motivación y la perseverancia educativa, factores clave para la movilidad social.

En conjunto, estos factores estructurales, institucionales, simbólicos y culturales ayudan a explicar los avances extraordinarios que Bolivia logró en términos de movilidad social educativa entre 1997 y 2021. Las mejoras fueron sostenidas, inclusivas y distribuidas entre diversos grupos poblacionales, lo cual sugiere que no se trató de un fenómeno aislado o coyuntural, sino del resultado de transformaciones profundas en las condiciones materiales, las políticas públicas y las aspiraciones colectivas. Si bien queda camino por recorrer para consolidar estos avances y traducirlos en movilidad intergeneracional en ingresos y bienestar, la experiencia boliviana demuestra que un país con grandes desafíos de desigualdad estructural puede generar saltos importantes en igualdad de oportunidades si existe un entorno político comprometido, instituciones eficaces, inversión pública sostenida y una ciudadanía con aspiraciones renovadas.

4. Desafíos y riesgos a futuro

A pesar de los avances notables en términos de acceso y equidad educativa en Bolivia, persisten desafíos estructurales que podrían limitar la sostenibilidad de los logros alcanzados en movilidad social. El principal de ellos es la baja calidad de la educación y su escasa conexión con las demandas del mundo laboral.

Bolivia ha logrado una cobertura casi universal en educación básica y secundaria, con niveles similares de asistencia escolar entre grupos rurales y urbanos, mujeres y varones, e incluso entre poblaciones indígenas y no indígenas. Sin embargo, como han evidenciado recientes evaluaciones del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE)¹, la mayoría de los estudiantes no alcanza niveles satisfactorios en comprensión lectora, escritura o razonamiento lógico-matemático. La asistencia a la escuela ya no es garantía de aprendizaje significativo.

Esta desconexión entre escolaridad y competencias reales tiene implicaciones preocupantes. Por un lado, genera una percepción de progreso –los jóvenes obtienen títulos y certificados– pero sin adquirir las herramientas necesarias para acceder a empleos de calidad. Por otro lado, erosiona el valor del título de bachiller, ya que para muchos empleadores este ya no representa una señal confiable de productividad o preparación. A ello se suma la debilidad de la educación técnica, la escasa orientación vocacional, y la falta de coordinación entre el sistema educativo y los sectores productivos.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en Bolivia fueron catastróficas, con una pérdida de más de 2 años de educación para muchos alumnos sin las condiciones adecuadas para estudiar en línea. Los impactos han afectado a los niños y jóvenes de manera desigual, causando un retroceso significativo en la movilidad social educativa.

Finalmente, existe un riesgo de frustración social. A medida que las aspiraciones educativas y profesionales aumentan, especialmente entre sectores históricamente excluidos, la falta de oportunidades reales para materializar estas aspiraciones puede traducirse en desilusión, desempleo o subempleo, y pérdida de confianza en las instituciones.

Para evitar que estos desafíos erosionen los logros en movilidad social alcanzados por Bolivia, será necesario pasar de una lógica centrada exclusivamente en cobertura a una agenda centrada en calidad, pertinencia y resultados de aprendizaje. Esto implica revalorizar la formación técnica, fortalecer la formación docente, conectar el sistema educativo con el mundo del trabajo, y asegurar que

¹ <https://www.opce.gob.bo/webopce/>

todos los estudiantes, sin importar su origen, desarrollen las habilidades necesarias para construir una vida digna y productiva.

5. **Remarcas finales**

Entre 1997 y 2021, Bolivia experimentó un avance extraordinario en términos de movilidad social educativa. A través de políticas públicas ambiciosas de inclusión, expansión de la cobertura educativa y transformaciones sociales profundas, el país logró romper con una histórica trampa de baja movilidad y bajo crecimiento. Hoy, Bolivia destaca entre los países de América Latina con los mayores niveles de igualdad de oportunidades educativas, especialmente en el grupo etario de adolescentes.

Este progreso se reflejó en la reducción sistemática de las brechas por género, área de residencia y etnidad. Las mujeres alcanzaron niveles de movilidad similares a los hombres, el área rural logró cerrar la brecha con las ciudades y los pueblos indígenas mejoraron notablemente su situación, en un contexto de mayor reconocimiento y valorización cultural. Estos avances son el resultado de una combinación de factores: reformas legales que garantizan la obligatoriedad de la educación secundaria, expansión del sistema público, mayor inversión social, programas de transferencias condicionadas y un clima sociopolítico que elevó las aspiraciones de los sectores históricamente excluidos.

Sin embargo, este proceso exitoso enfrenta hoy amenazas importantes. El acceso a la educación ha dejado de ser el principal cuello de botella, pero la baja calidad de los aprendizajes y su débil articulación con el mundo del trabajo amenazan con frenar el círculo virtuoso de la movilidad social. Como revelan los datos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, una parte significativa de los estudiantes bolivianos no logra adquirir competencias básicas en lectura, escritura y matemáticas, lo que pone en entredicho la utilidad real de los años de escolaridad acumulados.

En este nuevo escenario, Bolivia debe ajustar su estrategia. Ya no basta con asegurar la asistencia a la escuela; ahora es urgente garantizar que el tiempo que los estudiantes pasan en el sistema educativo genere aprendizajes relevantes y transformadores. En base a los hallazgos de este capítulo, proponemos las siguientes recomendaciones:

- Priorizar la calidad educativa, invirtiendo en formación docente, evaluación continua y apoyo pedagógico, especialmente en escuelas rurales y de alta vulnerabilidad social.
- Revalorizar la educación técnica y vocacional, fortaleciendo su pertinencia, su calidad y su conexión con las oportunidades laborales locales y regionales.

- Reforzar los vínculos entre el sistema educativo y el mercado laboral, mediante alianzas público-privadas, programas de pasantías, mentorías y orientación vocacional desde edades tempranas.
- Proteger los logros alcanzados en términos de equidad, asegurando que la recuperación post-pandemia no profundice brechas previas, especialmente entre jóvenes en transición hacia la educación superior o el empleo.
- Mejorar los sistemas de información y monitoreo, para evaluar no solo la cobertura educativa, sino también los aprendizajes, trayectorias laborales y oportunidades reales de desarrollo para los jóvenes.

Bolivia ha demostrado que es posible mejorar la movilidad social de manera acelerada en un contexto latinoamericano. El desafío ahora es sostener y profundizar este proceso, asegurando que el sistema educativo se convierta en una verdadera palanca de inclusión, innovación y bienestar colectivo.

6. Referencias

Andersen, L. E. (2000). "Social Mobility in Latin America." Institute for Socio-Economic Research, Universidad Católica Boliviana. Working Paper No. 03/2000. https://iisec.ucb.edu.bo/assets_iisec/publicacion/2000-3.pdf

Andersen, L. E. (2001). Social Mobility in Latin America: Links with Adolescent Schooling. In: Inter-American Development Bank, Working Paper. No. 433, July. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1814693>

Andersen, L. E. (2003). "Social Mobility in Latin America: Links with Adolescent Schooling." In: S. Duryea, A. Cox-Edwards & M. Ureta (eds.): Critical Decisions at a Critical Age: Adolescents and Young Adults in Latin America. Inter-American Development Bank. Chapter 6, pp. 219-247. <https://webimages.iadb.org/publications/english/document/Critical-Decisions-at-a-Critical-Age-Adolescents-and-Young-Adults-in-Latin-America.pdf>

Andersen, L. E. (2010). "Social Mobility in Bolivia is finally improving!" Latin American Journal of Economic Development, 13: 117-136. <http://www.scielo.org.bo/pdf/rilde/n13/v8n13a04.pdf>

Andersen, L. E., Medinaceli, A., Maldonado, C. & Hernani-Limarino, W. (2020). A country at risk of being left behind: Bolivia's quest for quality education. Southern Voice, Occasional Paper Series, No. 63. <https://southernvoice.org/wp-content/uploads/2020/05/quest-quality-education-Bolivia-Andersen-et-al-2020-1.pdf>

Behrman, J. R., Birdsall, N. y Székely, M. (1998). "Intergenerational Schooling Mobility and Macro Conditions and Schooling Policies in Latin America." Inter-American Development Bank, Office of the Chief Economist, Mimeo. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1817183>

CEDLAS & The World Bank (2022). Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean. <https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/#1496165425791-920f2d43-f84a>

Dahan, M. y Gaviria, A. (2001). "Sibling Correlations and Intergenerational Mobility in Latin America." *Economic Development and Cultural Change*, 49(3): 537-54. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/452514>

Fields, G. S. (1996). "Accounting for Differences in Income Inequality." Draft, School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, January.

Mercado, A. F., & Leiton-Quiroga, J. G. (2009). La dinámica de la pobreza en bolivia. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, 7(11), 45–82. <https://doi.org/10.35319/lajed.200911169>.

Postero, N. (2017). *The Indigenous State: Race, Politics, and Performance in Pluri-national Bolivia*. University of California Press. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31309>

Yañez, E. (2012). El impacto del Bono Juancito Pinto. Un análisis a partir de microsimulaciones. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, (17), 75-112. DOI: <https://doi.org/10.35319/lajed.201217139>

Yashar, D. (2011). *Indigenous Politics in Latin America*. Cambridge University Press.

WORLD RECORDS: LA MAYOR CANTIDAD DE DERRIPOS DE “ÁNGEL” EN UN MINUTO (EN EQUIPO)

DESCRIPCIÓN: La mayor cantidad de derripos “Ángel” en un minuto, en equipo, es de 15. Fue logrado por Blanca Daniela Simonini Chuquimia, María José Simonini Chuquimia, Sonia Mariela Averanga Fernandez y Laura Tarqui Yohasida Nieves (Cholitas Luchadoras, todas Bolivianas). En el show de “Dei Record” en Milán, Italia, el 17 de enero de 2025.

UBICACIÓN: El Alto, ubicado en la provincia de Murillo del departamento de La Paz.

OTORGADO POR: Guinness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er puesto

FECHA: 17/01/2025



WORLD RECORDS: LA MAYOR CANTIDAD DE DERRIPOS DE “TIJERA AÉREA” EN UN MINUTO (EN EQUIPO)

DESCRIPCIÓN: La mayor cantidad de derripos “tijera aérea” en un minuto, en equipo, es de 23. Fue logrado por Blanca Daniela Simonini Chuquimia, María José Simonini Chuquimia, Sonia Mariela Averanga Fernandez y Laura Tarqui Yohasida Nieves (Cholitas Luchadoras, todas Bolivianas). En el show de “Dei Record” en Milán, Italia, el 17 de enero de 2025.

CAPÍTULO 05

AVANCES HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN BOLIVIA: LOGROS EXCEPCIONALES Y RETOS PENDIENTES*

Lykke E. Andersen

- En los últimos 40 años, la participación política de las mujeres en Bolivia ha pasado de casi inexistente a alcanzar la paridad de género, en uno de los avances más acelerados a nivel global.
- Bolivia es uno de solo tres países en el mundo que ha logrado la paridad de género en los gobiernos subnacionales.
- Por cada 100 hombres que se gradúan de la universidad en Bolivia, lo hacen 135 mujeres. Esto es una ventaja femenina muy alta, especialmente para un país de ingresos medios-bajos.

1. Introducción

Durante siglos, las mujeres en Bolivia, como en tantas otras partes del mundo, han cargado silenciosamente con el peso de la desigualdad. Han sembrado la tierra, criado generaciones, defendido la vida y sostenido comunidades enteras, muchas veces sin reconocimiento, sin voz, y sin poder de decisión. Pero en medio de ese silencio forzado, también han resistido. Han alzado la voz, se han organizado y han transformado la historia, paso a paso, lucha tras lucha.

Hoy, en el umbral del Bicentenario de Bolivia, es posible mirar atrás y afirmar, con fundamento, que se han logrado avances importantes en el camino hacia la igualdad de género. Bolivia figura actualmente entre los únicos tres países del mundo donde hay igual o mayor proporción de mujeres que de hombres en cargos electos a nivel local —junto a Islandia y Antigua y Barbuda. Además, otros

*La autora agradece el apoyo de Daniela Cubas, Andrea Fossati y Edgar Pacheco de SDSN Bolivia en la elaboración del documento.

indicadores revelan progresos notables en cuanto al acceso de las mujeres a la educación y a la salud reproductiva, como se analiza en la sección 2.

Estos logros no ocurrieron por inercia. Son el resultado de décadas de lucha persistente por parte de movimientos feministas, organizaciones sociales, colectivos de mujeres indígenas, así como del compromiso de múltiples actores institucionales que han promovido reformas legales y políticas públicas orientadas a reducir las brechas de género. La sección 3 profundiza en estos hitos, entre ellos la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado en 2009, que consagra la equidad de género como principio fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia, y la aprobación de leyes emblemáticas, como la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Sin embargo, la igualdad consagrada en las leyes no siempre se traduce en igualdad efectiva en la vida cotidiana. Persisten barreras estructurales, como la violencia de género y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que recae desproporcionadamente sobre las mujeres. La sección 4 aborda estos desafíos y también los riesgos que podrían comprometer la sostenibilidad de los logros alcanzados.

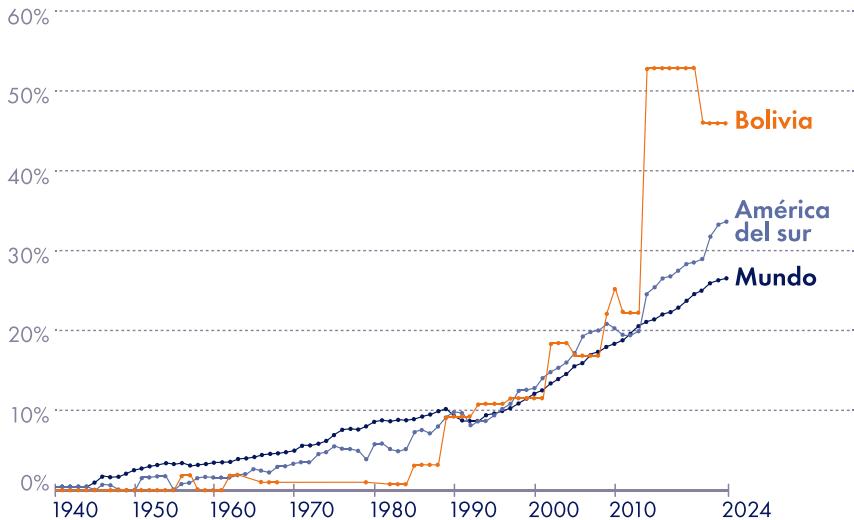
Este capítulo tiene como objetivo reconocer los avances logrados, visibilizar los desafíos pendientes y reflexionar sobre las oportunidades que ofrece el Bicentenario para consolidar una agenda transformadora para la igualdad de género en Bolivia. A través de datos y análisis, se mostrará cómo la participación activa y protagónica de las mujeres ha sido —y continuará siendo— esencial para la construcción de un país más justo, inclusivo y resiliente.

2. Bolivia en el escenario global

El Gráfico 1 muestra que la participación de las mujeres en los parlamentos del mundo era prácticamente nula en 1940. Cuarenta años después, el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados de Bolivia seguía siendo inferior al 1%, mientras que, a nivel global, ese porcentaje había aumentado a casi un 9%. Sin embargo, Bolivia logró alcanzar el promedio mundial en 1990, y en 2014 se convirtió en uno de los pocos países del mundo en alcanzar la paridad de género¹, con más del 50% de mujeres en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el caso boliviano destaca no solo por la rapidez del progreso logrado durante los últimos 40 años, sino también por los resultados finales, que se encuentran entre los más sobresalientes a nivel mundial.

1 Según la base de datos de la Unión Interparlamentaria (IPU) (s.f.), Ruanda fue el primer país del mundo en lograr por lo menos 50% mujeres en su parlamento en 2008, seguido por Andorra en 2011, Kuwait en 2013, y Bolivia en 2014. De todas las 3740 observaciones en su base, solamente 11 tienen un porcentaje de mujeres de 50% o más, así que el logro de Bolivia, Ruanda, Andorra y Kuwait es realmente excepcional.

Gráfico 1: Proporción de mujeres en la cámara de diputados de Bolivia, Sudamérica y el Mundo, 1940-2024

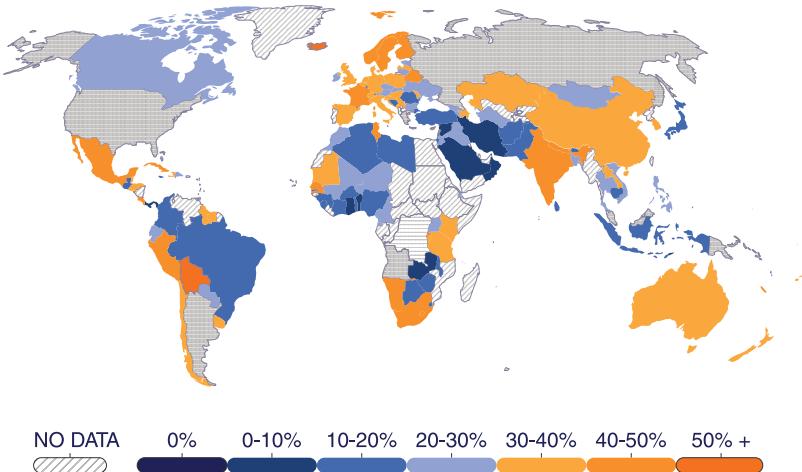


Fuente: V-Dem (2025) via Our World in Data (https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-in-parliament?tab=chart&time=1940..latest&country=OWID_WRL~BOL~OWID_SAM)

De manera similar, Bolivia es uno de solo tres países en el mundo donde la proporción de mujeres en cargos electos a nivel local es igual o superior a la de los hombres, junto con Islandia y Antigua y Barbuda (ver Gráfico 2).

Este logro es especialmente significativo porque son las autoridades locales —alcaldesas, concejalas y lideresas indígenas— quienes definen prioridades fundamentales para el desarrollo comunitario, como el acceso al agua, la educación, la salud y la infraestructura básica. Su presencia no es meramente simbólica: tiene un impacto real en la formulación y aplicación de políticas públicas (ONU MUJERES, 2021).

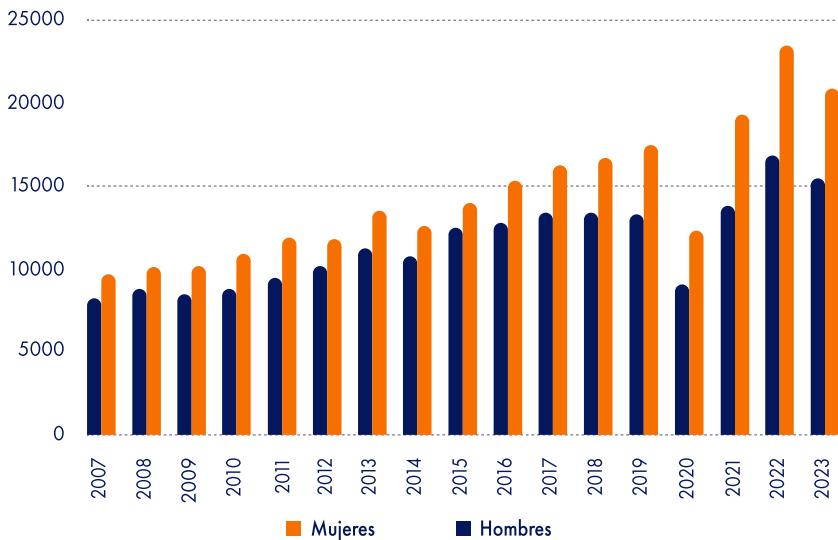
Gráfico 2: Proporción de mujeres en gobiernos locales, 2023



Fuente: IPU (s.f.) via Our World in Data (<https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-in-local-government>).

El avance notable en la participación política de las mujeres en Bolivia está estrechamente vinculado con los importantes progresos en su acceso a la educación superior en las últimas décadas. Según datos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), desde hace varios años se gradúan más mujeres que hombres en las universidades del país. El índice de paridad de género (#mujeres/#hombres graduados de las universidades) alcanzó un pico de 1,40 en 2021, durante la pandemia, y aunque disminuyó ligeramente a 1,35 en 2023, sigue reflejando una ventaja sostenida a favor de las mujeres (ver Gráfico 3).

Gráfico 3: Número de hombres y mujeres titulados de las Universidades Públicas de Bolivia, 2007-2023



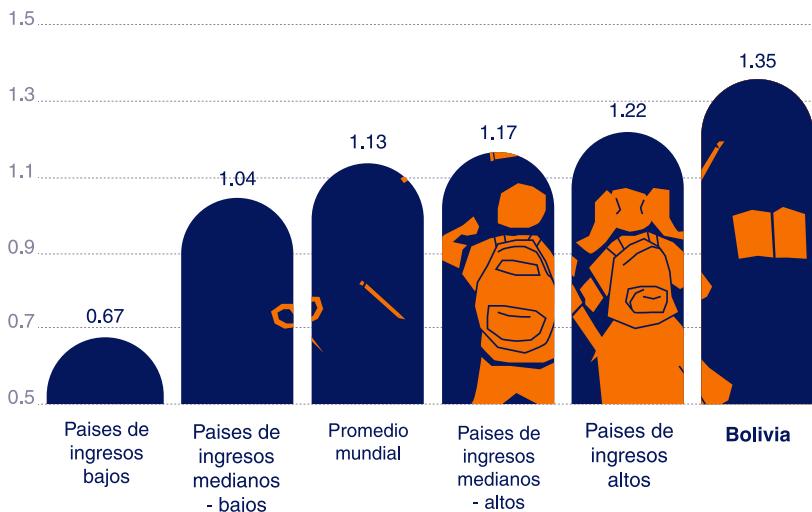
Fuente: CEUB (2025).

Este ratio de mujeres respecto a hombres en la graduación universitaria no es excepcional a nivel global, pero resulta muy llamativo si se considera el nivel de ingresos en Bolivia. Según datos del Banco Mundial², desde 2001 las mujeres superan a los hombres en la matrícula de educación terciaria a nivel mundial, y en años recientes, el índice de paridad de género ha alcanzado 1,13. En los países de ingresos medianos-bajos, como Bolivia, este índice es de apenas 1,04, mientras que en los países de ingresos altos llega a 1,22.

El índice de 1,35 registrado en Bolivia para personas graduadas no es estrictamente comparable con los datos de matrícula, ya que refleja egresos y no inscripciones. En todo caso, los datos confirman que las mujeres bolivianas han logrado avances notables en educación superior, muy por encima de los esperados para su nivel de ingresos (ver Gráfico 4).

2 Ver: <https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS>.

Gráfico 4: Índice de paridad de género en matriculación/graduación para educación a nivel terciario (# mujeres/#hombres), 2023



Nota: * Los datos de Bolivia se basan en graduados de las universidades públicas, mientras que los datos para los otros grupos de países se refieren a inscritos en educación a nivel terciario.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (<https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS>) y CEUB (2025).

Las mujeres no solo se gradúan en mayor número, sino también con mejores calificaciones. Andersen et al. (2020) mostraron que las mujeres estaban sobrerepresentadas entre quienes se graduaron con distinción en la Universidad Privada Boliviana (UPB), una tendencia que se repite año tras año en la mayoría de las universidades del país.

Es importante destacar que la preeminencia femenina en el sistema educativo boliviano es un fenómeno relativamente reciente. Como resultado, entre la población de 19 años o más, el nivel educativo promedio de las mujeres sigue siendo menor que el de los hombres (10,0 frente a 11,0 años, según la Encuesta de Hogares 2021). Sin embargo, en el grupo más joven (19 a 25 años), las mujeres ya superan ligeramente a los hombres en promedio de años de escolaridad (12,4 frente a 12,3 años).

Esto es principalmente un fenómeno de las áreas urbanas (mujeres jóvenes con 12,8 años de educación promedio versus 12,6 para hombres jóvenes), porque en el área rural las mujeres jóvenes todavía se quedan con un poco menos de educación (10,5 para mujeres jóvenes versus 10,7 para hombres jóvenes). Sin embargo, en tres de los nuevos departamentos (Cochabamba, Santa Cruz y Pan-

do), las mujeres jóvenes rurales tenían mayores niveles de educación en 2021 que los hombres jóvenes rurales. El Censo de Población y Vivienda de 2024 nos va a brindar más detalles sobre los avances educativos de las mujeres, pero no hay duda que vamos a ver avances sorprendentes en gran parte del país.

Otro factor estrechamente vinculado con los avances en la educación y la participación política de las mujeres en Bolivia es la fecundidad. Según datos recientes del INE (2025), la Tasa Global de Fecundidad (TGF) descendió de 4,2 hijos por mujer en 1998 a 2,1 en 2023, alcanzando así el umbral de reemplazo poblacional. Sin embargo, debido a la emigración neta significativa que experimenta el país, este nivel no garantiza una reposición completa de la población. En las áreas urbanas, la fecundidad ya se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo (ver Tabla 1).

Tabla 1: Tasas Específicas de Fecundidad y Tasa Global de Fecundidad para los tres años que precedieron a las encuestas ENDSA 1998, 2003, y 2008, EDSA 2016 y 2023

Grupo de edad e indicador	ENDSA			EDSA		ÁREA	
	1998	2003	2008	2016	2023	Urbana	Rural
15 - 19	84	84	88	71	48	35	88
20 - 24	207	183	174	140	99	84	151
25 - 29	201	179	173	131	106	98	129
30 - 34	165	145	128	120	92	89	99
35 - 39	117	114	95	82	58	53	74
40 - 44	57	51	43	25	19	14	32
45 - 49	15	12	8	6	2	1	3
Tasa Global de Fecundidad	4,2	3,8	3,5	2,9	2,1	1,9	2,9

Fuente: INE (2025).

El análisis desagregado por edad muestra que la Tasa Específica de Fecundidad (nacimientos por cada mil mujeres) ha disminuido especialmente entre las adolescentes de 15 a 19 años, pasando de 88 nacimientos por cada mil en 2008 a 48 en 2023. También se observa una caída significativa entre las mujeres mayores de 40 años (ver Tabla 1). Esta tendencia refleja avances importantes en el acceso a métodos de planificación familiar, así como cambios en los proyectos de vida de las mujeres, cada vez más orientados hacia la educación y el desarrollo profesional.

Queda una brecha importante entre el área rural y el área urbana, y desafortunadamente los avances son menores en el área rural. El embarazo en adolescentes es una preocupación especial, ya que puede interrumpir la educación y las oportunidades económicas de las niñas afectadas. Entre 2016 y 2023, la Tasa Específica de Fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años bajó de 58 a 35 en áreas urbanas (una reducción del 40 %), mientras que en el área rural solamente bajó de 109 a 88 (-19 %).

Estos cambios en los patrones de fecundidad son, a su vez, causa y consecuencia del progreso en otros ámbitos. La evidencia muestra un círculo virtuoso entre el aumento del nivel educativo, la ampliación de las oportunidades de participación y representación política y social, y el acceso a educación sexual y reproductiva. A continuación, se analizan algunos de los factores clave que han contribuido a generar y sostener estos logros.

3. Factores de éxito: ¿Cómo se alcanzaron estos logros?

En las últimas décadas, Bolivia ha desarrollado un marco legal e institucional orientado a la promoción de la igualdad de género, respondiendo tanto a compromisos internacionales como a demandas internas históricas. Este marco ha permitido avances significativos en la participación política de las mujeres, su protección frente a la violencia y el reconocimiento de sus derechos en todos los ámbitos.

a. Constitución Política del Estado (CPE - 2009)

La Constitución vigente, promulgada en 2009 tras un proceso constituyente participativo y plural, incorpora de manera explícita la igualdad de género como uno de los principios rectores del Estado. Reconoce la igualdad de derechos entre mujeres y hombres ante la ley (Art. 14), garantiza su participación equitativa en todos los niveles del Estado (Art. 26 y 278), y establece la paridad y la alternancia como pilares de la democracia intercultural. Asimismo, otorga reconocimiento específico a los derechos de las mujeres indígenas originarias campesinas y promueve una visión de desarrollo despatriarcalizadora.

Una de las innovaciones más destacadas de la CPE de Bolivia —y aún poco común en el mundo— es el reconocimiento expreso del derecho de mujeres y hombres al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos (Art. 66). Esta disposición constitucional ha abierto camino para el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar. Estos avances han sido fundamentales para el éxito de Bolivia en la reducción de la fecundidad adolescente y en el empoderamiento de las mujeres en sus decisiones reproductivas (Cardona et al., 2025).

b. Ley de Régimen Electoral (2010)

Una de las principales herramientas para aumentar la representación de las mujeres en espacios de poder ha sido la Ley del Régimen Electoral (Ley N° 026), que establece la obligación de conformar listas de candidaturas con paridad y alternancia entre mujeres y hombres. Esta disposición ha sido clave para alcanzar los niveles actuales de participación femenina en los órganos legislativos y en los gobiernos municipales.

c. Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348, 2013)

Esta ley pionera reconoce 16 tipos de violencia contra las mujeres (más allá de la violencia física) e incluye la violencia simbólica, económica, institucional y política. Además, establece mecanismos de prevención, atención, sanción y reparación. La Ley 348 marcó un antes y un después en el abordaje de la violencia de género, aunque su implementación enfrenta retos importantes, como la falta de recursos y personal especializado en muchas regiones del país.

d. Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Ley 243, 2012)

Bolivia fue el primer país del mundo en contar con una ley específica para combatir el acoso y la violencia política hacia mujeres electas o candidatas. Esta norma fue una respuesta directa a las experiencias de cientos de mujeres, especialmente en el ámbito municipal, que enfrentaban amenazas, intimidación, y hasta agresiones físicas por ejercer sus cargos o postularse a ellos.

e. Mecanismos institucionales

Para la implementación de estas leyes, el Estado boliviano ha establecido diversas instituciones responsables de velar por el cumplimiento de las leyes, así como de brindar apoyo, seguimiento y respaldo a su implementación, entre ellas:

- El Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que formula políticas y planes nacionales para la equidad de género.
- El Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, que coordina acciones entre distintos niveles del Estado y organizaciones sociales.
- La Defensoría del Pueblo y el Órgano Judicial tienen atribuciones específicas para proteger los derechos de las mujeres y garantizar el acceso a la justicia.
- A nivel municipal, se han creado SLIMs (Servicios Legales Integrales Municipales), que brindan atención a mujeres en situación de violencia, aunque su funcionamiento varía significativamente entre municipios.

Este marco jurídico e institucional coloca a Bolivia entre los países más avanzados de América Latina en términos de normativas de género. Sin embargo, la brecha entre el marco legal y su aplicación práctica sigue siendo un desafío persistente. La voluntad política, la capacitación continua de operadores de justicia y la presión social organizada serán claves para cerrar esa brecha en el marco del tercer siglo de vida del país.

f. Acceso a crédito

En las últimas dos décadas, Bolivia ha registrado avances importantes en la inclusión financiera de las mujeres. Gracias al crecimiento de las microfinanzas, el país se ha convertido en un referente regional en ofrecer servicios financieros a sectores tradicionalmente excluidos. Las mujeres han sido protagonistas de este proceso, accediendo a crédito, ahorro y seguros que les han permitido emprender, generar ingresos propios y fortalecer sus autonomías económicas.

Según datos recientes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI (2025), las mujeres representan el 52% del total de prestatarios en Bolivia, poseen el 49% de las cuentas de depósito y concentran el 47% del monto total depositado. Estas cifras reflejan una participación significativa de las mujeres en el sistema financiero nacional. No obstante, un análisis más detallado revela que esta participación está fuertemente concentrada en el ámbito de las microfinanzas: las mujeres constituyen el 78% de la cartera de la Banca Comunal, que, sin embargo, representa solo el 0,8% de la cartera total del sistema financiero. En contraste, los créditos de mayor tamaño, especialmente los destinados al sector productivo, siguen siendo predominantemente otorgados a hombres. Esto indica que, aunque las mujeres han avanzado en el acceso a servicios financieros básicos, aún enfrentan barreras importantes para acceder a financiamiento de gran escala. Al mismo tiempo, el menor nivel de endeudamiento podría interpretarse como un factor de resiliencia financiera, que protege a muchas mujeres de los riesgos asociados al sobreendeudamiento.

ASFI activamente ha impulsado políticas para fomentar la equidad de género en el sector. Entre estas se destacan lineamientos para evitar la discriminación de género en el acceso al crédito, así como incentivos para desarrollar productos financieros específicamente diseñados para mujeres emprendedoras, jefas de hogar o productoras rurales. Estos avances están alineados con el principio de inclusión económica establecido en la Constitución Política del Estado.

Recientemente, se han comenzado a implementar enfoques innovadores, como las fintech con modelos de atención adaptados a mujeres, así como programas de educación financiera con enfoque de género. Estos esfuerzos buscan cerrar brechas persistentes en cuanto a la digitalización, manejo de recursos y planificación financiera, reconociendo los roles diferenciados que aún existen entre hombres y mujeres en la economía.

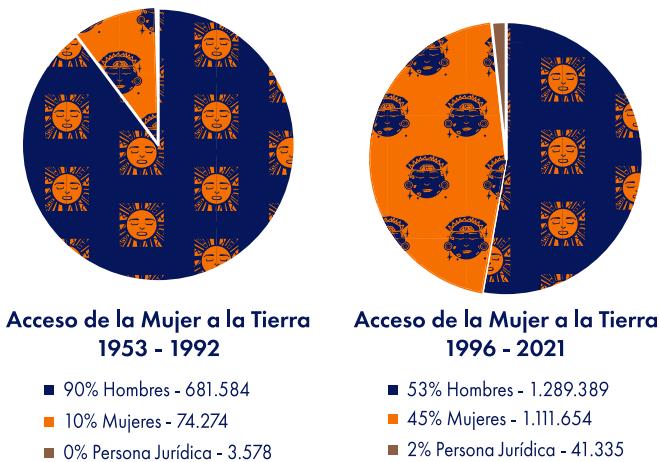
g. Titulación de tierras

En las últimas décadas, Bolivia ha experimentado avances notables en la promoción de la igualdad de género en el acceso y control de la tierra, un recurso fundamental para la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres, especialmente en áreas rurales e indígenas.

Un hito significativo fue la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado en 2009, que reconoce explícitamente la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. Este marco legal ha sido complementado por políticas públicas orientadas a revertir las históricas desigualdades agrarias.

Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hasta 1992, solo el 10% de las titulaciones de tierras estaban a nombre de mujeres. Para 2022, esta proporción se elevó al 45%, reflejando un progreso sustancial en la titularidad femenina de tierras en el país (ver Gráfico 5).

Gráfico 5: Cambios en el acceso de las mujeres a la tierra en Bolivia



Fuente: INRA (2025).

Además, se han implementado programas de capacitación y fortalecimiento organizativo dirigidos a mujeres rurales, con el objetivo de mejorar su participación en la gestión territorial y en espacios de toma de decisiones. Estas iniciativas buscan no solo garantizar el acceso a la tierra, sino también asegurar que las mujeres puedan ejercer control efectivo sobre este recurso y beneficiarse de su uso productivo.

Sin embargo, perseveran desafíos significativos. En muchas comunidades, las normas tradicionales y los roles de género persistentes siguen restringiendo la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones sobre el acceso, uso y control de la tierra. Además, factores como la falta de información, el desconocimiento de derechos y la violencia de género siguen siendo barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres sobre la tierra.

4. Desafíos y riesgos a futuro

A pesar de los notables avances de Bolivia en materia de igualdad de género —especialmente en el ámbito normativo y de representación política— persisten desafíos estructurales y emergentes que amenazan el avance y la sostenibilidad de estos logros. En el contexto del bicentenario, resulta fundamental reflexionar sobre estas amenazas, evaluar las capacidades del país para ajustar y consolidar sus avances y diseñar estrategias que garanticen progresos irreversibles en materia de equidad.

a. Amenazas internas: retrocesos políticos y debilitamiento institucional

Uno de los riesgos más significativos es la posibilidad de retrocesos normativos e institucionales, particularmente en contextos de polarización política, crisis económica o inestabilidad gubernamental. La instrumentalización del discurso de género por actores políticos puede llevar a una fatiga social, a la banalización del tema, o incluso a contrarreformas. En algunos espacios ya se observan discursos conservadores que apelan a un “orden tradicional” de la familia o a valores culturales que justifican la subordinación de las mujeres y que podría limitar el alcance de políticas transformadoras.

Asimismo, la alta rotación de autoridades y el debilitamiento progresivo de instituciones públicas especializadas en igualdad de género (por falta de recursos, autonomía o respaldo político) ponen en riesgo la continuidad, eficacia y profundidad de las políticas públicas. La limitada transversalización del enfoque de género en sectores estratégicos como educación, salud, economía o medio ambiente también obstaculiza su sostenibilidad a largo plazo.

b. Violencia de género como obstáculo estructural

La persistencia de la violencia machista sigue siendo una de las barreras más graves para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su autonomía en todos los ámbitos de la vida. A pesar de contar con un marco legal robusto, su aplicación sigue siendo débil. La magnitud real del problema aún es difícil de cuantificar debido a la normalización de la violencia, al temor o vergüenza que muchas mujeres sienten al denunciarla y a la revictimización que suelen vivir muchas denunciantes.

Este fenómeno presenta un doble riesgo: por un lado, la desconfianza en el sistema de justicia, que puede desincentivar las denuncias; y por otro, la naturalización social de la violencia, especialmente entre jóvenes expuestos desde temprana edad a discursos sexistas y relaciones desiguales. Sin una transformación profunda de los patrones culturales y educativos, la violencia de género puede seguir reproduciéndose, incluso en presencia de marcos legales avanzados.

Según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD, 2025), los delitos contra la vida (homicidios, feminicidios, infanticidios, entre otros) han mostrado una disminución en los últimos seis años, pasando de 574 denuncias en 2018 a 541 en 2023. Esta reducción se debe principalmente a la baja en feminicidios (de 107 a 81) y en infanticidios (de 65 a 29) en el mismo periodo, que es alentador.

Sin embargo, los delitos contra la libertad sexual han registrado el mayor incremento: de 5.744 denuncias en 2018 a 9.822 en 2023. Esto implica un aumento de la tasa de 51 a 81 denuncias por cada 100.000 habitantes. Aunque el mayor número de casos se concentra en los departamentos del eje central, las tasas más elevadas se observan en Beni, Tarija y Santa Cruz, superando el promedio nacional (OBSCD, 2025).

c. Desigualdades territoriales y brechas interseccionales

La igualdad de género en Bolivia presenta marcadas disparidades territoriales y sociales. Las oportunidades y avances no son iguales para todas: mujeres urbanas de clase media o con educación universitaria acceden a derechos y servicios que siguen siendo limitados para mujeres rurales, indígenas, trans o con discapacidad. Estas desigualdades interseccionales suelen quedar invisibilizadas en los promedios nacionales.

De acuerdo con el *Atlas Municipal de los ODS en Bolivia 2020*, existe una correlación positiva entre el Índice de Igualdad de Género y la tasa de urbanización, aunque no muy fuerte ($\rho = 0.23$). Curiosamente, el municipio con el mayor puntaje en este índice no pertenece a una región metropolitana, sino que es un pequeño municipio rural del sur de Potosí (San Pedro de Quemes, con solo 1.289 habitantes). Ninguno de los 10 municipios con mayor Índice de Igualdad de Género pertenece a las regiones metropolitanas (Andersen et al., 2020).

A pesar de los buenos resultados generales, Bolivia corre el riesgo de consolidar una “igualdad de fachada”, donde solo algunas mujeres avanzan, mientras muchas otras quedan rezagadas. Es fundamental identificar y atender a los grupos más vulnerables a ser excluidos del desarrollo.

d. Capacidad institucional y social para sostener los logros

La sostenibilidad de los avances en igualdad de género dependerá de la capacidad del Estado y la sociedad para institucionalizar, defender y financiar estos logros. Bolivia cuenta con un valioso capital normativo, pero requiere reforzar su implementación efectiva mediante acciones como:

- Fortalecer a las instituciones responsables de la igualdad de género, dotándolas de mayor autonomía, recursos y capacidad técnica.
- Mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y sectores.
- Invertir en educación transformadora desde la primera infancia, centrada en la igualdad de género, la corresponsabilidad y el ejercicio pleno de los derechos.
- Promover una cultura del cuidado que contribuya a la despatrrialización.
- Impulsar liderazgos diversos y territoriales, especialmente de mujeres jóvenes, indígenas y rurales.

El rol de la sociedad civil, los movimientos de mujeres, la academia y los medios de comunicación serán clave para evitar retrocesos, impulsar nuevas agendas y mantener viva la lucha por una igualdad real y duradera.

5. Remarcas finales

A las puertas de su tercer siglo de vida independiente, Bolivia tiene razones legítimas para celebrar los avances en materia de igualdad de género. Pocos países en el mundo pueden mostrar con orgullo una paridad de género en la representación política, tanto a nivel local como nacional. Esta conquista no ha sido meramente simbólica: ha transformado las dinámicas de toma de decisiones, incorporando las voces, demandas y prioridades de las mujeres en todos los rincones del país.

La evidencia empírica sugiere que Bolivia ha logrado establecer un círculo virtuoso para las mujeres entre avances normativos, participación política, educación y salud reproductiva. El progreso en un ámbito ha reforzado avances en otros, demostrando que la igualdad de género es posible cuando existe una articulación estratégica de esfuerzos.

No obstante, los desafíos persistentes no deben subestimarse. La igualdad legal no se traduce automáticamente en igualdad real. Las resistencias culturales, las brechas interseccionales, la violencia estructural y la creciente precarización económica pueden erosionar los logros alcanzados. Es indispensable que Bolivia sostenga y profundice su compromiso por la igualdad de género desde una perspectiva integral, interseccional, territorial y transversal a todas las políticas públicas.

El bicentenario representa una oportunidad histórica para construir una hoja de ruta hacia una igualdad de género sustantiva. Una igualdad que no se limite a la representación política, sino que abarque también la redistribución equitativa de recursos, la valorización de los cuidados, la justicia ambiental y el reconocimiento pleno de la diversidad de identidades y experiencias.

Avanzar hacia ese horizonte requiere políticas públicas sostenidas, inversión en educación transformadora, voluntad política transversal y una ciudadanía vigilante y movilizada. También implica proteger los avances ya conquistados frente a posibles retrocesos normativos, discursos de odio o crisis que puedan debilitar los compromisos asumidos.

En un mundo atravesado por crisis múltiples y crecientes desigualdades, Bolivia puede seguir siendo un ejemplo de cómo un país con grandes retos puede lograr transformaciones significativas en materia de igualdad de género, cuando hay voluntad política, presión social, visión estratégica y compromiso institucional y de cooperación por reforzar iniciativas sobre los derechos de las mujeres y la equidad de género en Bolivia.

6. Referencias

Andersen, L. E., Medinaceli, A., Maldonado, C. & Hernani-Limarino, W. (2020). A country at risk of being left behind: Bolivia's quest for quality education. Southern Voice, Occasional Paper Series No. 63. <https://southernvoice.org/a-country-at-risk-of-being-left-behind-boliviass-quest-for-quality-education/>

Andersen, L. E., Canelas, S., Gonzales, A., Peñaranda, L. (2020). *Atlas municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia 2020*. Universidad Privada Boliviana, SDSN Bolivia. <https://atlas.sdsnbolivia.org/>

ASFI (2025). *La participación de las mujeres en el sistema financiero es destacada*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La Paz, marzo. https://www.asfi.gob.bo/images/festividad/Separata_Dia_de_la_mujer.pdf

Cardona, C., Andersen, L. E., Branisa, B. et al. (2025). How Bolivia Became an Exemplar in Family Planning: An In-Depth Mixed Methods Case Study. *British Medical Journal*. Forthcoming.

CEUB (2025). Datos Estadísticos. Comité Ejecutivo Universidad Boliviana. <https://ceub.edu.bo/datos-estadisticos/>

INE (2025). Fecundidad y maternidad: una mirada a la transición demográfica en Bolivia. EDSA 2023. Instituto Nacional de Estadística, Documento Temático. <https://bolivia.unfpa.org/es/publications/fecundidad-y-maternidad-una-mirada-la-transici%C3%B3n-demogr%C3%A1fica-en-bolivia>

INRA (2025). Las Mujeres tienen Derecho a la Tierra. Instituto Nacional de Reforma Agraria. <https://www.inra.gob.bo/wp-content/uploads/2024/01/Las-Mujeres-tienen-Derecho-a-la-Tierra-31-08-2022.pdf>

Inter-Parliamentary Union (IPU). (s.f.). Women in parliament: 1945-2018. <https://data.ipu.org/dataset/percentage-of-women-in-parliament-between-1945-2018/>

Inter-Parliamentary Union – processed by Our World in Data. "Share of women in local government" [dataset]. Inter-Parliamentary Union, "Data from multiple sources" [original data]. Retrieved May 4, 2025 from <https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-in-local-government>

OBSCD (2025). Dossier de Estadísticas en Seguridad Ciudadana, Vol. 2: 2018-2023. Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. <https://obscd.mingobierno.gob.bo/dossier-de-estadisticas-en-seguridad-ciudadana-vol-2-2018-2023>

ONU MUJERES (2021). Representación de mujeres en gobiernos locales: un análisis global. Documento de Trabajo. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Womens-representation-in-local-government-es.pdf>

V-Dem (2025) – processed by Our World in Data. "Share of women in parliament – (aggregate: average)" [dataset]. V-Dem, "Democracy report v15" [original data]. Retrieved May 7, 2025 from <https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-in-parliament>

Leyes clave:

Bolivia (2009). Constitución Política del Estado. Promulgado el 7 de febrero de 2009. https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf

Bolivia (2010). Ley del Régimen Electoral. Ley No 026 de 30 de junio de 2010. https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2019/07/LEY_026.pdf

Bolivia (2012). Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Ley No 243 de 28 de mayo de 2012. https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2017/01/Ley_243.pdf

Bolivia (2013). Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Ley No 348 de 9 de marzo de 2013. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2013_bol_ley348.pdf

WORLD TRAVEL AWARDS: BOLIVIA ES "EL MEJOR DESTINO VERDE DE AMÉRICA DEL SUR 2018"

DESCRIPCIÓN: Bolivia estuvo nominada en esta categoría junto a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

OTORGADO POR: World Travel Awards

PUESTO LOGRADO: 1er puesto

FECHA: 17/09/2018

RECORD MUNDIAL: EL CONJUNTO DE TROMPETAS MÁS GRANDE

DESCRIPCIÓN: El conjunto de trompetas más grande estuvieron involucrados 1.166 participando en el concierto organizado por Napoleón Gómez Silva en la ciudad de Oruro, Bolivia. Se involucraron alrededor de 5.000 instrumentos diferentes.

UBICACIÓN: Oruro

OTORGADO POR: Guinness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 19/02/2006



RECORD MUNDIAL: LAGO TITICACA, EL CUERPO DE AGUA NAVEGABLE MÁS ALTO DEL MUNDO

DESCRIPCIÓN: Al Titicaca se lo considera el lago navegable más alto del mundo, es además la masa de agua más grande de Sudamérica y de todo el planeta con 3810 m encima del nivel del mar. La superficie cubre un área de aproximadamente 8.300 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de entre 140-180 m.

UBICACIÓN: Copacabana, Huatajata, Tiquina, La Paz.

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 01/01/2006



MEDALLA DE ORO: MEJOR MIEL DE APIMONDIA

DESCRIPCIÓN: La miel monofloral del mistol (un árbol cuyo nombre científico es Ziziphus mistol y que es originario de la región del Chaco, entre Bolivia, Argentina, Perú, Venezuela y Paraguay). De la empresa Colmenares del Monte fue la galardonada a la mejor miel de Apimondia en el concurso mundial a la mejor miel realizada en Chile en septiembre del año 2023.

UBICACIÓN: Yacuiba, Tarija.

OTORGADO POR: Congreso Apimondia

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 04/09/2023

CAPÍTULO 06

PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO, PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL

Andrés Laguna-Tapia y Alejandra Guardia-Manzur

- Bolivia tiene una rica diversidad cultural y lingüística, con 37 idiomas oficiales y el reconocimiento de 36 naciones o pueblos indígena originario campesinos en su Constitución de 2009.
- Está entre los siete países con más sitios patrimoniales reconocidos por la UNESCO. Cuenta con 7 sitios de Patrimonio Mundial Material y 9 de Patrimonio Cultural Inmaterial.
- El reconocimiento de la UNESCO no solo eleva el prestigio internacional de Bolivia y fomenta el turismo cultural sostenible, sino que también impulsa la protección y conservación rigurosa de estos bienes, fortaleciendo el orgullo y sentido de pertenencia nacional.
- El éxito en la obtención de estos reconocimientos se debe a una combinación de factores clave. Entre ellos se incluyen el sólido respaldo científico-académico, la voluntad política estatal, la colaboración de expertos y la participación activa de las comunidades locales y la sociedad civil.
- A pesar de los logros, Bolivia enfrenta retos significativos como la escasez de recursos y la falta de fortaleza institucional. Para superarlos, se propone fortalecer la legislación, implementar planes de gestión sostenibles, fomentar la investigación y la educación, y promover la participación ciudadana.

1. Introducción

La gran diversidad étnica y lingüística de Bolivia, la complejidad de su historia y de su realidad, quizás es su mayor riqueza. Su rasgo más reconocible y reconocido es su condición plurinacional y multicultural. En la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 se reconocen 36 naciones o pueblos indígena originario campesinos (Art. 30) y 36 idiomas originarios, además del castellano, que son considerados idiomas oficiales del Estado Plurinacional (Art. 5), lo que suma un total de 37 idiomas oficiales.

Algo similar sucede en distintos países de Sudamérica. En Perú, por ejemplo, reconoce y se emplean 47 lenguas además del castellano (Ministerio de Cultura del Perú, 2021). Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador reconoce que en su país se hablan 14 lenguas además del español.

Sin embargo, el Estado reconoce al castellano como idioma oficial y a otras lenguas como: "el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso" (2008). En Colombia, la situación es más ambigua, pues su Constitución dice: "El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe" (1991), aunque según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se hablan 65 lenguas indígenas.

Lo antedicho permite percibir la transformación cultural y patrimonial que se va construyendo en países del Sur en las últimas décadas. Bolivia, junto con Perú, se posiciona como uno de los líderes en Sudamérica en el reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística. Con eso no queremos asegurar que la gestión y la conservación del patrimonio material e inmaterial sea óptima, pero sí resaltar evidentes mejoras. Según la Ley N° 530 del 23 de mayo de 2014, la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, en su artículo 7 (Patrimonio Cultural Inmaterial), se establece que hacen parte de este: "Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del Patrimonio Cultural Inmaterial". Las lenguas son reconocidas explícitamente como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial nacional, gesto que es importante pues demuestra una creciente revalorización del patrimonio cultural boliviano.

La misma norma dice que este: "Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia" (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014). La herencia de las civilizaciones precoloniales y la compleja interacción de culturas durante la Colonia y la República, han dado forma a un tejido de tradiciones, lenguas, expresiones artísticas y prácticas que conforman nuestra(s) identidad(es) nacional(es). Este patrimonio, en sus múltiples manifestaciones, con toda su heterogeneidad, proyecta al país como un referente internacional de riqueza cultural.

Si, como Albó y Suvelza (2006), aceptamos que el concepto de cultura abarca un tejido complejo que incluye desde las prácticas cotidianas hasta las creencias más arraigadas y las expresiones simbólicas, es posible apreciar la profundidad

dad del patrimonio boliviano que se manifiesta tanto en los elementos tangibles, como la arquitectura colonial de Potosí o las ruinas de Tiwanaku, así como en los elementos intangibles que se expresan a través de las danzas del Carnaval de Oruro, los saberes textiles de los pueblos andinos o las lenguas referidas en los primeros párrafos de este texto.

La importancia del reconocimiento, de la promoción, de la conservación y del cuidado del patrimonio cultural por parte del Estado y la sociedad civil es esencial. Sin embargo, en el presente texto nos concentraremos en el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pues al declarar un sitio o una manifestación como Patrimonio de la Humanidad, ya sea material o inmaterial, le otorga un valor universal excepcional, que trasciende las fronteras nacionales y resalta su importancia para toda la humanidad. Bolivia cuenta con varios sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, tanto tangibles como intangibles, lo que subraya la riqueza y diversidad de su legado cultural.

El significado de este reconocimiento para el país radica en múltiples aspectos: en el incremento del prestigio internacional y en la visibilidad positiva de Bolivia a nivel global, lo que se puede traducir en una forma de fomento al turismo cultural sostenible, que genera oportunidades económicas para las comunidades locales. Por otro lado, impulsa la adopción de medidas de protección y conservación más rigurosas, que potencialmente pueden tener el apoyo técnico y financiero de la UNESCO y de otros organismos internacionales. Esto puede facilitar la preservación de estos tesoros, protegiéndolos de amenazas como el deterioro, el desarrollo descontrolado, la enajenación cultural o los desastres naturales. Finalmente, y este no es un detalle menor, el reconocimiento de la UNESCO puede tener un impacto significativo en el orgullo nacional. Al realzar expresiones culturales y sitios históricos como elementos fundamentales de la bolivianidad, se fortalece el sentido de pertenencia y la autoestima de los ciudadanos. Es una forma de hacer que los bolivianos amen más a Bolivia.

2. Bolivia en el escenario global

En un texto como el presente es imposible detallar el proceso singular de cada manifestación o sitio cultural boliviano que ha sido declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, pues cada uno tiene su particularidad. Para lograr esta distinción se debe cumplir con una serie de etapas con criterios específicos y caracterizadas por su rigurosidad, definidos por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003.

El Estado boliviano, a través de sus instituciones competentes, en especial a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, identifica

bienes culturales y naturales que considera que tienen un valor universal excepcional. Se prepara un expediente de nominación detallado que justifica este valor, describe al bien, a su historia, a su estado de conservación y a las medidas de protección implementadas. La compilación de estos documentos es enviada a la UNESCO y la postulación es evaluada por órganos asesores especializados. Para el patrimonio material, el órgano asesor es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), si el sitio tiene aspectos naturales. Para el patrimonio inmaterial, el órgano asesor es un comité de expertos de la propia UNESCO. El Comité del patrimonio material de la UNESCO, compuesto por representantes de los Estados Parte de la Convención, revisa las evaluaciones de los órganos asesores y toma la decisión final, define si la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial es pertinente o no. Para el patrimonio inmaterial, un órgano similar toma la decisión. La inscripción se basa en el cumplimiento de criterios específicos relacionados con el valor universal excepcional del bien y, en el caso del patrimonio material, también con su integridad y autenticidad. A continuación se detalla el patrimonio boliviano inscrito en las listas de la UNESCO:

Patrimonio Mundial (Patrimonio Material):

- Ciudad de Potosí (1987)
- Misiones jesuíticas de Chiquitos (1990)
- Ciudad histórica de Sucre (1991)
- Fuerte de Samaipata (1998)
- Parque Nacional Noel Kempff Mercado (2000)
- Tiwanaku: centro espiritual y político de la cultura Tiwanaku (2000)
- Qhapaq Ñan - Sistema vial andino (2014)

Patrimonio cultural inmaterial:

- La cosmovisión andina de los kallawayas (2008)
- El Carnaval de Oruro (2008)
- Protegiendo el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades aymaras en Bolivia, Chile y Perú (2009)
- La Ichapekene Fiesta, fiesta mayor de San Ignacio de Moxos (2012)
- El Pujllay y el Ayarachí: músicas y danzas del Yampara (2014)
- Recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alasita (2017)
- La Festividad del Señor Jesú del Gran Poder en la ciudad de La Paz el día de la Santísima Trinidad (2019)
- La Fiesta Grande de Tarija (2021)
- Ch'utillos, Fiesta de San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, encuentro de culturas en Potosí (2023)

Al declarar la singularidad y el valor universal de estos sitios y expresiones culturales como Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO celebra su belleza y su historia e impulsa su conservación y promoción a nivel global. Sitios como la ciudad de Potosí, las Misiones Jesuíticas de Chiquitos y el Carnaval de Oruro son ejemplos elocuentes de cómo Bolivia ha logrado posicionarse en el escenario mundial gracias a su patrimonio.

En América Latina, Bolivia tiene una posición privilegiada, pues está entre los siete países con más sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como puede resultar evidente, la situación del patrimonio reconocido por la UNESCO varía significativamente entre los países. En América Latina, México, Perú y Brasil, tienen un número considerablemente mayor de sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, tanto materiales como inmateriales, como se puede ver en la figura 1 a continuación. Esto se debe a varios factores, entre ellos la extensión y la diversidad de sus respectivas historias y culturas, la intensidad de sus esfuerzos de nominación y conservación, y en algunos casos, una mayor antigüedad en la participación en la Convención de la UNESCO.

Figura 1: Número de sitios patrimoniales por país latinoamericano



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UNESCO, 2025.

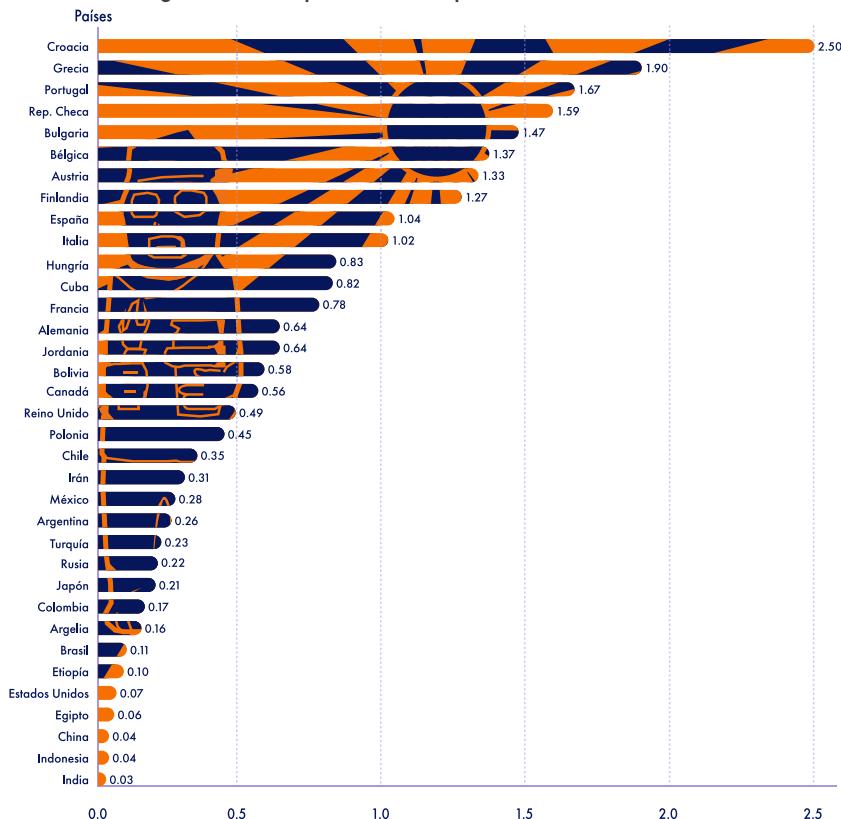
Por ejemplo, México cuenta con numerosos sitios arqueológicos precolombinos, ciudades coloniales y maravillas naturales reconocidas, así como diversas expresiones culturales inmateriales. Perú, con su rica herencia incaica, colonial y preincaica, también tiene varios sitios emblemáticos como Machu Picchu. Brasil destaca por su patrimonio natural y sus manifestaciones culturales afrobrasileñas.

Si bien Bolivia no tiene el mismo número de inscripciones que estos países más grandes, los sitios y manifestaciones que han sido reconocidos son de una gran importancia cultural y natural. El proceso de nominación y reconocimiento requiere un compromiso continuo por parte de los Estados. Bolivia sigue trabajando en la identificación y preparación de expedientes para otros posibles sitios y manifestaciones que merecen ser reconocidos por su valor universal excepcional.

Ahora bien, al ampliar la perspectiva hacia el escenario global, los siete sitios que tiene Bolivia la sitúan aproximadamente en el sexagésimo puesto a nivel mundial. Esta cifra contrasta significativamente con los líderes globales: Italia y China, que tiene alrededor de sesenta sitios cada uno, seguidos de cerca por la riqueza patrimonial de Alemania, Francia y España. Esta es una muestra de que en América Latina la cultura de la conservación y de la gestión del patrimonio todavía debe ser más cultivada; sin embargo las mejoras en las últimas décadas han sido considerables.

De igual manera, la posición ganada por Bolivia es considerablemente mayor a China, por ejemplo, si se establece bajo una relación de sitios patrimoniales por millón de habitantes. Como se puede observar en la Figura 2, el país alcanza el puesto número 15 bajo este panorama y Croacia se posiciona como el número uno. Esto no solamente da cuenta de un análisis más equilibrado para los países pequeños, sino que también permite hacer visible el potencial cultural y patrimonial de espacios sociales poco visibilizados.

Figura 2: Sitios patrimoniales por millón de habitantes



Fuente: elaboración propia en base a datos de la UNESCO, 2025

En definitiva, la posesión de siete sitios designados como Patrimonio Mundial tiene importancia en varios niveles para Bolivia. Más allá del prestigio internacional, el reconocimiento de la UNESCO confirma el valor universal excepcional de estos enclaves, estableciendo que trascienden fronteras y merecen la protección y respeto de la comunidad global. Se entiende que estos sitios deben contribuir al incentivo del turismo, generando un impacto económico positivo para las comunidades locales y la nación en su conjunto. La afluencia de visitantes interesados en la historia, la cultura y la naturaleza de estos lugares ya genera ingresos, empleos y oportunidades de desarrollo sostenible, lo que debería ser multiplicado.

3. Factores de éxito: ¿Cómo se alcanzaron estos logros?

Históricamente, el reconocimiento del patrimonio cultural boliviano por parte de la UNESCO se ha logrado a través de un proceso gradual y multifacético, impulsado por la identificación, documentación y nominación de sitios y manifestacio-

nes que cumplen con los criterios de valor universal excepcional establecidos por las convenciones de la UNESCO.

El proceso se inició con la identificación de bienes que representaban hitos importantes en la historia, el arte, la arquitectura o la naturaleza de Bolivia. La Ciudad de Potosí, inscrita en 1987, fue uno de los primeros reconocimientos, destacando su significado como centro minero fundamental para entender el mundo colonial. Le siguieron las Misiones Jesuíticas de Chiquitos (1990) que son una de las más impresionantes muestras del sincretismo cultural y arquitectónico entre el cristianismo y las culturas amerindias amazónicas. La inscripción de Sucre, capital histórica (1991) valora la cuidadosa preservación de la arquitectura y el urbanismo colonial. Asimismo, surge el reconocimiento del valor natural excepcional del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (2000) y la importancia arqueológica, sociohistórica y espiritual de Tiwanaku (2000).

El 2008 se inscribió en las listas a dos manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Bolivia, comenzando con la Cosmovisión Andina de los Kallawayas, que representa el ancestral conocimiento médico y espiritual de esta cultura, y el Carnaval de Oruro, esa fastuosa celebración que sincretiza elementos religiosos andinos y católicos, reconocida por su música, danza y máscaras. Más tarde se reconoció al proyecto “Protegiendo el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades aymaras en Bolivia, Chile y Perú”, que subraya la importancia de salvaguardar las tradiciones compartidas por esta cultura transnacional andina. La Ichapekene Piesta, fiesta mayor de San Ignacio de Moxos, es una celebración que fusiona creencias indígenas y cristianas, esencial para la identidad de esta región amazónica. Las músicas y danzas del Pujillay y el Ayarachí del pueblo Yampara son expresiones artísticas que contienen la historia y cosmovisión de este pueblo de la región de Chuquisaca. Los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alasita muestran las singulares prácticas urbanas ligadas a la abundancia y los deseos, así como la convivencia y la condición multicultural de Bolivia. La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz es otra de las manifestaciones religiosas y culturales fundamentales de la ciudad, que aglutina a miles de personas en torno a la fe y la ritualidad. La Fiesta Grande de Tarija es una celebración regional que expresa la identidad chapaca a través de la música, la danza y las tradiciones. Finalmente, Ch'utillos, Fiesta de San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, encuentro de culturas en Potosí, destaca como un espacio de diálogo intercultural y mestizaje en esta histórica región.

Todas estas formas de expresión cultural han permitido reconocer –desde adentro hacia afuera– las innegables construcciones identitarias a partir de los saberes culturales bolivianos. El patrimonio no sólo ha establecido el vínculo con lo ancestral y su preservación, sino también ha logrado generar un lazo estrecho entre la cosmovisión, lo simbólico y la construcción social contemporánea.

Ahora bien, el reconocimiento del patrimonio cultural boliviano por la UNESCO se ha fundamentado en la demostración de su valor universal excepcional, en cada caso se ha sustentado en documentación rigurosa que incluye investigaciones históricas, arquitectónicas, arqueológicas, antropológicas y científicas. Este proceso requiere de un compromiso del Estado a través de sus instituciones, que impulsan las nominaciones, protegen los sitios y cumplen con las recomendaciones de la UNESCO. La participación de expertos multidisciplinares y el apoyo de las comunidades locales, especialmente en el patrimonio inmaterial, son fundamentales.

El sector público está llamado a liderar la identificación, nominación y gestión de cada sitio o manifestación. Por su parte, el sector privado debe contribuir con apoyo económico y promoción del turismo cultural sostenible. Por su lado, la sociedad civil, a través de ONGs, de universidades, de equipos de investigadores, entre otros, también juega un papel clave en la documentación y defensa del patrimonio. El éxito del reconocimiento del patrimonio boliviano ante la UNESCO se basa en la combinación de un sólido respaldo científico académico, de la voluntad política estatal, de la colaboración de expertos y el involucramiento activo de las comunidades y la sociedad civil, incorporando además estrategias que puedan fortalecer el proceso.

4. Desafíos y riesgos a futuro

La capacidad de Bolivia para lograr más reconocimientos está condicionada por muchos factores. El primero está vinculado a la posibilidad de preparar expedientes de nominación que cumplan con los rigurosos criterios de la UNESCO, que requieren una investigación exhaustiva, documentación detallada (histórica, arquitectónica, antropológica, científica), planos, fotografías y, en algunos casos, estudios comparativos a nivel internacional. Esto demanda recursos humanos y financieros especializados. En ese sentido, demostrar el valor universal excepcional de un sitio o una expresión cultural, así como su integridad y autenticidad en el caso del patrimonio material, puede ser un proceso complejo, subjetivo, largo, y altamente competitivo ya que muchos países presentan valiosas nominaciones cada año, lo que exige perseverancia y una argumentación sólida y convincente. El otro gran reto al que se enfrenta el patrimonio cultural boliviano está vinculado con el apoyo político sostenido y su priorización a nivel gubernamental, el asegurar los recursos necesarios y mantener el impulso en los procesos de nominación. La UNESCO no sólo evalúa el valor de un bien, sino también la capacidad del Estado para garantizar su protección, gestión y conservación a largo plazo. Esto implica la implementación de planes de gestión efectivos, la asignación de recursos continuos y la aplicación de medidas para mitigar amenazas. En el caso específico del patrimonio inmaterial, es fundamental demostrar la participación activa y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades portadoras.

ras de las tradiciones. Esto requiere procesos inclusivos y sensibles a las dinámicas culturales locales.

Bolivia enfrenta situaciones que dificultan el reconocimiento de su patrimonio cultural. Quizás el más determinante está relacionado con la carencia de recursos suficientes, tanto financieros como humanos especializados, lo que obstaculiza la investigación y la preparación de expedientes de alta calidad. La falta de fortaleza institucional, caracterizada por la inestabilidad en las políticas culturales y la rotación de personal, ralentiza los procesos de nominación y gestión. Además, el patrimonio existente está amenazado por el desarrollo urbano no controlado, la minería, la deforestación, el cambio climático, la falta de mantenimiento y el turismo masivo no regulado, lo que puede dañar la credibilidad del país ante la UNESCO. De igual manera, un gran desafío es el desconocimiento y la falta de valoración de ciertos sitios y expresiones culturales patrimoniales que no son masivas, lo que se traduce en una menor priorización de su protección y promoción.

Entre otras cosas, el país debe trabajar en el fortalecimiento institucional, consolidando y fortaleciendo a las entidades encargadas de la gestión, de la conservación y de la difusión del patrimonio cultural, asignando los recursos necesarios, tanto materiales como humanos. Debe desarrollar estrategias a largo plazo, con objetivos claros y plazos definidos; las políticas relacionadas con el patrimonio cultural deben ser cuestión de estado y no deben verse afectadas por los cambios de administración de la cosa pública.

Algunas otras acciones clave están relacionadas con el fomento de la investigación académica y científica, la incorporación y la participación activa de la sociedad civil y de las comunidades locales, la mejora de la gestión, la divulgación y conservación de los sitios, la innovación en la documentación utilizando nuevas tecnologías, la diplomacia cultural activa para promover el patrimonio boliviano internacionalmente, la sensibilización y la educación de la población sobre la cultura de conservación y apreciación del patrimonio cultural nacional.

5. Remarcas finales

Se debe hacer énfasis en la importancia de fortalecer la legislación y su cumplimiento, esto implica revisar y actualizar las leyes como la N° 530 sobre patrimonio cultural para que abarque tanto el patrimonio material como el inmaterial, estableciendo mecanismos efectivos para su aplicación y sanción de infracciones. Esto sugiere una necesidad de modernizar el marco legal para adaptarlo a los desafíos actuales y garantizar una protección integral del patrimonio.

Es fundamental implementar planes de gestión sostenibles para cada sitio y manifestación patrimonial, involucrando a las comunidades locales en su desarrollo. Estos planes deben buscar un equilibrio entre la conservación y el desarrollo

sostenible, considerando el turismo responsable y las actividades económicas compatibles. Se reconoce la importancia de que la conservación no sea un obstáculo para el desarrollo, sino que ambos puedan coexistir de manera armoniosa. La inversión prioritaria en conservación y restauración es otro punto clave, lo que implica asignar un presupuesto adecuado y sostenible para la conservación preventiva, el mantenimiento regular y la restauración de bienes patrimoniales, priorizando aquellos que se encuentran en mayor riesgo. Se debe subrayar la necesidad de una inversión constante y planificada para evitar el deterioro del patrimonio y asegurar su preservación a largo plazo.

Es importante fomentar la investigación y documentación continua para profundizar el conocimiento sobre el patrimonio cultural, su historia, significado y estado de conservación. Se propone apoyar proyectos de investigación multidisciplinarios y promover la documentación exhaustiva utilizando tecnologías innovadoras. Esto resalta la necesidad de un enfoque científico y académico para comprender y preservar adecuadamente el patrimonio. En ese sentido es fundamental revitalizar las carreras relacionadas con el estudio y la investigación sobre historia, arqueología, antropología, turismo y las ciencias ambientales.

La educación y sensibilización integral se presentan como una herramienta fundamental, lo que implica incorporar la enseñanza sobre el patrimonio cultural en los currículos escolares de todos los niveles y desarrollar campañas mediáticas de sensibilización dirigidas a la población general para fomentar la valoración, el respeto y el sentido de pertenencia. Se busca generar una conciencia colectiva sobre la importancia del patrimonio y su papel en la construcción de la identidad nacional.

La promoción turística responsable y diversificada se plantea como una estrategia para destacar la riqueza y diversidad del patrimonio cultural boliviano, promoviendo un turismo que beneficie a las comunidades locales, que minimice el impacto negativo en los sitios, así como en las manifestaciones culturales. Se busca un turismo sostenible, tanto en términos económicos como ambientales y sociales.

El apoyo a la transmisión y conservación del patrimonio inmaterial es otra recomendación importante, lo que implica implementar programas de apoyo a las comunidades portadoras de este patrimonio para garantizar su transmisión a las nuevas generaciones, incluyendo talleres, festivales, documentación audiovisual y apoyo a los maestros y practicantes. Se reconoce la fragilidad del patrimonio inmaterial y la necesidad de tomar medidas para asegurar su continuidad.

El fomento de la participación ciudadana debe establecer mecanismos formales y efectivos para la participación de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los expertos en la toma de decisiones relacionadas con el patrimonio cul-

tural. Se busca una gestión participativa del patrimonio, donde todos los actores relevantes tengan voz y voto.

Existe la necesidad de una estrategia nacional proactiva para la identificación y nominación de nuevos sitios y manifestaciones a las listas de la UNESCO, basada en un inventario exhaustivo del patrimonio boliviano. Se busca una acción planificada y sistemática para aumentar la presencia del patrimonio boliviano en el ámbito internacional. Esto debe estar acompañado por la búsqueda fundamental de cooperación técnica y financiera que ofrece la UNESCO y otros organismos internacionales para la conservación y gestión del patrimonio. Se busca acceder a recursos y conocimientos externos para fortalecer las capacidades nacionales. Se debe apuntar a un enfoque holístico que combine la protección del patrimonio con el desarrollo sostenible, la participación ciudadana y la cooperación internacional.

6. Referencias

- Albó, X., & Suvelza, F. X. B. (2007). *Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías*. PNUD.
- Bolivia. (2009). *Constitución Política del Estado*. Gaceta Oficial de Bolivia.
- Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional N° 114.
- CONAIE. (2022, 25 de abril). Lenguas Indígenas de Ecuador y el Mundo. <https://coniae.org/2022/04/25/lenguas-indigenas-de-ecuador-y-el-mundo/>
- Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nro. 449.
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2014, 23 de mayo). Ley N° 530 del Patrimonio Cultural Boliviano.
- Ministerio de Cultura del Perú, Dirección de Lenguas Indígenas. (2021). Lista de Lenguas Indígenas u Originarias. https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/paginas_internas/descargas/Lista%20de%20Lenguas%20Indi%C81genas%20u%20Originarias%202021.pdf
- Naciones Unidas Colombia. (2021). Las lenguas indígenas: cultura, identidad e historia. <https://colombia.un.org/es/148986-las-lenguas-ind%C3%A9genas-cultura-identidad-e-historia>

RECORD MUNDIAL: EL MAYOR NIVEL DE RADIACIÓN UV EN EL PLANETA

DESCRIPCIÓN: El mayor nivel de radiación solar de UV medido en el planeta es de 43.3 UVI (Ultra Violet Index). Registrado por astrobiólogos de USA y Alemania, en Licancabur Volcano, Potosí, Bolivia, el 29 de diciembre de 2003.

UBICACIÓN: San Pablo de Lipez Potosí

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 29/12/2003

RECORD MUNDIAL: LA PLANTA QUE FLORECE MÁS LENTO

DESCRIPCIÓN: Puya raimondii es la planta que florece más lento. Descubierta en las montañas a 3.960 m, en Bolivia. El racimo de flores florece a los 80 a 150 años. Una vez que florece, la planta muere.

UBICACIÓN: Departamento de la Paz, Municipio de Comanche, provincia Bautista Saavedra.

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 01/01/2001

RECORD MUNDIAL: EL HUMEDAL PROTEGIDO MÁS GRANDE

UBICACIÓN: San Ignacio de Moxos, Beni.

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 02/02/2013

DESCRIPCIÓN:

El 2 de febrero del 2013, el gobierno de Bolivia aprobó más de 69000 km cuadrados (26640 millas cuadradas) de los Llanos de Moxos se convertirán en áreas protegidas como parte de la convención de Humedales de Ramsar, que tiene importancia internacional.

KNOCK OUT MÁS RÁPIDO DE LA HISTORIA

DESCRIPCIÓN: El peleador boliviano Robert 'Boyka' Batte hizo historia en la MMA logrando el knock out más rápido de la historia; Bolivia logró un hito histórico en las Artes Marciales Mixtas gracias al peleador cruceño Robert Batte, quien consiguió una victoria por nocaut en solo 3.8 segundos.

UBICACIÓN:
Santa Cruz, Bolivia

OTORGADO POR:
Copa Ciclón
Combat

PUESTO LOGRADO:
knock out más
rápido de la historia

FECHA: 09/12/24



CAPÍTULO 07

ACCESIBILIDAD URBANA HECHA A MANO: EL MODELO BOLIVIANO DE CIUDADES CERCANAS

Juan E. Cabrera y Mario Torrez

- Bolivia registra niveles altos de accesibilidad espacial urbana efectiva en América Latina, con más del 90 % de su población urbana accediendo a servicios clave en menos de 15 minutos a pie.
- En ciudades como Cercado (Cochabamba) y Nuestra Señora de La Paz, los tiempos promedio de acceso a servicios esenciales son inferiores a 5 minutos, superando los estándares propuestos por el modelo europeo de la ciudad de 15 Minutos.
- El 83 % del crecimiento urbano en Bolivia ha sido informal, convirtiéndose en el principal mecanismo de acceso a vivienda, empleo y servicios básicos para la mayoría de la población.
- Bolivia puede ser referente regional en urbanismo de proximidad construido desde abajo, gracias a la agencia popular, la economía informal y la organización barrial.

1. Introducción

Conmemorando el Bicentenario de la independencia boliviana y reconociendo que la mayoría de la población del país reside en áreas urbanas, es crucial reflexionar sobre los modelos urbanos, considerando los desafíos y éxitos en la creación de urbes más justas y adaptadas al cambio climático. Este capítulo explora la condición de las ciudades bolivianas con relación al paradigma actual de la “ciudad de 15 minutos”, destacando cómo la informalidad laboral, económica y urbana actúan como un elemento central de cercanía a diferentes amenidades. Aunque la idea, concebida por Carlos Moreno (Moreno, 2021), emergió en Europa como solución al urbanismo pospandemia y hoy es un modelo clave, sobre todo en Occidente, en Bolivia y otros países del sur global se enfrentan grandes diferencias: alta informalidad, ciudades divididas e instituciones débiles. Analizar este modelo desde la perspectiva boliviana es vital por su potencial para cambiar la discusión sobre la accesibilidad urbana y el derecho a la ciudad. Lejos de concebir la informalidad como un problema, este capítulo propone

entenderla como la forma predominante en que las ciudades bolivianas han facilitado el acceso a bienes y servicios básicos. De hecho, se estima que el 83 % del proceso urbano en la región es informal (Espinoza & Fort, 2020). Este fenómeno ha surgido como respuesta a una planificación formal y una infraestructura estatal limitadas, que desde la década de 1940 han replicado un modelo de desarrollo sin éxito en su implementación.

A nivel mundial, Bolivia ha llamado la atención no solo por su alta informalidad laboral y urbana, sino también por la fortaleza de sus comunidades y la innovación en sus prácticas de urbanización (Cabrera, 2021). La forma en que las ciudades bolivianas han logrado asegurar la accesibilidad funcional a través de medios informales ofrece una valiosa lección para otros países en situaciones similares. Este enfoque, en lugar de trasplantar acríticamente las ideas del urbanismo europeo, busca resignificar el modelo de ciudad cercana, basándose en las prácticas populares y las estrategias locales de gestión urbana.

El capítulo evalúa la situación actual de la accesibilidad urbana en Bolivia mediante un estudio geoespacial de Nuestra Señora de La Paz, Cercado (Cochabamba) y Santa Cruz de la Sierra, para el cual se utilizaron datos no tradicionales de la startup Ciudata. El análisis de los registros de Puntos de Interés permite identificar los niveles reales de cercanía a servicios vitales. Se analiza cómo la estructura urbana informal funciona como una red paralela de suministro y accesibilidad que abarca aspectos como el comercio, el transporte, la vivienda y las redes de servicios.

La meta es probar que la llamada ciudad de 15 minutos —concebida como un lugar para vivir, trabajar, comprar y atender las necesidades básicas sin tener que viajar largas distancias (Allam et al., 2022)— ya se materializa, en parte, en las urbes bolivianas, aunque no esté planificada ni reconocida por los documentos oficiales. Al revelar la existencia de esta “ciudad cercana de facto”, el apartado sugiere una mirada crítica a los paradigmas actuales de planificación urbana (Méndez et al., 2024). Esto exige modelos que reconozcan, integren y potencien las prácticas existentes que ya facilitan el acceso a servicios para la población, sin que ello implique una aceptación acrítica o la perpetuación de sus deficiencias.

En el marco del Bicentenario, esta discusión no solo contribuye a una mejor comprensión, sino que también propone ideas para afianzar una ciudad más equitativa y sostenible. Se busca que la proximidad a los servicios no sea un privilegio planificado desde las esferas gubernamentales, sino una opción construida desde las iniciativas comunitarias. El reconocer que la informalidad contribuye a crear ciudades más cercanas abre nuevas oportunidades para diseñar políticas urbanas coherentes e inclusivas, que integren lo formal con lo informal, lo planificado con lo espontáneo y lo global con lo local.

2. Bolivia en el escenario global

El posicionamiento de Bolivia en el debate global sobre urbanismo y accesibilidad ha sido, tradicionalmente, periférico. No obstante, el modelo emergente de proximidad urbana que se evidencia en sus ciudades, en especial a través de la informalidad estructural, ofrece lecciones únicas sobre adaptabilidad, resiliencia y acceso equitativo. Mientras en las ciudades del norte global la ciudad de 15 minutos se presenta como una propuesta innovadora para reducir emisiones y mejorar la calidad de vida, en el contexto boliviano esta lógica de proximidad ha emergido desde abajo, no por política pública deliberada, sino como respuesta a carencias estructurales.

Bolivia resalta porque mucha gente trabaja en la informalidad (un 84,2 %, según datos del INE de 2024), y la ciudad está organizada de tal forma que la mayoría de las personas acceden a los servicios fuera de los caminos oficiales. En la mayoría de las urbes bolivianas, gran parte de la población accede a compras, mercados, transporte, salud y educación a través de una red de establecimientos informales. Estos negocios, generalmente pequeños y medianos, son instalados por una población emprendedora que distribuye estratégicamente sus actividades económicas en distintos puntos de la ciudad. Gracias a estas iniciativas particulares, se alcanzan altos niveles de accesibilidad, permitiendo a los ciudadanos disponer de una gran cantidad de servicios en incluso menos de 15 minutos, meta anhelada por París y Londres.

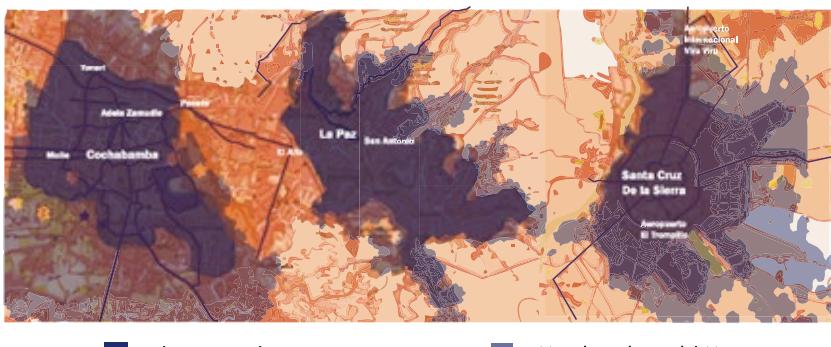
Para evaluar la proximidad y accesibilidad en el marco del modelo de ciudad de 15 Minutos, se definieron diversas categorías de servicios urbanos fundamentales, agrupadas según su función y relevancia cotidiana. Estas categorías permiten analizar la distribución territorial de las facilidades y su relación con la calidad de vida urbana. Las categorías consideradas fueron las siguientes:

- Alimentos: supermercados y micro mercados, mercados locales, tiendas de barrio, restaurantes
- Salud: farmacias, hospitales, clínicas, postas de salud y laboratorios de diagnóstico.
- Educación: escuelas, universidades e institutos técnicos.
- Recreación y cultura: parques, museos, instalaciones deportivas y lugares de entretenimiento.
- Servicios públicos: oficinas gubernamentales, centros policiales e instituciones cívicas.
- Infraestructura de transporte: paradas de transporte público y rutas del transporte público/sindical.
- Finanzas: bancos, cajeros automáticos, cooperativas y agentes (puntos de interés que se encuentran afiliados a alguna entidad financiera, lo que per-

mite que en sus instalaciones se realicen actividades como retiros, pagos y depósitos).

De acuerdo con el análisis hecho por los autores con base en el relevamiento de Ciudata para cada una de las ciudades, las áreas de estudio por ciudad fueron delimitadas según el mayor nivel de consolidación urbana respecto a las periferias. Nuestra Señora de La Paz destaca con la mayor proporción de área urbana consolidada (69,09 %), Santa Cruz de la Sierra, con la mayor extensión urbana, pero una consolidación intermedia (53,67 %), mientras que Cercado (Cochabamba) muestra el menor nivel de consolidación (29,26 %), reflejando una urbanización más dispersa (Ver figura 1).

Figura 1: Áreas consolidadas y de estudio en tres ciudades



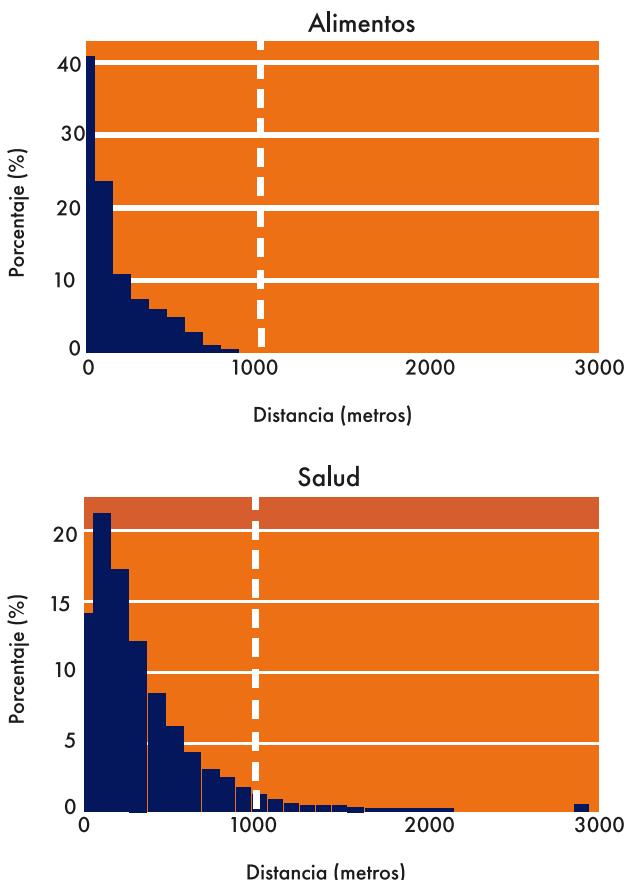
Fuente: Elaboración propia

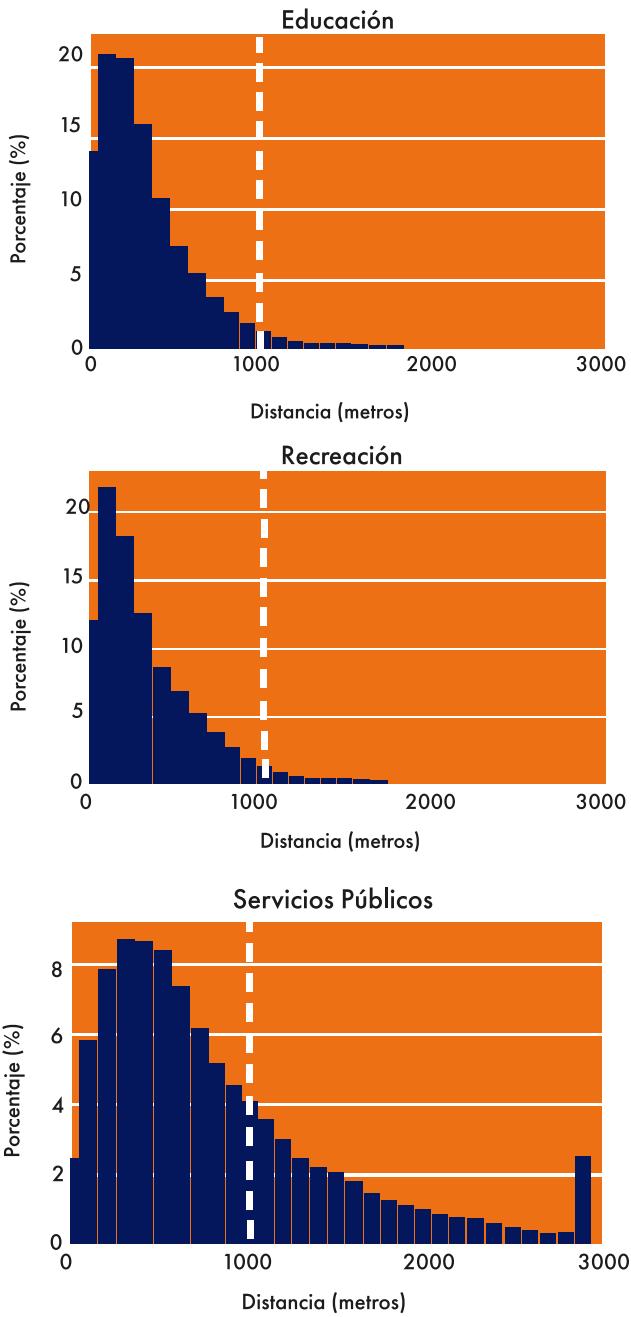
El análisis de los datos revela que las ciudades presentan, como veremos adelante, niveles notables de accesibilidad urbana en las áreas más consolidadas, donde habita la mayor cantidad de población, dejando al margen las periferias extendidas.

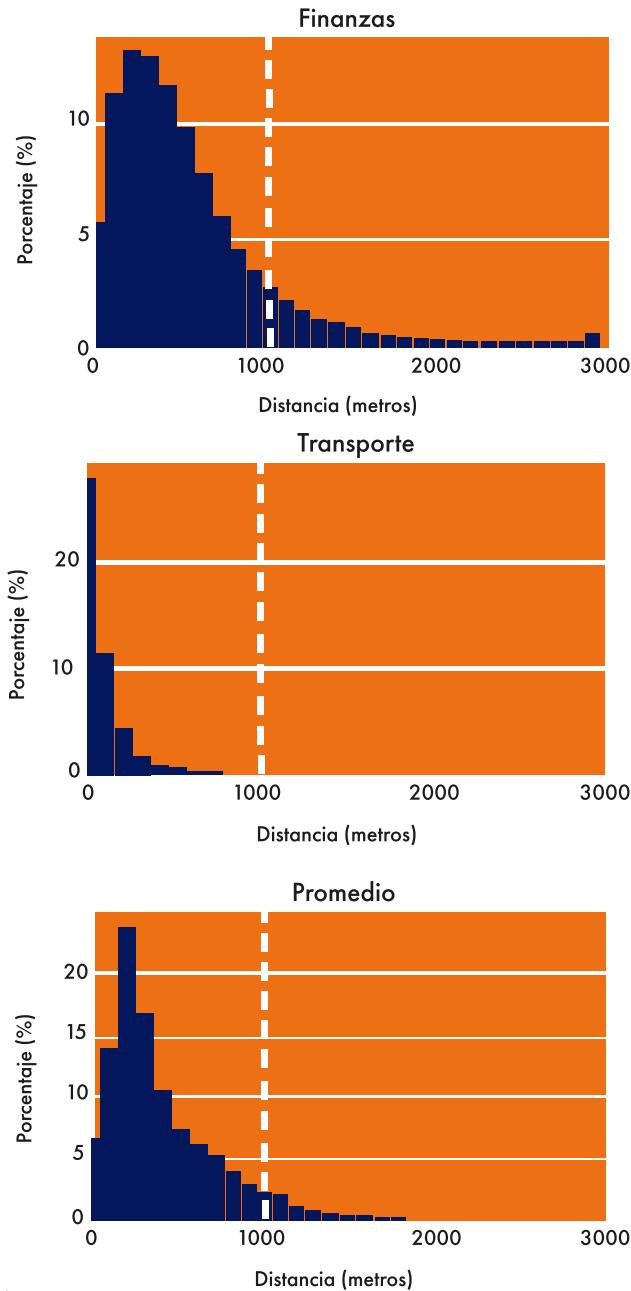
Santa Cruz de la Sierra tiene una cobertura ampliamente favorable en la mayoría de los servicios considerados. En promedio, el 91 % de la población accede a servicios clave en menos de 15 minutos caminando, lo que demuestra una estructura urbana que favorece la proximidad y la integración funcional del espacio urbano. Esta situación es especialmente destacable en los servicios de alimentación y transporte, donde la cobertura alcanza el 98,9 % y 98,2 %, respectivamente. Los tiempos de acceso también refuerzan esta lectura positiva: en la mayoría de las categorías, el tiempo medio es inferior a los 5 minutos, y en algunos casos incluso menor a 3 minutos, como en alimentación (2,5 min) y transporte (1,8 min). Estos datos reflejan un entorno urbano que garantiza a la gran mayoría de sus habitantes la posibilidad de satisfacer necesidades cotidianas de forma rápida

y cercana, favoreciendo una vida urbana activa, sostenible y con menor dependencia del transporte motorizado. Incluso en servicios más especializados, como educación (96,1 % de cobertura en menos de 15 minutos) y recreación (94,9 %), los niveles de accesibilidad son altos y permiten prever una base sólida para avanzar hacia modelos de ciudad compacta y de proximidad. Si bien existen áreas con márgenes de mejora, el desempeño general indica que Santa Cruz de la Sierra cuenta con condiciones favorables para consolidar un desarrollo urbano equilibrado, en el que la cercanía a servicios fundamentales fortalezca la cohesión social y mejore la calidad de vida urbana (Ver figura 2).

Figura 2: Porcentaje de distribución de distancias a servicios urbanos en Santa Cruz de la Sierra







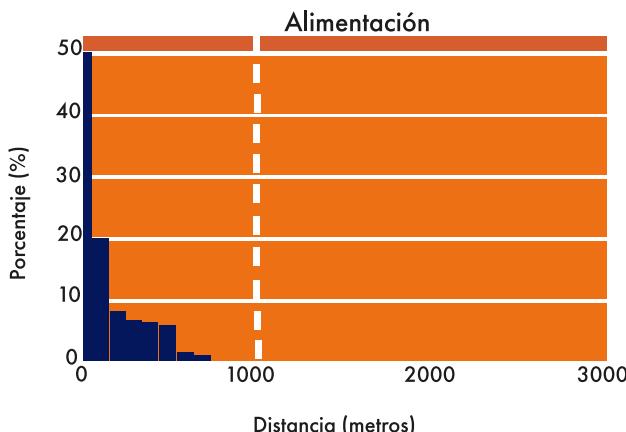
Fuente: Elaboración propia

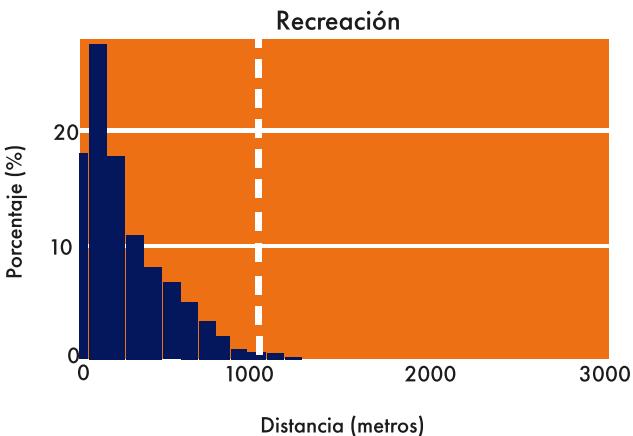
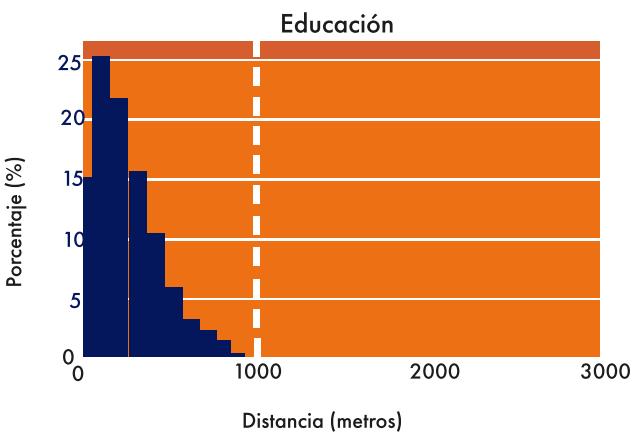
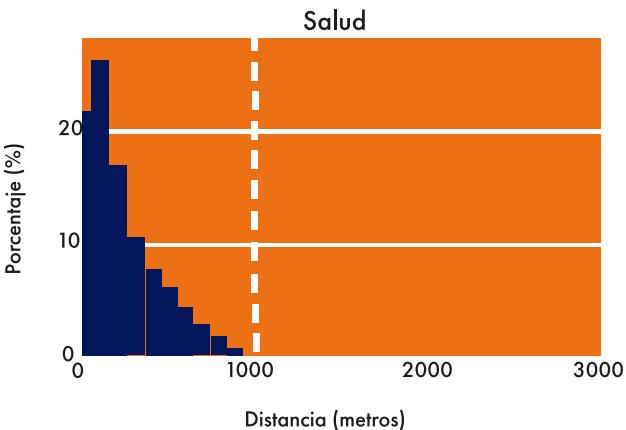
En el caso de Nuestra Señora de La Paz, la ciudad demuestra un desempeño sobresaliente en términos de accesibilidad urbana, con una estructura espacial que

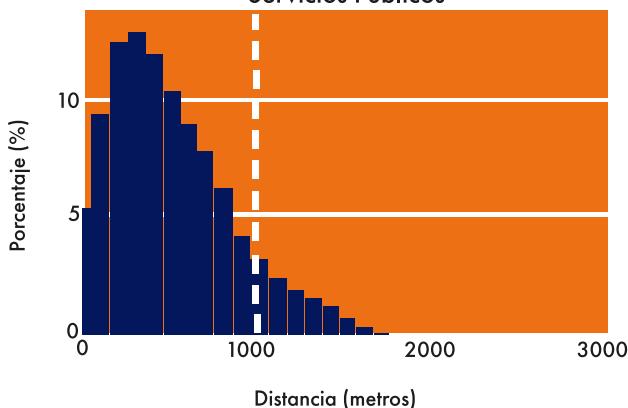
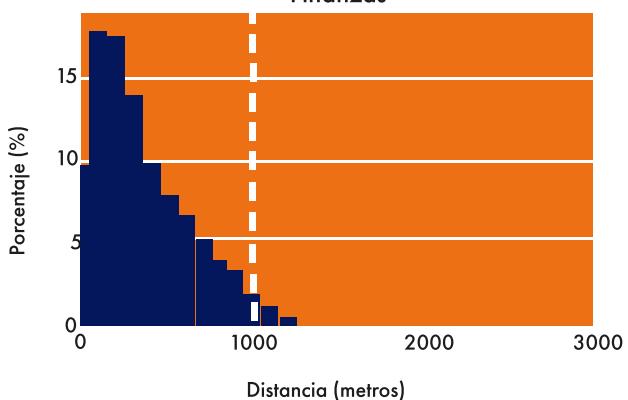
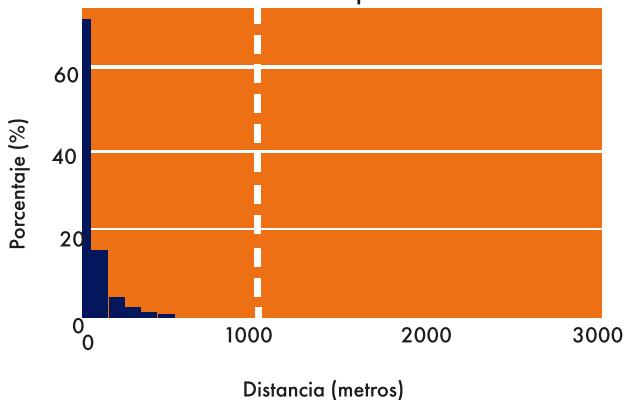
permite a la mayoría de sus habitantes acceder a servicios esenciales en menos de 15 minutos caminando. En promedio, el 95 % de la población cuenta con esta ventaja, destacando los servicios de alimentación y transporte, que alcanzan coberturas casi universales con tiempos de acceso muy reducidos, de entre 2 y 3 minutos. Los servicios educativos, recreativos y financieros también muestran altos niveles de proximidad, con distancias medias por debajo de los 400 metros y coberturas superiores al 94 %, lo que sugiere una distribución equilibrada de estos equipamientos en la ciudad.

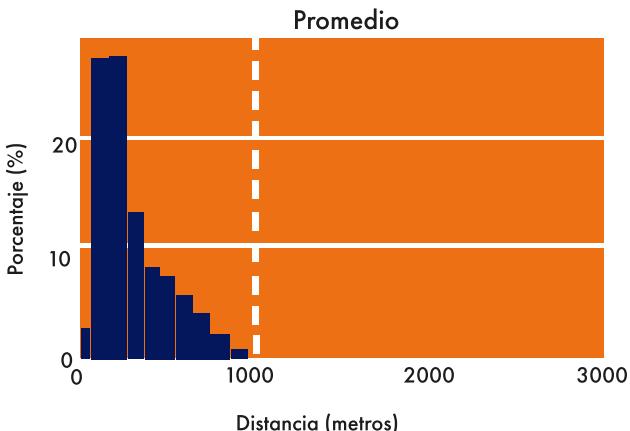
Incluso en servicios más centralizados, como los públicos, Nuestra Señora de La Paz mantiene un nivel aceptable de acceso, con el 78 % de cobertura dentro del umbral de 15 minutos. Esta eficiencia general en la accesibilidad evidencia una ciudad compacta y funcional, donde la vida cotidiana puede desarrollarse con baja dependencia del transporte motorizado. Los resultados reflejan una base sólida para avanzar hacia el modelo de ciudad de 15 minutos, priorizando la proximidad, la equidad espacial y la sostenibilidad urbana (Ver figura 3).

Figura 3: Porcentaje de distribución de distancias a servicios urbanos en Nuestra Señora de La Paz





Servicios Públicos**Finanzas****Transporte**

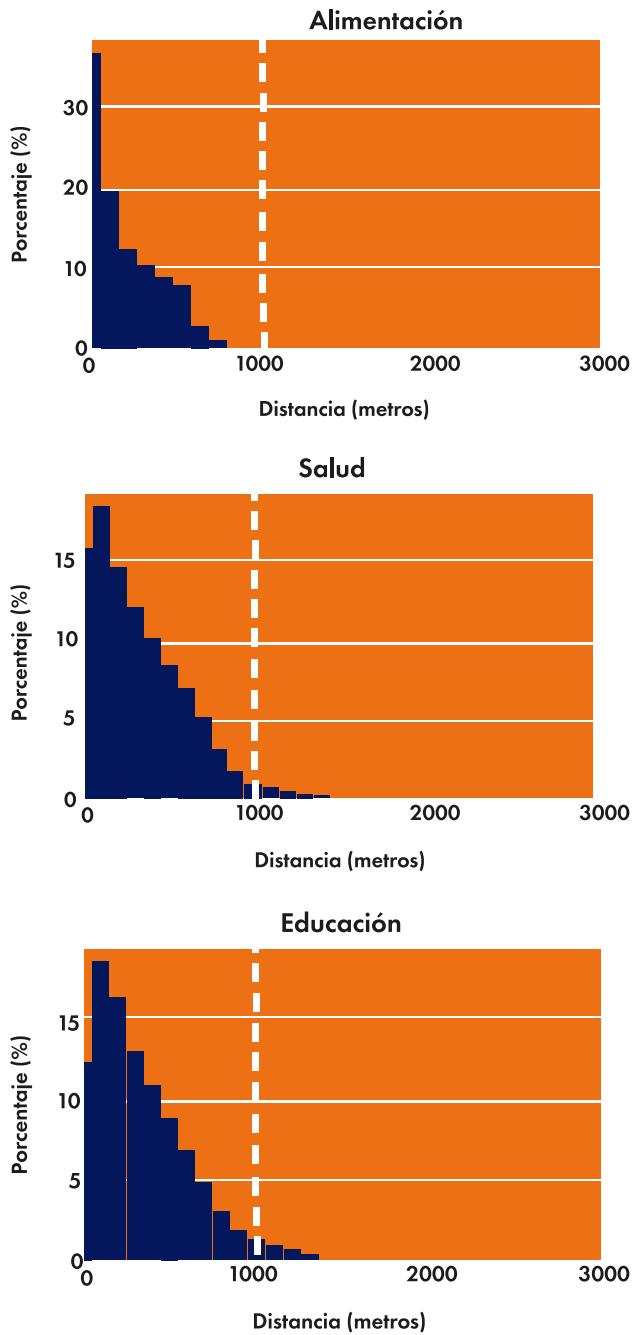


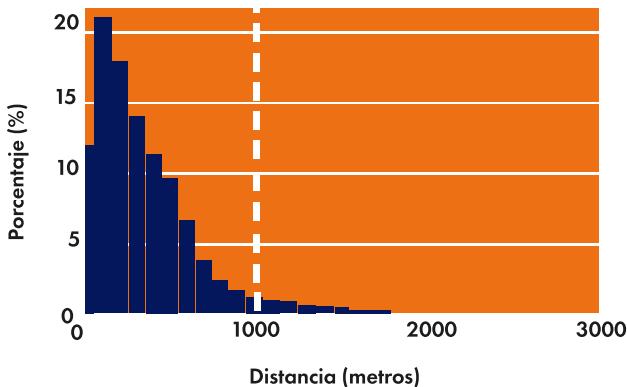
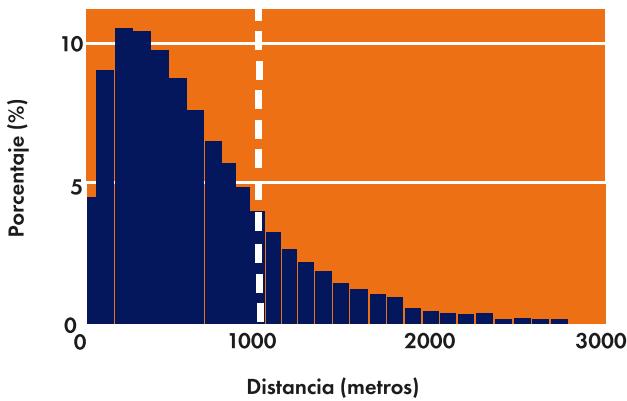
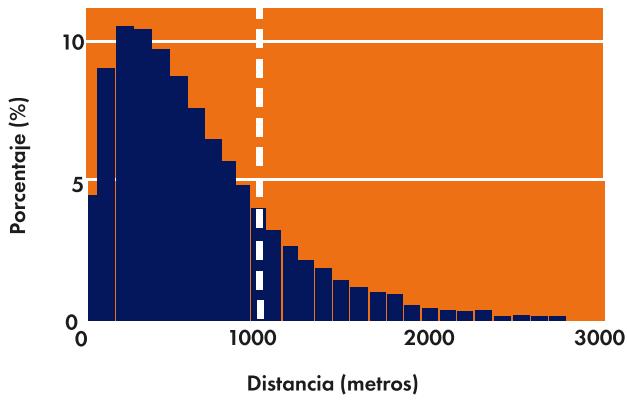
Fuente: Elaboración propia

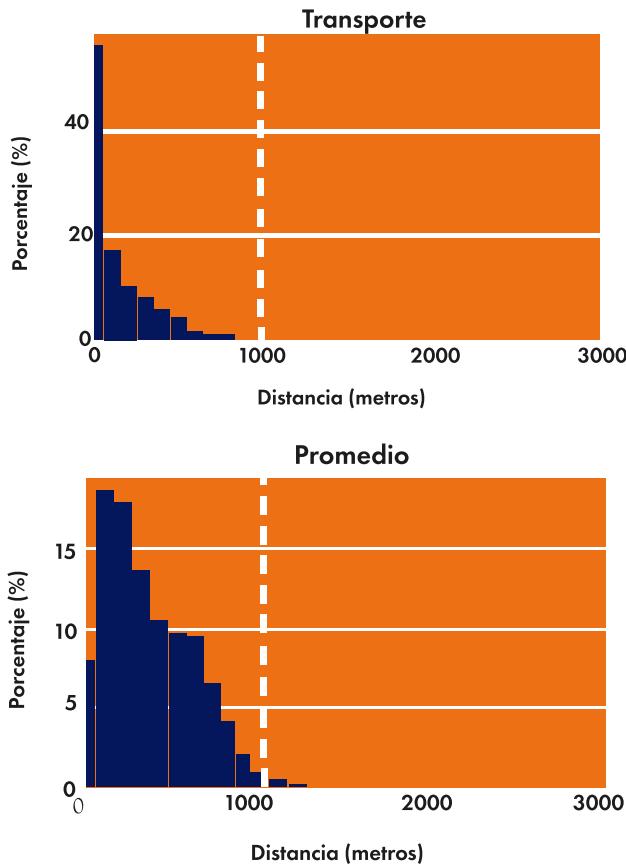
La ciudad de Cercado (Cochabamba) presenta también un perfil urbano altamente accesible, con una notable proximidad entre la población y los servicios esenciales. En promedio, el 97 % de la población accede caminando a estos servicios en menos de 15 minutos, y en servicios como alimentación, salud, educación y transporte, la cobertura supera el 99 %. Los tiempos promedio de acceso son también muy bajos: alrededor de 2 a 4 minutos para la mayoría de los servicios, y tiempos medianos aún más reducidos, como 1,2 minutos para alimentación y menos de 3 minutos para educación y salud. Estas cifras reflejan una estructura urbana compacta y funcional, donde los equipamientos están insertos en los tejidos barriales, permitiendo que la vida cotidiana se desarrolle con alta autonomía peatonal.

Los valores por deciles muestran que el 50 % de la población accede a los servicios a distancias menores a los 250 metros, con una marcada concentración de servicios en radios de proximidad inmediata. A pesar de que existen algunos casos con distancias máximas superiores al kilómetro —especialmente en servicios públicos y financieros—, estos son casos puntuales y no alteran el buen desempeño general. El acceso a rutas de transporte es particularmente eficiente, con una distancia media de solo 82,1 metros y una cobertura del 100 %, lo cual evidencia la penetración territorial del sistema de transporte popular. En conjunto, Cercado (Cochabamba) ofrece una base urbana sólida para avanzar hacia el modelo de ciudad de 15 minutos, con un enfoque centrado en la equidad espacial, la sostenibilidad y la mejora continua en la distribución de servicios públicos (Ver figura 4).

Figura 4: Porcentaje de distribución de distancias a servicios urbanos en Cercado (Cochabamba)



Recreación**Servicios Públicos****Servicios Públicos**



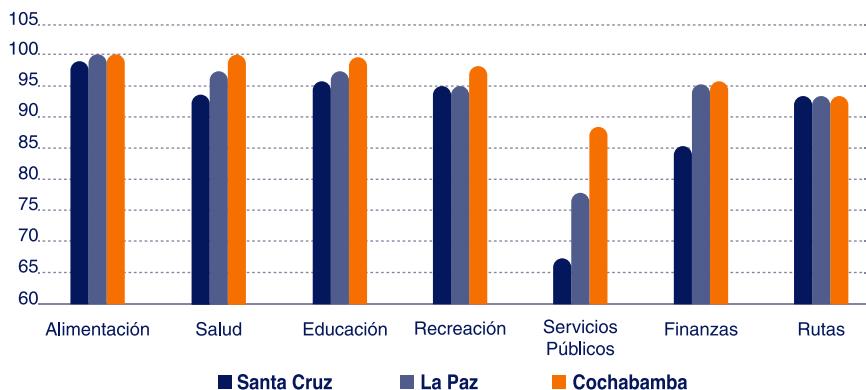
Fuente: Elaboración propia

Las tres ciudades presentan altos niveles de accesibilidad urbana, con más del 90 % de su población accediendo a servicios clave en menos de 15 minutos a pie. Cercado (Cochabamba) destaca con los mayores niveles de cobertura en casi todos los servicios, alcanzando el 100 % en alimentación y transporte, y superando el 95 % en salud, educación y recreación. Nuestra Señora de La Paz también muestra un desempeño sólido, especialmente en educación y rutas de transporte, mientras que Santa Cruz de la Sierra, aunque con buena accesibilidad en la mayoría de los servicios, presenta una menor cobertura en servicios públicos (67,4 %) y financieros (85,5 %), lo que evidencia áreas donde se podría mejorar la equidad territorial.

Cercado (Cochabamba) presenta el tiempo promedio de acceso más bajo a servicios urbanos esenciales con 3,6 minutos, seguida por Nuestra Señora de La Paz con 4,8 minutos y Santa Cruz de la Sierra con 5,7 minutos, lo que evidencia una mayor compacidad y eficiencia espacial en la estructura urbana cochabambina.

En conjunto, los datos reflejan un patrón urbano positivo en términos de proximidad, mucho más eficientes que el rango de 15 minutos que muchas ciudades del norte global apuntan. Por tanto, el tiempo promedio general de acceso a servicios urbanos en las tres ciudades es de aproximadamente 4,7 minutos (Ver figura 5).

Figura 5: Comparación de coberturas (%)



Fuente: Elaboración propia

Aunque este modelo no se vea en las estadísticas oficiales, cumple con muchos de los requisitos de la “ciudad de 15 minutos”: cercanía, barrios autosuficientes, moverse sin necesidad de coche y una economía local fuerte.

Comparado con países de la región, Bolivia presenta un patrón singular. Si bien la informalidad también es elevada en Perú, Guatemala o Paraguay, la articulación de los emprendimientos económicos de mucha población laboralmente informal con el territorio urbano es particularmente intensa en Bolivia. Esto se refleja en el uso del espacio público por parte de ferias, transporte popular, comercio callejero y actividades residenciales mixtas, lo cual genera una ocupación funcional del territorio urbano, sin depender de estructuras institucionalizadas.

A escala global, experiencias como los “tianguis” de México, los asentamientos autoconstruidos de Nairobi o los sistemas de transporte informal en Manila, ofrecen puntos de comparación relevantes. No obstante, pocos contextos han desarrollado de forma tan extendida una red urbana de proximidad como las ciudades bolivianas. Este modelo “no planificado” de ciudad de proximidad merece atención internacional como una forma alternativa de urbanismo funcional, basada en la agencia popular y la adaptación cotidiana.

En foros internacionales como ONU-Hábitat, el discurso sobre “derecho a la ciudad” y “urbanismo inclusivo” ha comenzado a incorporar referencias a la econo-

mía informal como parte del ecosistema urbano (MOPSV, 2024). Bolivia, desde su particular experiencia, puede contribuir a esta discusión global con evidencia empírica y modelos de proximidad emergentes que desafían las categorías convencionales de lo planificado institucional vs. lo planificado desde abajo. Además, el uso de datos de fuentes alternativas como los de Ciudata, que capturan mejor las realidades urbanas que las plataformas tradicionales, puede representar un aporte metodológico clave para otros contextos del Sur global.

Sin embargo, este reconocimiento global precisa de un relato constructivo desde Bolivia. La unión entre la universidad, las administraciones municipales, los colectivos sociales y los expertos en tecnología urbana debe presentar esta vivencia como un ejemplo de planificación urbana diferente. No como un arquetipo perfecto, sino como una prueba que demuestra cómo, en situaciones de escasez, es posible crear maneras factibles de cercanía, habitabilidad y acceso urbano con base en la agencia popular. Dicho aporte puede robustecer la posición boliviana en los debates sobre la Nueva Agenda Urbana, la equidad territorial y el derecho a la ciudad. Al mismo tiempo, puede convertir la resiliencia urbana no formal en una reconocida fuente de aprendizaje para el progreso urbano mundial.

3. Factores de éxito: ¿Cómo se alcanzaron estos logros?

El modelo que vemos surgir espontáneamente en las urbes bolivianas no es fruto de la casualidad ni de un plan trazado por el gobierno. Más bien, es la consecuencia de un entramado complejo de elementos históricos, estructurales y culturales que han ido dando forma al entorno urbano, respondiendo a las necesidades, limitaciones y habilidades de sus ciudadanos. Para entender cómo se ha afianzado esta “ciudad de pocos minutos popular”, es crucial examinar al menos tres líneas causales: (1) la trayectoria histórica de la urbanización informal; (2) el rol de la política urbana y las reacciones de las instituciones; y (3) las tácticas sociales y económicas que han surgido desde la base.

3.1 Evolución histórica de la urbanización informal

La expansión urbana en Bolivia, especialmente desde los años 1960, ha estado profundamente marcada por procesos de autoconstrucción y ocupación informal del suelo. La migración campo-ciudad, intensificada tras la Revolución Nacional de 1952, generó un crecimiento urbano acelerado, sin que las instituciones estatales pudieran (o quisieran) responder con infraestructura y vivienda planificada. En ciudades como El Alto, por ejemplo, la mayor parte del tejido urbano fue creado a través de parcelaciones informales, impulsadas por juntas vecinales y sindicatos agrarios que distribuyeron tierra sin mediación estatal.

Este patrón se repitió en Cercado (Cochabamba), Nuestra Señora de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, con particularidades propias. En Cercado (Cochabam-

ba), el proceso de urbanización fue impulsado por loteamientos periurbanos promovidos por actores privados, frecuentemente sin servicios ni aprobación municipal. En Santa Cruz de la Sierra, la expansión hacia la periferia oriental reprodujo una ciudad de anillos crecientes, donde los asentamientos informales se combinaron con grandes emprendimientos de urbanización privada. Esta trayectoria histórica consolidó un modelo urbano caracterizado por la informalidad funcional, donde la proximidad emerge como resultado de la necesidad, y no del diseño.

3.2 Políticas urbanas e institucionalidad flexible

El debilitamiento de los instrumentos de planificación urbana, especialmente tras las reformas de descentralización y la adopción de planes territoriales integrales que diluyeron la especificidad urbana, dejó a muchas ciudades sin marcos normativos actualizados. Esto generó una institucionalidad permisiva, donde la regulación se aplica con debilidad o de forma selectiva, permitiendo la proliferación de actividades informales y usos mixtos del suelo.

En Nuestra Señora de La Paz, por ejemplo, la Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos (LUSU) y el Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA) reconocen usos mixtos y flexibilizan la zonificación, mientras que en Cercado (Cochabamba) y Santa Cruz de la Sierra se observa una tolerancia de facto al uso comercial de zonas residenciales. Este marco ha facilitado la emergencia de centralidades barriales autogestionadas, donde conviven vivienda, comercio, servicios y equipamientos informales. Además, los procesos de regularización de asentamientos (como los impulsados por la Ley 247 y su modificatoria Ley 803) han legitimado territorialmente la informalidad, sin necesariamente formalizar los servicios ni consolidar políticas integrales.

3.3 Agencia popular y estrategias de proximidad

Las comunidades urbanas han desarrollado mecanismos prácticos para suprir la ausencia del Estado. Desde la creación de ferias itinerantes, la apertura de negocios y servicios barriales, las asociaciones de transporte popular, hasta las redes de abastecimiento domiciliario, las organizaciones vecinales han estructurado sistemas paralelos de provisión y movilidad. Estas formas de agencia popular no solo han garantizado acceso a bienes y servicios, sino que han dado lugar a territorios urbanos funcionalmente autosuficientes, muchas veces más eficaces que los modelos planificados.

Por ejemplo, los sistemas de transporte informal permiten conectar periferias con centralidades sin necesidad de grandes inversiones públicas, a costa de informalidad laboral y desregulación. Del mismo modo, mercados barriales informales surgen donde no existen supermercados o redes formales de abastecimiento. En

el plano del cuidado, grupos de mujeres organizan redes informales de apoyo mutuo, guarderías comunitarias y servicios de salud popular, consolidando nodos funcionales de proximidad que sostienen la vida urbana.

Estas prácticas no solo responden a carencias, sino que también expresan una racionalidad propia: optimizar tiempos, reducir desplazamientos, minimizar costos y generar autonomía territorial. En ese sentido, los logros en materia de proximidad urbana no deben verse como “soluciones de emergencia”, sino como formas estructuradas de organización socioespacial que revelan una planificación desde abajo.

3.4 Innovaciones y recursos clave

A pesar de operar en condiciones de escasez, estas formas de aquello que llamaremos “urbanismo informal” han desarrollado mecanismos innovadores de organización. El uso de tecnologías digitales, como las redes barriales o sectoriales a través de plataformas de comunicación como WhatsApp u otros, la comunicación por redes sociales para coordinar servicios y la generación de redes colaborativas para temas específicos ha permitido visibilizar esta red de proximidad. Además, en los últimos años se ha observado una creciente articulación entre universidades, ONGs, gobiernos locales y comunidades, para co-crear instrumentos de gestión urbana sensibles a estas lógicas emergentes, destaca, por ejemplo, la iniciativa Llajta Rutas Metropolitana, aplicación pensada para orientación del transporte popular, siguiendo una lógica de ciudad inteligente basada en los servicios existentes.

Los recursos clave que han impulsado estos logros incluyen: (1) el capital social de los barrios; (2) el conocimiento territorial práctico acumulado por líderes barriales; (3) la flexibilidad institucional que tolera la informalidad sin reprimirla sistemáticamente; y (4) la resiliencia cultural que convierte la precariedad en posibilidad organizativa.

En suma, la ciudad de 5 minutos popular en Bolivia se ha construido sobre la base de trayectorias históricas de autogestión, una institucionalidad ambigua, y una densa red de agencia popular que transforma la informalidad en proximidad funcional. Reconocer estos factores es fundamental para avanzar hacia modelos urbanos más acordes con la realidad boliviana, que no solo toleren la informalidad, sino que la integren y a la vez equilibren sus impactos con el interés colectivo, como parte de una agenda urbana boliviana real.

4. Desafíos y riesgos a futuro

El reconocimiento de la ciudad de pocos minutos en su versión informal-popular en Bolivia no debe llevarnos a una romantización de la informalidad o a la des-

atención de los múltiples riesgos que enfrenta la sostenibilidad. Existen amenazas internas y externas que podrían comprometer la consolidación de estas lógicas urbanas alternativas, así como barreras estructurales que limitan su potencial como estrategia de desarrollo urbano justo e inclusivo.

4.1 Amenazas internas y externas

Uno de los principales riesgos internos es la creciente presión inmobiliaria sobre los suelos donde se ha desarrollado esta proximidad informal. La valorización del suelo, en especial en barrios periféricos que han consolidado centralidades funcionales, puede desencadenar procesos de gentrificación o desplazamiento. En Nuestra Señora de La Paz, por ejemplo, ya se han identificado transformaciones funcionales en zonas donde la actividad comercial informal ha dinamizado el mercado de suelo, generando tensiones entre habitantes históricos y nuevos inversores. En Cercado (Cochabamba) y Santa Cruz de la Sierra, este proceso está asociado a la especulación y al "engorde" de lotes.

A nivel externo, el riesgo más relevante proviene de modelos de desarrollo urbano que buscan imponer lógicas normativas o tecnocráticas que históricamente poco han funcionado, sin considerar las prácticas emergentes. La aplicación de instrumentos de renovación urbana, sin mediaciones sociales, puede invisibilizar o desarticular los sistemas de proximidad informal. Además, los procesos de digitalización de la gestión urbana, si no se implementan de forma inclusiva, pueden excluir a los actores informales del acceso a servicios, licencias o registros de actividad económica.

4.2 Barreras estructurales

Las ciudades bolivianas enfrentan también una serie de barreras estructurales que limitan la sostenibilidad de estos fenómenos. Entre ellas destaca la debilidad institucional para gestionar territorios complejos y la fragmentación de competencias entre niveles de gobierno. Los gobiernos municipales, en muchos casos, carecen de capacidades técnicas, financieras e institucionales para implementar una planificación urbana sensible a las lógicas de proximidad e informalidad funcional.

Otro obstáculo es el sistema normativo desactualizado o restrictivo. A pesar de los avances hacia el reconocimiento de usos mixtos del suelo, muchas normas siguen regulando desde una lógica de zonificación segregativa, que no se ajusta a la realidad de las ciudades contemporáneas. Esto genera contradicciones entre la norma y la práctica, dificultando la formalización progresiva de las actividades y afectando la seguridad jurídica de los emprendedores.

Desde un punto de vista económico, la alta dependencia de la economía informal, si bien ha permitido sostener formas de accesibilidad funcional, también

implica precariedad, falta de protección social y vulnerabilidad frente a crisis macroeconómicas. Sin una transición cuidadosa hacia formas de formalidad adaptativa, estos logros podrían revertirse ante choques externos.

4.3 Consideraciones para el modelo de ciudad de 15 Minutos

La aplicación del modelo de ciudad de 15 Minutos en contextos urbanos de América Latina, como Bolivia, requiere la evaluación de elementos locales específicos. Si bien la proximidad física a infraestructuras urbanas es un componente clave, esta no siempre se traduce en un uso efectivo de los servicios disponibles. Por ejemplo, en el caso de la educación, aunque un centro educativo pueda encontrarse a menos de 15 minutos a pie o en bicicleta, las familias podrían optar por centros más distantes debido a percepciones o realidades relacionadas con la calidad educativa. Esto sugiere que una mejora integral en la calidad de los servicios, más allá de la ubicación, podría reducir los tiempos reales de viaje entre origen y destino.

Asimismo, el diseño de la red de transporte urbano juega un rol crucial. Una red diversa y distribuida que ofrezca acceso a múltiples zonas, sin la presencia fija de paradas, puede mejorar la cobertura y la percepción de proximidad. Sin embargo, este tipo de configuración también implica una disyuntiva entre aumentar los tiempos de viaje y generar mayor congestión si no se planifica adecuadamente. Por tanto, para avanzar hacia una ciudad sostenible, es necesario equilibrar proximidad, calidad de servicios y eficiencia en la movilidad, integrando estos elementos en la formulación de políticas urbanas.

4.4 Evaluación de la capacidad de sostenimiento

Para que la ciudad de 5 minutos informal pueda proyectarse hacia el futuro como una alternativa válida y sostenible, Bolivia necesita fortalecer su capacidad institucional, generar instrumentos de planificación intermedios (entre lo formal y lo emergente) y consolidar sistemas de gobernanza participativa que integren a los actores populares en la toma de decisiones urbanas.

Esto implica también revisar los marcos de financiamiento urbano. La participación en las plusvalías urbanas, los fondos de inversión barrial o las alianzas público-populares podrían ser instrumentos eficaces para canalizar recursos hacia el fortalecimiento de las centralidades. Asimismo, se requiere una política de datos urbanos que visibilice la ciudad y todos sus componentes formales e informales y permita planificar con base en evidencia.

Finalmente, la sostenibilidad de estos logros depende de un cambio en la mirada: pasar de ver la informalidad como un problema a tratar, a reconocerla como una

forma de organización urbana con racionalidad propia, que puede y debe ser integrada en la construcción de un modelo urbano más justo e inclusivo.

5. Consideraciones finales

La experiencia boliviana en torno a una ciudad de 15 minutos construida desde la informalidad ofrece valiosas lecciones para la teoría y la práctica urbanística contemporánea. Este modelo emergente, aunque no deliberadamente planificado, ha logrado configurar formas de proximidad funcional que permiten a la población vivir, trabajar y abastecerse dentro de sus propios entornos urbanos. La clave ha estado en la agencia popular y los emprendimientos, la flexibilidad normativa y la resignificación de los espacios urbanos por fuera de los canales formales.

A partir del análisis desarrollado en este capítulo, se pueden proponer algunas recomendaciones para consolidar, expandir y equilibrar estos logros bajo la premisa del interés colectivo sobre el particular:

- Primero, es urgente fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para reconocer, gestionar y potenciar las formas que adopta el urbanismo informal y popular existente. Esto incluye actualizar los marcos normativos para que reflejen la realidad urbana mixta, promover planes que partan de lo que ya existe y fomentar formas de formalización progresiva que no impongan lógicas excluyentes.
- Segundo, es necesario desarrollar instrumentos de financiación urbana redistributiva. La participación en plusvalías generadas por la consolidación de barrios y la inversión pública, así como fondos público-populares de inversión barrial, permitirían invertir en equipamiento, movilidad y servicios donde ya existen densidades funcionales. La inversión pública debe acompañar y no desplazar lo construido desde abajo.
- Tercero, urge una política de datos urbanos integrales. Iniciativas como Ciudadata demuestran que es posible cartografiar y comprender la ciudad informal y formal, visibilizando lo que suele permanecer invisible en las estadísticas tradicionales. Estos datos deben alimentar los sistemas de planificación urbana y permitir decisiones basadas en evidencia, con enfoque territorial.
- Cuarto, la participación ciudadana debe ser un principio estructurante. Las poblaciones de los barrios no pueden ser consideradas objetos de intervención, sino sujetos activos de la planificación. Esto implica construir espacios de gobernanza urbana compartida, donde las decisiones sobre el futuro de la ciudad se tomen con y desde las comunidades.

En cuanto a los actores clave, el Estado debe asumir un rol facilitador y regulador, evitando tanto la omisión como la imposición. La sociedad civil y los sectores ur-

banos deben continuar visibilizando las prácticas de proximidad, defendiendo el derecho a la ciudad y aportando conocimiento desde la base. El sector privado puede colaborar a través de esquemas de responsabilidad compartida, evitando la captura especulativa de los beneficios urbanos. Finalmente, la academia tiene el desafío de producir conocimiento situado, que supere las dicotomías formal/informal, legal/illegal, planificado/emergente.

Bolivia tiene la oportunidad de posicionarse como un referente internacional en la construcción de ciudades de proximidad desde la resiliencia urbana popular. En el marco del Bicentenario, reconocer y potenciar esta experiencia no solo permitirá avanzar hacia ciudades más justas, sino también contribuir a una agenda global de un urbanismo inclusivo, donde el Sur también produce teoría, práctica y futuro urbano.

6. Referencias

Allam, Z., Bibri, S. E., Chabaud, D., & Moreno, C. (2022). The '15-Minute City' concept can shape a net-zero urban future. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 126. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01145-0>

Cabrera, J. E. (2021). La financiación de la urbanización en Cochabamba... En A. Pérez & B. Gómez (Eds.), *El suelo en la Nueva Agenda Urbana...* (pp. 367-389). El Colegio Mexiquense A.C.

Espinosa, A. & Fort, R. (2020). Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú. GRADE; ADI. https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/Espinoza-Fort_GRADEADI_expansionurbana.pdf

Méndez, L. A., Cabrera, J. E., Gantier, L., & Gamarra, S. (2024). Paratránsito y accesibilidad: más allá de la movilidad urbana en el área metropolitana de Cochabamba. *Ensayo: Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorio*, (4), 133–151. <https://doi.org/10.18800/ensayo.202404.007>

Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the "15-Minute City": Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. *Smart Cities*, 4(1), 93–111. <https://doi.org/10.3390/smartcities4010006>

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, & ONU-Habitat. (2024). Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. <https://onu-habitat.org/index.php/politica-nacional-de-desarrollo-integral-de-las-ciudades-en-bolivia>

RECORD MUNDIAL: HIGHLINE DE MAYOR ELEVACIÓN (MUJER), CON ARNÉS (VERIFICADO POR ISA)



DESCRIPCIÓN: Miriam Campoleoni, de nacionalidad italiana, hizo highline caminando a 5.150 m de altura en el lago congelado Chachacomani en la cordillera Real. El highline era de 50 metros de largo y estaba a 20 metros encima del glaciar. Fue monitoreado por: International Slackline Association (ISA).

UBICACIÓN: Guanay

OTORGADO POR: Guinness World Records & International Slackline Association

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 31/08/2021



PREMIO MUNDIAL DE POESÍA: PILAR PEDRAZA Y VERÓNICA ORMACHEA

DESCRIPCIÓN: Pilar Pedraza es la primera mujer en recibir un premio internacional de poesía "Ciudad de Cartago" en el marco del VII Encuentro Internacional Tunecino-Hispanoamericano de Intelectuales y Escritores. Verónica Ormachea obtuvo el premio Internacional del Libro Latino en Estados Unidos, por su obra "Neruda y su laberinto pasional". Fue premiada en la categoría de mejor Novela-ficción Histórica en Español en la Book Expo America. .

UBICACIÓN: Pedraza y Ormachea son bolivianas.

OTORGADO POR:
Book Expo America.

PUESTO LOGRADO: Premio Mundial de Poesía

FECHA: 29/10/2024

SITIO CON MÁS HUELLAS DE DINOSAURIO EN EL MUNDO

DESCRIPCIÓN: Lugar que concentra más de 5.000 huellas de dinosaurio que datan de hace unos 68 millones de años

UBICACIÓN: Sucre, Bolivia

RECORD MUNDIAL: VINOS Y SINGANIS DE BOLIVIA

DESCRIPCIÓN: En Bolivia han ganado 18 medallas entre vinos y singanis en el concurso internacional de Vinos, Vermuts y Espirituosos Bacchus 2024. Se llevó a cabo el 15 al 19 de abril, en Madrid, España.

UBICACIÓN: Uriondo, Tarija. Samaipata, Santa Cruz. Sipe Sipe, Cochabamba. Camargo, Chuquisaca. Vinto, Cochabamba.

OTORGADO POR: Concurso Internacional Bacchus, Madrid

PUESTO LOGRADO: Premios (Oro, Plata, Bronce)

FECHA: 26/04/2024

CAPÍTULO 08

POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA EN LA ÉPOCA DEMOCRÁTICA (1982-PRESENTE): LOGROS HISTÓRICOS Y DESAFÍOS PRESENTES

Oscar Gracia, Rebeca Huarachi y Jazmín Nuñez

- Desde el retorno a la democracia en 1982, Bolivia ha transitado por diversas etapas en su política exterior, adaptándose a los cambios políticos internos y a las transformaciones del contexto internacional.
- A lo largo de las últimas décadas, el país ha procurado definir una política exterior propia que combine soberanía nacional, integración regional y participación activa en organismos multilaterales.
- Bolivia ha alcanzado reconocimiento en temas globales como los derechos humanos, el acceso al agua, la protección ambiental y la defensa del patrimonio cultural, fortaleciendo su presencia en foros internacionales.
- La política exterior boliviana enfrenta el reto de mantener coherencia entre sus principios y sus acciones, así como de equilibrar la cooperación internacional con la defensa de sus intereses nacionales.
- El fortalecimiento institucional, la continuidad de una diplomacia profesional y el impulso a la cooperación regional aparecen como claves para consolidar una política exterior estable, sostenible y orientada al desarrollo.

1. Introducción

El presente capítulo se orienta a ofrecer una ponderación equilibrada de la evolución histórica y de algunas de las expresiones más significativas de la política exterior y la diplomacia boliviana en el periodo democrático (1982 a la actualidad). Para tal propósito, se retoma la distinción conceptual propuesta por Ceppi (2022, p. 33), quien, citando a Vilariño Pintos, sugiere comprender la política exterior como el aspecto sustantivo del quehacer estatal en su relación con el entorno internacional, mientras que la diplomacia correspondería a la dimensión adjetiva de tal quehacer. En ese sentido, podría afirmarse que la política exterior responde al qué de la acción internacional del Estado —es decir, a la definición y defensa de sus objetivos e intereses—, en tanto que la diplomacia materializa el cómo de su desarrollo.

Dentro de tal horizonte de comprensión, la interpretación del texto se desarrolla atendiendo a la relación estructural existente entre la política exterior de Bolivia (en sus aspectos de contenido y forma) y las transformaciones propias del entorno regional y global que delimitan el marco de posibilidades y limitaciones del Estado. Por supuesto, tal lectura no puede dejar de lado la valoración de los componentes esenciales que, en términos de la política interna y de los procesos sociales domésticos, caracterizaron la experiencia de nuestro país en el curso de su historia democrática reciente. Como se intenta poner de relieve, existe un pulso peculiar que, para el caso boliviano, surge del tensionamiento y la armonización dinámica entre el juego de la política nacional y las demandas estructurales que el panorama global impone a la singular circunstancia geográfica e histórica del país.

En el marco de la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, la temática aquí abordada adquiere una significación particular, pues permite reconocer los logros y deficiencias más relevantes del protagonismo del país en los foros internacionales. Tal ejercicio supone, de tal manera, ponderar aquellos aspectos que han contribuido a la configuración de una identidad distintiva en materia de política exterior y, por otro, señalar las limitaciones que, en diferentes momentos, condujeron al repliegue o al debilitamiento de la proyección internacional del país.

Por lo demás, para comprender el trasfondo de estas dinámicas resulta necesario situarlas en una trayectoria histórica más amplia, en la que pueda advertirse que, desde sus inicios republicanos, Bolivia ha sostenido una autoperccepción marcada por las complejidades de su geografía andina, por su profunda dependencia económica y por los diferentes avatares e infortunios de su historia. Tal visión se conjuga, por ejemplo, en las narrativas sobre nuestra mediterraneidad y sobre las “fatalidades” que ella habría traído a la historia posterior del país. Al margen de esta tenencia, sin embargo, ha existido también una tradición de pensamiento que —representada por figuras como Franz Tamayo o Luis Fernando Guachalla— interpreta las “limitaciones” nacionales como puntos de partida para el despliegue singular de un desarrollo posible y deseable.

Es en sintonía con esta última línea de interpretación que, en las siguientes páginas, se analizan los principales alcances de las actuaciones internacionales del Estado boliviano, incluyendo tanto el periodo de la llamada “Diplomacia de los Pueblos” como algunas experiencias diplomáticas previas. El objetivo es ponderar los desarrollos políticos que, a partir de una posición nacional propia, impulsaron transformaciones y propuestas innovadoras en las instituciones globales, pero también advertir los defectos, riesgos y prácticas negativas que han limitado su sostenibilidad. La reflexión busca así reconocer cómo ciertos impulsos diplomáticos definieron un sello singular en la imagen boliviana internacional y

cúales son las condiciones que pueden favorecer su continuidad o precipitar un retroceso por la prolongación de ciertos errores.

2. Bolivia en el marco de la globalización: fuerzas y condiciones determinantes de su política exterior

El año 1982 marcó la apertura democrática institucional en la región y el país. Luego de casi dos décadas de gobiernos militares con brevísimos intervalos de relativa libertad política, Bolivia empezaba su andar por la compleja senda de la democracia liberal representativa. Esta auspiciosa situación, sin embargo, se vio enmarcada por importantes condicionamientos internacionales. En el horizonte de la Guerra Fría, el orden liberal occidental iniciado en Bretton Woods (1944) bajo la hegemonía norteamericana había vivido, a partir de la segunda mitad de los años 70s, una suerte de “contra-revolución neoliberal” que transformó los horizontes del pensamiento económico y político (Arrighi, 2010). Esto se tradujo, para la región, en la reconfiguración de su relación con Estados Unidos y en la renovada presión ejercida por las instituciones financieras internacionales (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) para la adopción de reformas estructurales orientadas por los nuevos lineamientos neoliberales. En Bolivia, como es sabido, esto derivó en la implementación, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), de la llamada Nueva Política Económica, que condujo al país hacia una creciente sintonía con las directrices fundamentales del espíritu económico de la época (Ceppi, 2014, p. 128).

El efecto de esta situación sobre la política exterior del país fue múltiple. En primera instancia, el paradigma neoliberal marcaba para el país una forma específica de inserción económica internacional que fue relativamente homogénea para gran parte de las naciones de la región. En lo que respecta a sus condiciones concretas de relacionamiento con el mundo, dicha modalidad de conexión suponía la liberalización comercial general (con la eliminación progresiva de barreras arancelarias y no arancelarias), la abolición de frenos a la inversión extranjera directa y la unificación de la tasa de cambio a niveles competitivos (Almanza, 2015, p. 59). En tal sentido, el país modernizaba su estructura institucional reduciendo el papel del Estado en la gestión económica y favoreciendo el flujo de capitales desde y hacia el extranjero.

Por otra parte —y debido a las duras condiciones que definieron sus pasos iniciales en la vida democrática formal entre 1982 y 1984— el país se vio obligado a concentrar gran parte de sus esfuerzos en, por un lado, desarrollar un sistema que permita cierta estabilidad política y, por otro, generar una base macroeconómica capaz de impulsar el desarrollo y la productividad nacional (Aranibar, 2002, pp. 159-160). En este sentido, la doble crisis de la deuda externa y de la hiperinflación registradas en la primera mitad de los años 80s obligaron a los gobiernos nacionales a depender importantemente de la ayuda externa, de los acuerdos

con el Fondo Monetario Internacional y de los convenios de financiamiento y negociación de la deuda con instituciones como el Club de París (Almanza, 2015, p. 62). Así, el deseo de canalizar recursos económicos desde el extranjero para permitir la estabilización nacional llevó a un acatamiento irrestricto de los designios del llamado Consenso de Washington, marcado por el predominio norteamericano (Kafka, 1995; Ceppi, 2014).

Finalmente, ya en los años 90s, esta relación de fuerte alineamiento con las directivas estipuladas por Estados Unidos se verá reforzada por un tema crucial: la lucha contra el narcotráfico. El país del norte empleó la estrategia de certificación (o descertificación) de los esfuerzos de cooperación de los países latinoamericanos para lograr presionar a la región en su lucha contra la producción de drogas. Dicha combinación de dependencia, condicionamiento económico y rigidez en la política antinarcóticos generó, en términos de política exterior, la necesidad imperativa de una sujeción al mandato internacional estadounidense. Como Ceppi expresa:

La instauración de los programas de ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y el “temor” a ser descertificado por Estados Unidos, generaron que la política exterior boliviana de los años 90s e inicios del siglo XXI estuviera fuertemente influenciada por el factor económico y denotara una escasa diversificación de vinculaciones (2014, p. 129).

Ahora bien, para alcanzar una visión más comprensiva de este periodo, conviene señalar que los gobiernos neoliberales no se limitaron a reproducir mecánicamente las directrices del Consenso de Washington. Si bien las restricciones externas fueron determinantes, dichas gestiones también desplegaron iniciativas propias que ampliaron el margen de acción diplomática y contribuyeron a dotar de una mayor complejidad a la política exterior boliviana. Esto se dio, como no podía ser de otra manera, mano a mano con los distintos cambios en la situación económica del país y la rítmica que estos imponían sobre el relacionamiento externo del Estado.

Posteriormente al giro neoliberal propio del gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989), las gestiones gubernamentales de Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997) y Hugo Banzer (1997-2001) continuaron la ruta marcada por su predecesor en términos generales. Por un lado, la inserción internacional de Bolivia estuvo signada por un perfil de apertura comercial y por el deseo de reducir la dependencia primario-exportadora del país y, por otro, dicha relación con el entorno global tuvo como centro de gravedad al tema de la lucha contra el narcotráfico, que siguió siendo una de las marcas fundamentales del ritmo político del país.

La activa participación en procesos multilaterales y en esquemas de integración regional constituyó un sello distintivo de este tiempo. La adhesión plena de Bolivia a la Comunidad Andina de Naciones en 1993 y la firma del Acuerdo de Complementación Económica con el MERCOSUR en 1996 no deben leerse únicamente como gestos de apertura comercial, sino también como intentos de repositionar al país en la geografía política sudamericana. Bajo esta perspectiva, la tradicional noción de “centralidad geopolítica” fue reinterpretada como argumento legitimador de una diplomacia que buscaba proyectar a Bolivia como un país bisagra con acceso bioceánico (Almanza, 2015, p. 63; Araníbar, 2002, p. 163). Por otra parte, la adecuación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la posterior incorporación a la Organización Mundial de Comercio (OMC) representaron avances significativos en términos de modernización institucional. No se trataba únicamente de cumplir con las exigencias del nuevo entorno del comercio internacional, sino de consolidar un marco de seguridad jurídica para las inversiones y de generar condiciones de mayor previabilidad en el intercambio global. Estos procesos reflejaron el esfuerzo de los gobiernos de los años noventa por presentar a Bolivia como un socio confiable en el escenario económico internacional (Mesa, 2007, p. 573; Ceppi, 2014, p. 129). La estrategia de inserción internacional de estos años se apoyó también en la captación de inversión extranjera directa como mecanismo fundamental para sostener el crecimiento económico. La promulgación de la Ley de Inversiones de 1990, que otorgaba a los capitales externos las mismas garantías que a la inversión nacional, constituyó la primera señal de apertura formal al libre flujo de capitales. Sin embargo, la llegada efectiva de recursos se consolidó únicamente cuando el Estado anunció su retiro de sectores estratégicos y dio paso al proceso de capitalización de 1994, complementado por la Ley de Hidrocarburos de 1996. Fue en este marco que la IED adquirió un papel decisivo en la economía boliviana, estrechamente vinculada tanto a la privatización de empresas públicas como a la ampliación de la frontera energética y exportadora del país (Chávez y Muriel, 2007).

Finalmente, la atracción de cooperación internacional adquirió una relevancia notable. Entre 1987 y 1992, Bolivia canalizó más de 5.000 millones de dólares en asistencia externa, cifra que constituía un porcentaje elevado de su PIB y que fue decisiva para sostener la transición democrática, modernizar la administración pública y financiar proyectos de infraestructura y salud (De la Cruz, 2011, p. 14). Este flujo de recursos, gestionado por una diplomacia activa en los foros internacionales, muestra que la política exterior neoliberal no puede comprenderse únicamente bajo la lógica de la subordinación, sino también como espacio de negociación estratégica.

En lo referido al eje del narcotráfico y de la hoja de coca, Bolivia desplegó un repertorio ambivalente de acciones e imágenes. Durante la gestión de Jaime Paz Zamora se impulsó la consigna de la “diplomacia de la coca”, orientada a sos-

tener simultáneamente el compromiso del país con la lucha contra el narcotráfico —en sintonía con la agenda norteamericana— y a rescatar el consumo tradicional de la hoja como patrimonio cultural legítimo de la sociedad boliviana (Paz Zamora, 1993, p. 171). Este esfuerzo por diferenciar los usos culturales de la coca respecto de su vinculación con el circuito ilegal supuso una tentativa de dotar a la diplomacia nacional de un lenguaje propio, que buscaba equilibrar la presión internacional con la afirmación de prácticas identitarias de larga data.

Sin embargo, lo que terminó por consolidarse en la práctica política de los años noventa fue una lógica crecientemente subordinada a los lineamientos de Washington. La política de certificación aplicada por Estados Unidos condicionó la cooperación bilateral y condujo a una progresiva radicalización de los programas de erradicación de la coca excedentaria. Este proceso alcanzó su punto más extremo bajo el gobierno de Hugo Banzer, cuando la estrategia de erradicación forzada se convirtió en uno de los principales vectores de conflictividad social y política, especialmente en el Chapare, generando una tensión estructural entre la búsqueda de legitimidad internacional y la resistencia interna de los sectores cocaleros (Araníbar, 2002, pp. 167-168; Ceppi, 2014, p. 129). En este marco, Bolivia se consolidó como un interlocutor estratégico en los foros multilaterales de seguridad hemisférica, pero lo hizo al costo de profundizar las fracturas sociales y abrir un campo de disputas que se proyectarían con fuerza en los primeros años del siglo XXI.

3. La “Diplomacia de los Pueblos”: constitución, significado, logros fundamentales y limitaciones

Dos claves simbólicas de la política exterior boliviana aquí desarrolladas muestran cómo la praxis diplomática del país fue conformando, de manera paulatina, un perfil propio en el marco de su trayectoria democrática y de su interacción con el contexto neoliberal internacional de los años noventa. Dichos elementos adquirirían una inflexión particular en el siglo XXI, cuando, tras un periodo inicial marcado por la crisis estructural del sistema político, Bolivia impulsó una reconfiguración de sus relaciones internacionales. Este proceso desafió ciertos moldes diplomáticos tradicionales, aunque también mantuvo prácticas y tendencias ya existentes, conformando lo que llegaría a denominarse posteriormente como “Diplomacia de los Pueblos”.

Es importante entender que la morfología de esta singular perspectiva de política exterior surge, en sus dimensiones sociales e ideológicas, de las consecuencias socio-económicas del modelo neoliberal aplicado en el país durante los 90s. Ya a mediados de esta década partidos neo-populistas como CONDEPA o UCS empezaron a apelar de manera creciente a sectores sociales desfavorecidos por las medidas de ajuste estructural, desarrollando una retórica crítica del modelo neoliberal planteado como “neo-colonial, anti-nacional, dependiente y oligár-

quico” (Mayorga, 2003; Romero Ballivián, 2023). Tales discursos constituyen un antecedente importante para la forma en que los nuevos actores políticos del siglo XXI, en específico el Movimiento Indígena Pachakuti o el MAS, extendieron, sobre líneas parecidas, su convocatoria a una base social inter-clasista incluyente de los sectores indígenas y campesinos del país.

En estos dos últimos casos, además, desempeñó también un papel catalizador la oposición a lo que se percibía como una injerencia externa implícita en el neoliberalismo. La trayectoria del MAS y de su líder Evo Morales, en este sentido, se encuentra ligada a la movilización cocalera y a su resistencia frente a las políticas de erradicación de coca excedentaria promovidas en la década de los 90s. Esta experiencia permitió articular, de forma discursiva, las demandas de diversos sectores considerados “perdedores” del modelo económico (Gratius y Rivero, 2018). La Diplomacia de los Pueblos se definió, así, como un consenso político de corte soberanista frente a intervenciones foráneas, nacionalista ante los organismos financieros internacionales, indigenista en su defensa cultural de la hoja de coca y profundamente crítico del liberalismo en su visión política y económica. Este mismo perfil, sin embargo, generará un conjunto de tensiones: la confrontación discursiva con ciertos actores internacionales redujo los márgenes de negociación en ámbitos clave y la priorización de afinidades ideológicas limitó la diversificación estratégica de alianzas, afectando la capacidad de adaptación a cambios en el contexto regional y global.

Las características centrales del nuevo paradigma de política exterior se consolidaron en las primeras gestiones del MAS, dentro de un proyecto más amplio que incluía nociones como “descolonización”, “interculturalidad” y “recuperación de saberes ancestrales” (Ceppi, 2014; 2022). En contraposición a las formas políticas anteriores, esta concepción se expresó en términos del “Vivir bien”, del equilibrio entre ser humano y naturaleza, de la armonía e integración interestatal y de la justicia social internacional (Narváez, 2022). Teóricamente, se buscaba que el Estado dejara de ser el único actor, promoviendo la participación de movimientos sociales y pueblos originarios. No obstante, en la práctica, esta apertura estuvo condicionada por la centralización de las decisiones en el Poder Ejecutivo, lo que redujo el margen de incidencia real de los actores sociales y, en ocasiones, generó una participación más simbólica que efectiva. En todo caso, algunas de las mayores fortalezas de este modelo se hallaron en la visibilización de agendas alternativas en foros multilaterales y, algunas de sus principales limitaciones, en el riesgo de aislamiento internacional por una excesiva polarización ideológica. De cualquier forma, cabe remarcar que el ámbito donde las posiciones internacionales de Bolivia alcanzaron mayor visibilidad fue, sin duda, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el siguiente cuadro se presenta una breve cronología de actuaciones diplomáticas que configuraron un signo propio de política exterior dentro de este organismo intergubernamental:

Figura 1: Actuaciones internacionales más importantes de Bolivia en la ONU



Fuente parcial: Narváez 2022

Como puede verse, uno de los primeros hitos diplomáticos en este periodo fue el acompañamiento de una iniciativa peruana relacionada con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicha posición se halló vinculada a la convergencia entre la defensa del patrimonio cultural indígena andino y una postura crítica hacia los procesos y condiciones representados por el pasado neoliberal reciente de la región.

Bolivia copatrocinó dicho documento, el cual fue aprobado por 143 votos a favor y cuatro votos en contra de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos [Naciones Unidas, 2007, pp. 20-21]. La adopción de esta declaración constituye un avance en el reconocimiento universal de los derechos —tanto individuales como colectivos— de las comunidades originarias que habitan el planeta. El 7 de noviembre de 2007, Evo Morales elevó a rango de Ley de la República —Nº 3.760— los 46 artículos que conforman dicha declaración, estableciendo así un precedente en la región (Ceppi, 2014, p. 132).

En consonancia con dicho horizonte de sentido, un segundo acto relevante del quehacer político internacional del país en este tiempo fue la propuesta oficial presentada ante la Asamblea General de la ONU que condujo a una resolución (A/RES/63/278) estableciendo el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra (Naciones Unidas, 2009). En tal resolución se hace manifiesta la huella internacional de una política exterior activa en la que ciertos procesos políticos y sociales, enraizados en la historia democrática reciente del país, fueron traducidos en una posición diplomática característica. No obstante, algunos observadores han apuntado también que esta proyección ambiental, aunque significativa en el plano simbólico, no siempre ha estado respaldada por políticas internas coherentes en materia de protección del medio ambiente, siendo el episodio más notable de esta contradicción el conflicto desatado en torno al TIPNIS en 2011.

Siguiendo con este desarrollo, puede señalarse que probablemente el logro más emblemático de la Diplomacia de los Pueblos fue la resolución 64/292 de la

Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial en el año 2010. Esta iniciativa fue presentada y promovida por el gobierno boliviano, con el respaldo de 33 países copatrocinadores y registró 122 votos a favor, 0 en contra y 41 abstenciones (Narváez, 2022). Tal propuesta reflejaba no solo la urgencia de atender una carencia presente en muchas regiones del mundo, sino también una postura contraria a la privatización de recursos naturales esenciales. Dicha convicción se inscribe en la memoria nacional de las crisis políticas que marcaron el inicio del siglo XXI, como la “Guerra del Agua” en Cochabamba en el año 2000 (Almanza, 2015, p. 63).

Ahora bien, otra de las claves más importantes de la política exterior boliviana en las pasadas dos décadas puede considerarse como una suerte de ampliación transformadora de la línea diplomática ya promovida por el gobierno de Paz Zamora: la defensa de la hoja de coca como patrimonio cultural de la nación y su diferenciación respecto del narcotráfico en el contexto de diversos foros multilaterales. La trayectoria del MAS y de Evo Morales como actores sociales surgidos del conflicto entre productores cocaleros y políticas de erradicación promovidas por Estados Unidos, junto con el declive de la hegemonía norteamericana en la región, dieron un sentido nacionalista diferenciado a la nueva retórica diplomática centrada en la oposición frontal al “imperialismo” (Mayorga, 2020, p. 189). Así, la postura internacional de Bolivia se enfocó en el cuestionamiento de la Convención de Estupeficientes de 1961, tratando de promover una “reserva” al artículo que condena la utilización de la hoja de coca por su contenido de alcaloides:

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó el caso a los países que son parte de la Convención, el 10 de enero de 2012, para que evaluaran la solicitud del Estado boliviano de permitir el mascado de la hoja de coca en su territorio. El despliegue diplomático de la administración boliviana logró incorporar esta reserva el 11 de enero de 2013, porque de los 62 países que podían bloquearla y, por ende, impedir la readmisión de Bolivia a la Convención, solo 15 se opusieron (Centro de Noticias ONU, 2013). A través de esta aprobación, Bolivia universalizó el reconocimiento de un recurso que está muy ligado a su historia como país y sociedad (Ceppi, 2014, p. 133).

Finalmente, y en este mismo marco de proyección diplomática que, a través de la revalorización identitaria de ciertas prácticas culturales nacionales, fraguó una proyección singular de Bolivia en el ámbito internacional, en 2013 se alcanzó un hito importante al promover la imagen de la quinua en conexión con la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre y la pobreza. Dentro del periodo 37 de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el país presentó la propuesta para declarar al 2013 como

el Año Internacional de la Quinua. Dicha solicitud, apoyada por el Grupo de Países de América Latina y El Caribe y el G77 + China, fue finalmente aprobada por la Asamblea General mediante la Resolución A/RES/66/221 (Narváez, 2022, pp. 52-53). Este reconocimiento internacional fortaleció la imagen de Bolivia como promotora de productos andinos en el mercado global, pero, a su vez, puso de relieve desafíos internos como la necesidad de garantizar que el incremento de la demanda externa no comprometa la sostenibilidad ambiental ni el acceso de las comunidades productoras de este alimento.



Fuente: Elaboración propia

Para concluir este recorrido resulta pertinente retomar uno de los recursos simbólicos de la política exterior boliviana mencionado con anterioridad: la concepción del país como un centro de integración entre los hemisferios y regiones del Cono Sur. La activa agenda bilateral y multilateral de Bolivia entre 2006 y 2015 respondió, en buena medida, a un propósito de diversificación de los contactos tradicionales que buscó generar interconexiones y sincronías regionales. Esta dinámica significó un cambio importante respecto del alineamiento cerrado con Estados Unidos durante los años noventa. No obstante, tal postura internacional, ciertamente en consonancia con las transformaciones en la estructura de poder global, no resultó exenta de problemas, toda vez que Bolivia amplió sus vínculos con potencias emergentes —especialmente China— pero también con países cuestionados por su sistemática transgresión de los derechos humanos, como Irán. Dicho giro implicó riesgos, como la dependencia creciente de acuerdos con socios de orientación política convergente, lo que redujo el margen de maniobra frente a cambios de ciclo internacional.

En el plano regional, además, se promovió la visión de la Diplomacia de los Pueblos en espacios multilaterales no tradicionales como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En el ALBA, Bolivia encontró un entorno ideológicamente afín para avanzar en agendas sociales, educativas y sanitarias, con resultados positivos en cooperación entre Estados del Sur Global. En el caso de UNASUR, el país asumió un papel relevante como mediador regional y promotor de una agenda

socioambiental, aunque la posterior crisis institucional de este organismo puso en evidencia la fragilidad de los logros alcanzados y la dependencia de estos procesos de la sintonía política entre gobiernos miembros.

Más allá, sin embargo, de estos foros de claro perfil político como el ALBA y UNASUR, se produjo también una intensificación de vínculos en ámbitos más económicos y comerciales. En el primer caso, destaca la participación boliviana en foros como la OEA o la CELAC, que permitieron mantener canales de diálogo con un espectro más amplio de Estados. En el segundo, se consolidaron una serie de relaciones positivas en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), además de reforzarse el vínculo con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (Narváez, 2022, pp. 80 y ss.). En estos últimos casos, la confirmación del ingreso de Bolivia como miembro pleno del MERCOSUR constituyó un hito histórico reciente que refuerza la percepción del país como mediador geopolítico entre el Pacífico y el Atlántico.

4. Riesgos actuales y desafíos para la política exterior del país

Existen, por supuesto, una serie de apremios puntuales que presionan el futuro de la política exterior del país con miras a la construcción de un perfil diplomático propio basado en su historia nacional. El más importante de ellos es el riesgo de que las prácticas y logros desarrollados bajo la llamada Diplomacia de los Pueblos se perciban como la expresión de un proyecto político-partidista y no como parte de un proceso nacional de definición de intereses y de reconfiguración sostenida de las relaciones con el entorno regional y global.

Como se ha señalado, temas como la soberanía nacional frente a las presiones del contexto internacional, el papel simbólico de la hoja de coca y de la lucha contra el narcotráfico, la diversidad étnico-cultural como fuente de praxis política, la centralidad de los recursos naturales y su vínculo con la inserción del país en el mundo, constituyen dimensiones estructurales de la historia boliviana. En ellas se condensan no solo procesos del pasado reciente, sino también rasgos de la vida republicana e incluso de la etapa colonial. Desde esa perspectiva, el posicionamiento en la agenda internacional de símbolos como la Madre Tierra, la coca o la quinua expresan una diplomacia que proyecta elementos centrales de la identidad histórica nacional. El desafío, en este sentido, radica en evitar tanto que estos referentes queden asociados cerradamente a una dinámica político-partidaria como que los mismos se vean reducidos a gestos simbólicos sin traducción efectiva en la realidad.

El sentido profundo de la llamada Diplomacia de los Pueblos puede resumirse en una serie de principios de política exterior que, en teoría, conservan vigencia en la coyuntura actual. Por un lado, este enfoque plantea un posicionamiento autónomo y soberano frente al entorno internacional, basado en la revalorización de

recursos naturales, humanos y culturales, y en la participación de actores sociales diversos en la definición de la proyección internacional. Por otro, se apoya en la diversificación de relaciones con los principales actores del sistema internacional, promoviendo un no-alineamiento activo y estratégico que aspira a fortalecer el rol de la región en el contexto global (Castañeda, 2023; Heine, 2024). Finalmente, mantiene la idea —consolidada desde mediados del siglo XX— de la centralidad geopolítica de Bolivia como punto de articulación e integración regional. No obstante, la permanencia de un enfoque político productivo para este paradigma depende de que estos principios se traduzcan en acciones sostenidas más allá de coyunturas y afinidades ideológicas.

En este marco, emergen varias amenazas que pueden limitar el alcance de la política exterior boliviana. En primer lugar, la subordinación de decisiones estratégicas a intereses políticos o económicos inmediatos puede restringir la participación orgánica de la sociedad civil en el debate sobre los recursos naturales, favoreciendo un patrón de inserción internacional basado en el extractivismo. Unido a ello, el silenciamiento progresivo de demandas legítimas planteadas por sectores indígenas y sociales —como el caso del conflicto del TIPNIS en 2011 (Calla, 2012)— erosiona la legitimidad interna de cualquier proyección internacional del país.

Un segundo desafío se vincula con la diversificación real de las relaciones internacionales y con la coherencia del no-alineamiento activo. Sustituir la dependencia de los años noventa por una vinculación excesiva a nuevos polos globales —como China— podría reproducir las asimetrías que se buscaba superar. Ello resulta especialmente problemático si se considera que, durante la primera década del siglo XXI, la relación comercial de varios países latinoamericanos con el gigante asiático replicó patrones de dependencia primaria-exportadora.

Finalmente, el contexto internacional actual, caracterizado por la transición desde un orden unipolar hacia uno multipolar, supone presiones y una competencia intensa de las potencias globales por ampliar su influencia en América Latina. Esta disputa —visible en el triángulo Estados Unidos–Latinoamérica–China en las últimas dos décadas (Soliz de Stange, 2022)— plantea retos para el papel articulador de Bolivia en los procesos de integración continental, en particular frente a la necesidad de tender puentes entre países con principales socios comerciales distintos. A ello se añade el riesgo de exclusión del país de oportunidades clave de integración física y comercial, como podría suceder si el proyectado Corredor Ferroviario Bioceánico Central, impulsado con financiamiento chino, omitiera el territorio boliviano debido a la compleja coyuntura política y económica nacional.

5. Reflexiones finales

Como se ha destacado, varias de las proyecciones, intereses y objetivos articulados bajo la noción general de la Diplomacia de los Pueblos trascienden coyunturas político-partidarias y se vinculan con condiciones estructurales que, a partir de la historia singular del país, configuran un perfil propio para la política exterior boliviana. En este marco, uno de los principales riesgos actuales es que posiciones internacionales de alto valor estratégico puedan verse subordinadas a las agendas ideológicas de los actores políticos en turno. Ciertamente, parece claro que alcanzar cierta estabilidad en los objetivos y métodos de la política exterior del Estado sigue siendo una tarea pendiente para el sistema político boliviano, especialmente si se pretende construir una proyección internacional coherente y sostenida.

Por otra parte, en los últimos años, la intensificación de la conflictividad social y el agravamiento de la crisis económica han limitado el protagonismo internacional que la Diplomacia de los Pueblos había alcanzado. No solo se ha reducido de forma casi total el número de iniciativas impulsadas por Bolivia en espacios multilaterales, sino que también se ha diluido cualquier signo distintivo de su gestión diplomática. Este retroceso se refleja en el deterioro de la imagen internacional del país. Según los informes 2024 y 2025 del Global Soft Power Index de BrandFinance —que mide el valor de las “marcas” y “reputaciones” nacionales, considerando entre otros aspectos la proyección diplomática— Bolivia ha caído 21 posiciones en dos años (18 en el registro de 2024 y 3 más en el de 2025), ubicándose actualmente en el puesto 103, justo detrás de Senegal y siete lugares por debajo de Venezuela (BrandFinance, 2024; 2025). Tal caída pone de manifiesto la vulnerabilidad de la reputación internacional frente a coyunturas internas y la ausencia de una estrategia de proyección de largo plazo.

En este marco, cabe advertir que la Diplomacia de los Pueblos, si bien introdujo un lenguaje novedoso de legitimación política y un impulso a la participación social en la política exterior, enfrentó también límites considerables. Entre ellos, la dificultad de articular sus postulados con mecanismos técnicos de negociación internacional, la tendencia a privilegiar la dimensión discursiva sobre los resultados concretos y, en ocasiones, la coexistencia de contradicciones entre la afirmación de la soberanía nacional y la dependencia de alianzas coyunturales. Estos elementos evidencian que la propuesta, lejos de constituir una superación definitiva del paradigma neoliberal, se desenvolvió en medio de tensiones que condicionaron tanto su sostenibilidad como su alcance efectivo.

En este sentido, resulta clave reconocer que tanto la marca como la reputación de un país dependen de la percepción de un perfil político y económico general, el cual debería preservar cierta continuidad más allá de los cambios de gobierno. Definir un enfoque estructural para la política exterior, capaz de sostener una

identidad internacional clara y consistente, es un paso necesario para que Bolivia fortalezca su posición en el sistema multilateral. La reflexión presentada en estas páginas apunta precisamente a repensar las bases de ese perfil internacional, tomando como referencia el recorrido diplomático reciente y evaluando cómo los aprendizajes de ese pasado pueden servir para proyectar una política exterior menos vulnerable a vaivenes políticos y más orientada a objetivos de Estado.

Referencias bibliográficas

Almanza, L. (2015). "Las relaciones internacionales de bolivia: ¿un cambio de paradigma en su política externa?" en Anais do I Encontro Internacional de Política Externa Latino-Americana.

En: <https://dspace.unila.edu.br/items/ee94c677-e08d-48da-b8ef-d4cd3e58e9a6>

Araníbar, A. (2016). "Las relaciones internacionales de Bolivia al comienzo del siglo XXI" en Comentario Internacional: Revista Del Centro Andino De Estudios Internacionales, (3), 159–176.

Recuperado a partir de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/article/view/212>

Arrigui, G. (2010). "The world economy and the Cold War, 1970-1990" en The Cambridge History of the Cold War. Volume III. Cambridge. Cambridge University Press. DOI:

<https://doi.org/10.1017/CHOL9780521837217>

Calla, R. (2012). "TIPNIS y Amazonia: Contradicciones en la agenda ecológica de Bolivia" en Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Del Caribe / European Review of Latin American and Caribbean Studies, 92, 77–83. <http://www.jstor.org/stable/23339607>. DOI: 10.18800/debatesensociologia.202201.004

Castañeda, J. (2023). "Latin America and Active Non-Alignment" en C. Fortin, J. Heine, & C. Ominami (Eds.), *Latin American Foreign Policies in the New World Order: The Active Non-Alignment Option* (pp. 133–140). Chapter, Anthem Press. DOI: 10.32992/erlacs.11004

Ceppi, N. (2014). "La política exterior de Bolivia en tiempos de Evo Morales Ayma" en Si Somos Americanos [online]. Vol.14, n.1, pp.125-151. DOI: <https://doi.org/10.4067/S0719-09482014000100007>

Ceppi, N. (2022). "Los rumbos del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia: el diálogo entre política exterior y diplomacia" en Janus.net, e-journal of International Relations. Vol. 12. Nro. 2. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.12.2.3>

Chávez, G., & Muriel, B. (2007). *Bolivia: evolución de perfil económico internacional: 1985–2007*. Río de Janeiro: Funcex.

De la Cruz Prego, F. (2011). Ayuda externa en Bolivia (1985–2003): auge y caída del neoliberalismo. Documentos de trabajo sobre cooperación y desarrollo, 2011(01). Santander: Universidad de Cantabria.

Gratius, S., and Rivero, Á. (2018). "Más allá de la izquierda y la derecha: populismo en Europa y América Latina/Beyond right and left: populism in Europe and Latin America" en *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (119), 35-62. doi:10.24241/rcai.2018.119.2.35.

Heine, J. (2024). "Active Non-alignment and Global Governance: From Latin America to the Global South" en *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 30(2), 214-224. <https://doi.org/10.1163/19426720-03002004>

Kafka, J. (1995). Toma de decisiones y Política Exterior Boliviana. En R. Barrios, *Política Exterior Boliviana* (pp. 31-64). La Paz, Bolivia: UDAPEX, ILDIS.

Mayorga, F. (2003). Neopopulismo y democracia en Bolivia. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 23(1), 99-118. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2003000100007>

Mesa, C. (2007). Historia de Bolivia. La Paz: Gisbert.

Morales, W. (1984). La geopolítica de la política exterior de Bolivia. Chile. Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea.

Narváez, M. (2022). *¿Una política exterior alternativa? El giro de Bolivia con la diplomacia de los pueblos en el período 2005 – 2016*. Tesis presentada al programa de Maestría en Relaciones Internacionales. Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos. Sede Ecuador.

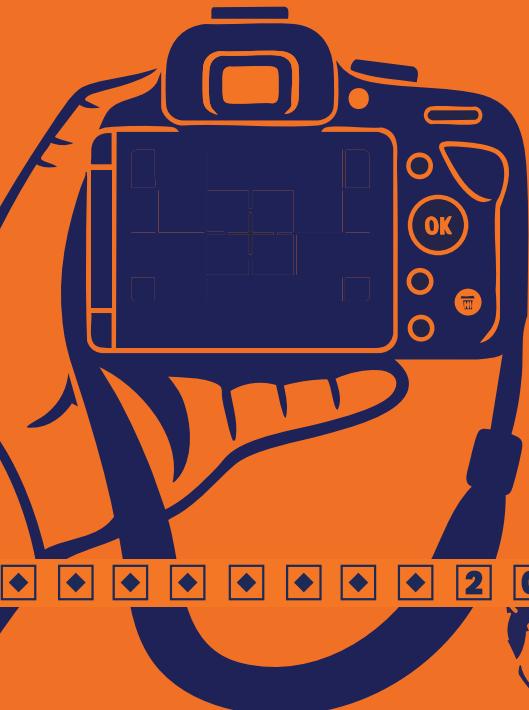
Ostria, A. (1953). *Una obra y un destino, la política internacional de Bolivia después de la Guerra del Chaco*. Imprenta López, Buenos Aires. URL: <http://hdl.handle.net/10644/8481>

Paz Zamora, J. (1993). "La diplomacia de la coca" en Nueva Sociedad, 124, Marzo-Abril.

Romero Ballivián, S. (2003). "CONDEPA Y UCS: El declive del neopopulismo boliviano" en *Revista de ciencia política (Santiago)*, 23(1), 67-98. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2003000100006>

Soliz de Stance, A. (2022). "La relación triangular de América Latina, China y Estados Unidos en la era Trump" en *Humania del Sur*, [S.I.], n. 32, p. 59-74. Disponible en: <<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/humaniadelsur/article/view/18215>

PREMIO: SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2023 - MEDIOAMBIENTE



MAURICIO BALDIVIESO: EL FUTBOLISTA MÁS JOVEN DE UNA DIVISIÓN NACIONAL DE PRIMERA CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN: El futbolista más joven de la primera división nacional es Mauricio Baldivieso (Bolivia, nacido el 22 de julio de 1996), que tenía 12 años y 362 días cuando representó al Aurora FC en el partido contra La Paz en la competición Clausura de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano en el Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia, el 19 de julio de 2009. Mauricio entró como suplente en la segunda parte después de que el entrenador y su padre lo sacaran al campo como regalo anticipado de cumpleaños.



DESCRIPCIÓN: La Boliviana Marisol Mendez y el Argentino Federico Kaplan, con su serie "Miriku", visibiliza a la población indígena Los Wayuu, ubicados en La Guajira, en el desierto costero de Colombia. El cambio climático y la negligencia humana ha llevado a los miembros del pueblo a experimentar una grave escasez de agua.

NOTA: Marisol nació en la ciudad de Cochabamba.

OTORGADO POR: Sony World Photography Awards 2023

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 17/04/2023

OTORGADO POR: Guiness World Records

PUESTO LOGRADO: 1er Puesto

FECHA: 19/07/2009



A pesar de las tensiones coyunturales que enfrenta Bolivia en el año de celebración de su Bicentenario, este libro se centra en destacar los avances notables y a menudo invisibles logrados en las últimas décadas. El libro celebra hitos como la reducción de la pobreza, el liderazgo en movilidad social educativa y los progresos en igualdad de género. El objetivo es ofrecer un testimonio crítico y esperanzador que inspire la confianza colectiva para construir una Bolivia más justa y sostenible.



ISBN 978-9917-9754-6-5

 **UPB**
EDICIONES